morena

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN POLÍTICA

Edición digital

4

Junio, 2022

Conciencias

Pensar la TRANSFORMACIÓN

NUEVOS DESAFÍOS GLOBALES

SOBERANÍA, RENTA Y ENERGÍA
Armando Bartra / Oriol Malló / Alberto Montoya

PROGRESISMOS Y MULTIPOLARIDAD
Gustavo Petro / Iván Cepeda /
Álvaro García Linera / José Valenzuela Feijóo

ARTE

Cuando la pandemia de la covid-19 hizo su aparición en diciembre de 2019, muy pocos imaginaron las implicaciones sociales, políticas, económicas y psicológicas que ésta traería consigo. Lo que se suponía serían sólo algunas semanas de cuidados y precauciones, se han convertido inevitablemente en tres años en los que el miedo y la angustia —acompañadas de millones de contagios y defunciones en todo el mundo— han sido casi tan fuertes como la esperanza, el espíritu de sacrificio y la solidaridad, que son también constitutivas de la existencia humana, y que en México han sido defendidas por un gobierno siempre comprometido con el bienestar de las mayorías. La pandemia es el signo de nuestra época, y con ella han llegado nuevos desafíos globales que nos exigen buscar respuestas y alcanzar soluciones.

En los días de mayor incertidumbre de 2020, las noches de Orizaba, en Veracruz, eran protagonizadas por decenas de hombres y mujeres que, ante la angustia producida por una enfermedad que en realidad desconocían, repetían a diario —desde las azoteas de sus hogares— oraciones cargadas de esperanza, símbolo de unión comunitaria en días de sana distancia. Esta escena, que ilustra la portada de este número 4 de nuestra revista, es la mirada evocadora del artista veracruzano Octavio Sánchez Oropeza, cuyo reconocido trabajo (expuesto individual y colectivamente en México, Estados Unidos, España, Ecuador, Perú y Rumania) nutre también cada uno de los artículos que componen la presente entrega, a veces remitiéndonos a la pandemia, la nueva normalidad y sus múltiples implicaciones, y en otras ocasiones recordándonos la indisoluble relación del ser humano con la naturaleza, manifestada lo mismo en las luchas por la tierra que en los diversos frutos que emanan de ella.

Conocedor de las técnicas tradicionales, dominadas a fuerza de dedicación y constancia, Sánchez Oropeza experimenta con herramientas y materiales que fusiona con aquéllas de forma creativa, y retrata escenas cotidianas que pretenden ser reflejo de una sociedad dinámica y difusa, la que el artista, como un observador invisible, captura al recorrer parques, bares, paradas de autobuses, iglesias, escuelas, calles. Con la inclusión de su obra, *Conciencias* busca refrendar su compromiso de ofrecer a nuestra militancia lo mejor del arte contemporáneo mexicano, ése que con sus trazos visibiliza y dignifica a los de abajo.

EDITORIAL

NUESTRA AMÉRICA VA: ARRANCÓ EL SEGUNDO CICLO DE GOBIERNOS PROGRESISTAS

Hace un lustro, cuando caían los gobiernos de izquierda muchos dieron por terminado el «ciclo progresista» latinoamericano. La derecha lo celebraba, pero también desde la izquierda algunos doctrinarios veían con satisfacción derrotas que habían vaticinado. Escribí entonces que lo que había concluido era la primera oleada de un curso emancipatorio prolongado, que a diferencia de las revoluciones del siglo XX no era lineal sino con avances y retrocesos. Y efectivamente después de un corto invierno neoliberal, se fueron recuperando y ganando espacios gubernamentales. El quiebre fue la elección de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y en rápida sucesión siguieron seis nuevos triunfos comiciales de las izquierdas: Argentina, Bolivia, Perú, Honduras, Chile, Colombia y todo indica que Lula da Silva ganará en Brasil.

Nuestra América va de nuevo, pero los tiempos han cambiado y en esta segunda etapa, además de recuperar las experiencias valiosas de los precursores, habrá que diseñar reformas de segunda generación. Asumiendo, además, que en lo económico los primeros gobiernos progresistas tuvieron viento a favor, pues había crecimiento, y ahora lo tenemos en contra y con turbulencias.

Nuestra América es desde hace un cuarto de siglo el laboratorio de la revolución. Mientras que en el resto del mundo el desgaste del neoliberalismo canónico alimenta movimientos y gobiernos xenofóbicos y neofascistas, entre nosotros y a través de revoluciones lentas y fluctuantes pero persistentes y acumulativas, se abre paso un posneoliberalismo de izquierda que además es bolivariano y de amplitud subcontinental. Y porque estamos haciendo camino hay mucho que debatir: ¿cuál es la función de los movimientos sociales y cuál la de las elecciones en la transición a un nuevo régimen? ¿Cómo lograr que las inevitables tensiones entre gremios, partidos y gobiernos sean creativas y no destructivas? ¿Qué transformaciones puede impulsar el Estado y cuáles corresponden a la sociedad? ¿Hasta dónde puede llegar la redistribución del ingreso sin modificar significativamente el modelo productivo? ¿Cómo recuperar de las trasnacionales las rentas generadas por los recursos naturales sin quedar atrapados en ellas? ¿Qué cambios en la producción y el consumo hay que operar para que el necesario crecimiento sea compatible con el cuidado al medio ambiente y no sigamos abonando al desastre ecológico? ¿Cómo construir hegemonía haciendo de las ideas justicieras y libertarias sentido común, de modo que podamos perder elecciones sin que por ello se pierda el proyecto?

De estos y otros vitales asuntos se ocupa la presente entrega de *Conciencias*. En una primera sección y partiendo de establecer el lugar central que las rentas tienen en el capitalismo contemporáneo, los textos de Armando Bartra, Oriol Malló y Alberto Montoya muestran lo que está detrás de la batalla por la soberanía energética que libra el gobierno de la 4T. En la segunda parte, Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia de 2006 a 2019, nos habla de los nuevos rumbos que marca el segundo ciclo progresista; por su parte, Gustavo Petro, presidente electo de Colombia, ubica a la crisis climática en el centro de los desafíos que enfrentan los gobiernos de izquierda, y el defensor de los derechos humanos y senador colombiano Iván Cepeda nos explica por qué paz, pobreza, cambio climático, corrupción, democracia y latinoamericanismo son los ejes del nuevo gobierno colombiano. Finalmente, José Valenzuela nos ofrece una radiografía de la nueva China, una potencia emergente que ha representado y representará un importante papel en la búsqueda de nuevos caminos emprendida por los gobiernos progresistas del subcontinente.

El primer ciclo del curso libertario de Nuestra América fue el de los «gobiernos progresistas», el segundo será el de las «sociedades emancipadas». A esta histórica tarea quiere abonar el presente número del órgano de discusión teórico-política de Morena.

ARMANDO BARTRA

morena

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN POLÍTICA

MORENA

Presidente: Mario Delgado Carrillo
Secretaria general: Citlalli Hernández Mora
Secretario de formación política: Enrique Dussel Ambrosini

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN POLÍTICA

Presidente: Rafael Barajas Durán
Coordinación académica: Juan Carlos Paizanni
Miembros del consejo interno:

Armando Bartra, Blanca Montoya, Consuelo Sánchez, Elvira Concheiro, Enrique Dussel, Felipe Ávila, Héctor Díaz-Polanco, José Gandarilla, José Valenzuela Feijóo, Karina Ochoa, Katya Colmenares, Paco Ignacio Taibo II, Paloma Saiz, Pedro Miguel

REVISTA CONCIENCIAS

Consejo editorial:

Aldo Guevara, Bernardo Cortés, Carlos López, Cristina Cavalcante, David Pérez, Diego Matus, Fernando Buen Abad, Juan Carlos Paizanni, Mario López, Perla Valero

Editor: David Antonio Pérez Nava
Editor invitado: Armando Bartra
Corrección: Carlos López
Diseño editorial: Manuel Pedrozo
Arte: Octavio Sánchez Oropeza (Orizaba, Veracruz)

Sitio web: www.revistaconciencias.mx /concienciasmx
www.infpmorena.mx

Las autoras y los autores ceden a la revista *Conciencias* del Instituto Nacional de Formación Política los derechos de reproducción y distribución de sus artículos para su divulgación en todos los países del mundo, en formatos impreso y digital; sin embargo, la responsabilidad por lo expresado en los artículos, reseñas y obras visuales es estrictamente de ellos.

Contenido

SOBERANÍA, RENTA Y ENERGÍA

4
LA RENTA PETROLERA (Y LO QUE HAY DETRÁS)
Armando Bartra

17
LAS GUERRAS ELÉCTRICAS EN EL MÉXICO DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN
Oriol Malló

21
TRANSICIÓN ENERGÉTICA SOBERANA DE MÉXICO
Alberto Montoya Martín del Campo

PROGRESISMO Y MULTIPOLARIDAD

29
HACIA UN ENFOQUE DESCARBONIZADO DE LA POLÍTICA
Gustavo Petro

33
EJES Y PERSPECTIVAS DEL PACTO HISTÓRICO EN COLOMBIA
Entrevista con Iván Cepeda Castro

36
DE PROGRESISMOS Y TRANSFORMACIONES
Entrevista con Álvaro García Linera

49
CHINA Y ESTADOS UNIDOS: ¿DEL CONFLICTO ECONÓMICO AL MILITAR?
José Valenzuela Feijóo

La renta petrolera (y lo que hay detrás)

Armando Bartra

Si el aire, el agua, la elasticidad del vapor y la presión de la atmósfera fueran de diferentes calidades, si pudiesen ser apropiados, y cada calidad existiese solamente en cantidad moderada, estos agentes, lo mismo que la tierra, producirían renta... El trabajo de la naturaleza se paga, no porque rinde mucho sino porque rinde poco. En la medida en que se vuelve mezquina en sus dones, exige un precio mayor por su trabajo.[1]
David Ricardo

PREÁMBULO: LA ENCRUCIJADA ENERGÉTICA MEXICANA

Es indispensable mencionar que la historia del petróleo en México ha estado unida a una constante pugna entre el Estado y las empresas extranjeras por el control de los hidrocarburos.
Andrés Manuel López Obrador

México tiene que avanzar en la transición energética disminuyendo y haciendo más eficiente el uso de energía, sustituyendo la contaminante por la limpia y enovable, fomentando la autogeneración... Pero para hacerlo necesita recuperar la soberanía energética perdida, pues mientras la energía sea un negocio transnacional no se podrán racionalizar su generación, ni su distribución, ni su consumo.

1 David Ricardo, *Principios de economía política*, Sarpe, España, 1985, p. 70

El sistema energético es un entramado de enorme complejidad y permitir que lo domine un mercado manipulado por las grandes corporaciones tiene repercusiones catastróficas en lo ambiental, lo social y lo económico como las que hoy vemos en España con las desmesuradas alzas de la electricidad.

Las decisiones referentes a fuentes de aprovisionamiento, a prioridades y a modalidades del consumo de la energía nos incumben a todos y deben pasar por consultas ciudadanas. Pero la gestión de un sistema extenso, complejo y articulado que en todo momento debe operar como un todo orgánico, demanda recursos y capacidades técnicas de orden estatal. Como en el caso del agua, es evidente que el aprovisionamiento nacional, estratégico, justo y sostenible de energía es un asunto que rebasa las posibilidades de la autogestión local, aunque la requiere.

El gobierno de López Obrador tiene el mandato ciudadano de recuperar y reordenar el sistema energético desmantelado y extranjerizado por los neoliberales. Gobiernos que en el ámbito de la energía renunciaron a la autosuficiencia y a la soberanía, por lo que en el caso de los combustibles dependemos dramáticamente de las importaciones, y las leyes que ellos reformaron nos atan para tomar decisiones favorables al interés nacional.

México tiene petróleo y, sin embargo, la dependencia en combustibles ha venido creciendo de modo que hace veinte años era de 40%, mientras que hoy es de 70%. En lo tocante al crudo se descuidó la exploración, disminuyeron las reservas y se redujo la extracción; en lo tocante a los derivados, se dejaron de construir refinerías y de dar mantenimiento a las existentes, de modo que cayó la producción. El saldo es que hoy somos importadores netos, pues el valor de nuestras compras al exterior de gasolina, diésel y gas es mayor que el de nuestras exportaciones de petróleo crudo.

En 2018, el último año del gobierno de Peña Nieto, por compras de petrolíferos salieron del país 30 mil 200 millones de dólares, drenaje de divisas que ni siquiera las remesas provenientes de los mexicanos que viven en el extranjero compensan del todo. Su reforma energética privatizadora y extranjerizante nos quitó soberanía, pero las concesiones que de ella derivaron no aumentaron la producción, ni la inversión, ni el empleo. Los 110 contratos de extracción firmados entonces con particulares están en su mayor parte inactivos; de los 200 mil millones de dólares de inversión anunciados sólo se invirtieron 800 millones (el 0.4%); los tres millones de barriles a los que se iba a llegar quedaron en 1.8 millones, de los que la producción privada aporta sólo el 2.3%, y en cuanto a los buenos empleos que prometieron generar, ni sus luces.

Es claro que el resultado es malo para el país. Pero uno se pregunta, también, si no siempre está en la producción dónde está para las empresas el negocio de las privatizaciones y los contratos. No hay en realidad misterio alguno, su método es el mismo que hace lucrativas las concesiones mineras aun si no se exploran ni se explotan las áreas amparadas: la especulación. Las acciones de las empresas suben con cada concesión se use o no y en otros casos los contratos se venden a alguien que posiblemente tampoco piensa invertir.

En nuestros días, la política gubernamental orientada a recuperar la soberanía energética para asegurar el suministro, mantener bajos los precios, sanear las finanzas públicas e impulsar la transición energética ha sido resistida por las corporaciones. Pero también es criticada por algunos ambientalistas para quienes extraer y procesar petróleo en México atenta contra la necesaria descarbonización.

El argumento es torpe, pues el hecho es que el 83% de la energía que hoy empleamos viene de los hidrocarburos, dependencia cuya disminución urge, pero que será forzosamente gradual. Pensemos, por ejemplo, en los 50 millones de vehículos automotores de combustión interna, la mayoría particulares que circulan hoy aquí, que en gran parte deberán ser sustituidos por transporte público no contaminante y el resto por vehículos eléctricos o híbridos. Hay que darse prisa, pero aun así nos llevará un buen tiempo. Y si consumimos petrolíferos (y por un rato los seguiremos consumiendo), lo más razonable en términos de seguridad, economía y reducción de emisiones contaminantes es producirlos aquí, pues exportar crudos e importar refinados tiene, entre otros efectos negativos, el gasto energético y el impacto contaminante que resulta de llevarlos y traerlos. No nos engañemos, Dos Bocas es parte de la solución, no del problema.

También enoja a ciertos ambientalistas el empleo por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de termoeléctricas que queman combustibles y contaminan. Lo que pasa es que las fuentes de electricidad más limpias y renovables tienen ubicaciones definidas y su producción no es continua. Tal es el caso de las solares que sólo generan en el día, de las hidroeléctricas que generan en lluvias cuando se llenan las presas, es decir en verano, y de las eoloeléctricas que generan más en temporada de fuertes vientos, es decir, en el invierno. Así, en el sureste, donde estos dos últimos recursos abundan, ambas fuentes se pueden y deben complementar. Pero eso no basta; para mantener el servicio continuo y responder a las fluctuaciones diarias y estacionales de la demanda hacen falta generadores flexibles como las termoeléctricas.

Los combustibles son muy contaminantes, pero fáciles de almacenar y conservar; la electricidad no contamina, pero es un fluido cuyo almacenamiento y conservación son menos eficientes y más costosos, de modo que cuando menos por un tiempo el sistema deberá emplear los dos. Y si ha de haber termoeléctricas, es preferible que sean de ciclo combinado y no de las hipercontaminantes que queman carbón.

Es mucho lo que se juega y el debate está abierto. Pero no siempre los argumentos son consistentes, pues lo que está

detrás del interés de las transnacionales en los hidrocarburos y otros recursos naturales de potencial energético son las cuantiosas rentas que pagan y la responsabilidad del Estado que además de garantizar un abasto seguro, justo y sostenible, debe retener la renta y darle un uso socialmente legítimo. Sin embargo, aun cuando es clave para entender el funcionamiento del sistema capitalista realmente existente, el concepto renta se discute poco y con frecuencia se usa mal. Por eso el presente ensayo sobre la renta petrolera pretende ayudar a subsanar esta deficiencia.

UN ACEITE MILAGROSO

> *Y en la frontera con la Georgia hay una fuente de la que surge un líquido semejante al aceite, en tan gran abundancia que a veces un centenar de grandes naves pueden cargarse de él al mismo tiempo; pero no sirve para comer sino sólo para quemarlo. Vienen a buscar este aceite desde muy lejos, y a todo lo largo de este país no se alumbran sino con este aceite*[2].
>
> MARCO POLO

Nuestro mundo es adicto a la energía: específicamente es petróleo dependiente. Desintoxicarnos no será fácil, pero intentarlo es cuestión de vida o muerte. Paradójicamente, para superar la dependencia al petróleo necesitamos del petróleo. Entonces la discusión sobre si los hidrocarburos, su aprovechamiento primario y la renta que generan corresponden a la nación o pueden privatizarse tiene que ver con el patrimonio de los mexicanos y las finanzas públicas, pero también con la soberanía energética. Asunto estratégico, pues de lo que decidamos como nación energéticamente soberana dependerá que podamos o no transitar del insostenible y contaminante derroche basado en los combustibles fósiles a un consumo austero de energías más limpias y menos perecederas. Transición que no es exagerado llamar civilizatoria.

Energía, droga adictiva de la modernidad

En los últimos 30 años la humanidad empleó más energía que en toda su historia previa. Energía proveniente, en gran medida, de los hidrocarburos, cuya combustión altamente contaminante es causa mayor de la crisis ambiental y el cambio climático.

El carbón mineral se utilizaba ya en las primeras máquinas de vapor del siglo XVIII, pero para las de combustión interna hicieron falta los derivados del petróleo. A mediados del siglo XIX se perfora el primer pozo petrolífero, y con este poderoso recurso el siglo XX y lo que va del XXI viven una inusitada aceleración: en un lapso equivalente a 0.05% de la historia de la humanidad, el uso de energía crece 1,600%, la economía 1,400%, el empleo de agua dulce 900% y, al pasar de 2,500 millones a casi 8,000 millones, la población se incrementa más de 300%. Pero a su vez el bióxido de carbono en la atmósfera aumenta 1,300% y las emisiones contaminantes industriales se disparan 40,000%[3].

Según la Agencia Internacional de Energía, para el año 2030 tendremos una demanda de 17 mil millones de toneladas de petróleo crudo equivalente, mientras que en 1980 el consumo era de sólo 6,200 millones. Y la dependencia de los hidrocarburos se mantendrá prácticamente igual. En 1980 las principales fuentes de energía fueron petróleo, 42.8%; carbón mineral, 24.6 %; gas natural, 17%, es decir 84% proveniente de combustibles fósiles; mientras que la proyección para el 2030 prevé que el petróleo aporte 35.2%; el carbón, 24.6%, y el gas, 20.5%, es decir, una baja en la participación del petróleo, pero una dependencia de los combustibles fósiles apenas un poco menor que medio siglo antes: 80%[4].

La existencia de hidrocarburos en la naturaleza es limitada y por tanto siempre hay que tener en cuenta una escasez potencial. Pero el tiempo, modo y severidad con que se presente dependen de la demanda y de la oferta, esta última asociada a factores tecnológicos. Así, la prospectiva para 2030 elaborada por el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos[5], es moderadamente optimista porque nuevos procedimientos extractivos permiten el acceso a depósitos petroleros no convencionales y porque el *fracking*, o fractura hidráulica, hace posible el aprovechamiento del gas de esquistos, del que hay enormes depósitos en Estados Unidos, Canadá, Polonia, China y Australia, entre otros países. Entusiasmo que habría que matizar, pues las tecnologías emergentes son caras y el *fracking* tiene un alto costo ambiental que no debiéramos pagar. De modo que la escasez y los altos precios de los combustibles fósiles llegaron para quedarse.

En el caso del más importante, el aceite mineral, todo hace pensar que estamos ante la inminencia del pico del petróleo, también llamado pico de Hubbert[6], con referencia al geofísico que en 1956 trazó la curva que señalaba la cúspide y caída de la producción petrolera en Estados Unidos. En términos geológicos, la

2 Marco Polo, *Los viajes de Marco Polo*, Editorial Oveja Negra, México, s. f., p. 34-35

3 Véase Víctor Toledo, *Hábitat: del riesgo a la sustentabilidad*, UNESCO, México, 2000, p. 22-23

4 Agencia Internacional de Energía, *World Energy Outlook*, Reportes correspondientes a los años, 2008, 2009 y 2010, París

5 Alfredo Jalife-Rhame, «Bajo la lupa», en *La Jornada*, 26 de diciembre de 2012

6 Véase Jack Santa Bárbara, *The False Promise of Biofuels*, International Forum on Globalization and Institute for Policy Studies, reporte especial, septiembre de 2007

fórmula designa el momento de mayor producción de un yacimiento a partir del cual ésta se reduce. Dicho máximo lo han alcanzado ya muchas regiones petroleras y, según diversos autores, en el nivel planetario es una inflexión en curso o inminente.

Así lo sostiene Jorge Beinstein en un texto escrito en 2015, después de la caída de los precios de los hidrocarburos: «Lo ocurrido desde mediados de la década pasada y más directamente en los dos o tres últimos años no desmiente, sino que confirma la hipótesis del *peak oil*»[7].

La cuestión está en que el nuestro es un mundo petrolizado, y cuando el petróleo fácil se agota, se agota también el ciclo histórico iniciado hace más de 200 años con el despliegue del capitalismo industrial. Orden reprobable por codicioso e inicuo, pero también porque está basado en un ingente gasto de energía. Dispendio que sólo fue posible por la providencial existencia de los combustibles fósiles.

En estas condiciones, pocas cosas pueden ser más importantes que esclarecer la relación económica entre petróleo y capitalismo. Una relación cuya clave es la renta. Y es trascendente porque el enrarecimiento de los hidrocarburos resultante del hambre energética del sistema es parte de un problema mayor: el enrarecimiento del conjunto de los recursos naturales depredados por el capitalismo que nos está adentrando en una crisis general de escasez. Colapso inminente que por sus implicaciones es de carácter civilizatorio. Beinstein comparte esta tesis:

> El agotamiento de los recursos naturales no se limita al caso del petróleo, diversos estudios muestran la rápida reducción de reservas en varios recursos estratégicos. Ugo Bardi y Marco Pagani demostraron en 2007 que, sobre los 57 minerales de la base de datos del US Geological Survey, 11 habían pasado por su pico de producción máxima y ya se encontraban en la fase declinante: mercurio, telurio, plomo, cadmio, potasa, fosfato, talio, selenio, circonio, renio y galio[8].

7 Jorge Beinstein, «Crisis petrolera y declinación sistémica mundial», en *Mundo Siglo XXI*, núm. 36, vol. X, mayo-agosto de 2015, p. 17

8 *ibid*., p. 22

Tres ideas erróneas sobre la renta petrolera

El equívoco más generalizado sobre la renta es confundirla con ingreso neto. Según esto, la renta petrolera sería la diferencia entre el costo de producción y el precio de venta. Versión insostenible que sin embargo repiten personas supuestamente calificadas. Pero, en rigor, la renta no es la diferencia entre el costo y el ingreso bruto sino la diferencia entre el precio medio, o precio de producción, y el precio real de venta que siempre es mayor. La renta no es todo el ingreso neto sino sólo una parte del mismo, la que queda después de restarle la ganancia media.

Otra idea errónea es que la renta petrolera sólo se empezó a ceder a las empresas privadas a partir de las concesiones que se otorgaron después de la reforma energética de 2013. Es verdad que la forma más abierta de transferirla es dejando toda la operación en manos de los particulares. Pero ya antes se les cedía toda o parte de la renta mediante los llamados contratos de riesgo, integrales o «incentivados», en los que, como su nombre lo indica, el contratista recibía un pago proporcional a la productividad de los pozos que había desarrollado. Incentivo o sobrepago que, como veremos, coincide con la renta diferencial, es decir, con el ingreso extraordinario que se origina no en la inversión sino en la fertilidad relativa de los mantos explotados.

Al respecto, los documentos de la Secretaría de Energía emitidos hace 10 años y antes de la reforma no dejan lugar a dudas. En *Prospectiva de petróleo 2012-2026* se lee que «los contratos integrales de exploración y producción permiten la inclusión de empresas nacionales e internacionales para la evaluación, desarrollo y producción de hidrocarburos a largo plazo mediante incentivos por producción (tarifa por barril) y por ahorro»[9].

9 Roberto González Amador, «Abrirá Pemex a la IP la

La tercera confusión se presenta cuando el debate sobre la privatización de las rentas que genera el hecho de que un país tenga recursos petroleros se reduce a la cuestión de si el Estado transfiere o no dicho ingreso a los inversionistas privados que operan en el sector. Según esto, lo único que importa es definir si el Estado va a tratar a los particulares como copropietarios del petróleo que es de la nación, o si se relaciona con ellos como simples prestadores de servicios.

Tratar a los particulares como copropietarios firmando con ellos contratos incentivados o de plano adjudicándoles campos es la forma más inmediata y obvia de privatizar la renta. Pero hay que preguntarse también qué sucede con este ingreso extraordinario —que por los años de la reforma representaba cerca de 8% del producto interno bruto y financiaba alrededor de 30% del gasto público—[10] si en lugar de que se transfiera al contratista queda por el momento en manos de la nación.

Que el Estado capte la renta petrolera no garantiza que ésta no pase a manos del gran capital, pues dichos recursos se van al gasto público que con frecuencia se utiliza para favorecer la acumulación privada. En una segunda vuelta de tuerca, se privatiza la parte de los ingresos extraordinarios que no se transfirieron directamente a los contratistas adjudicatarios del ramo. El destino de la renta petrolera no se decide sólo en los contratos o adjudicaciones que el Estado firma con particulares, se decide igualmente en la forma en que asigna el presupuesto.

Lo primero es garantizar que la renta petrolera quede en manos del Estado. Pero hay que trabajar también para que la asignación presupuestal de esta renta y de otros ingresos fiscales responda a los intereses reales de la nación y no sólo a los del capital privado. De otra manera quizá evitaremos que la renta petrolera se privatice de modo inmediato y directo, pero seguirá siendo privatizada a trasmano y de manera indirecta.

Tenemos, pues, tres confusiones que habrá que evitar. Primera: la renta no es el ingreso neto sino una parte del mismo. Segunda: la renta se privatiza directamente mediante las concesiones y mediante los contratos incentivados. Tercera: la renta se privatiza indirectamente cuando el gasto público se orienta a favorecer los intereses del capital y no los de la nación.

¿Quién paga la renta?

La reforma energética de 2013 se justificó como parte de «una política que incentiva la inversión del sector privado». Y dado que el interés del sector privado en invertir en petróleo en vez de hacerlo, por ejemplo, en fábricas de zapatos, radica en que el petróleo genera rentas, «una política que incentive la inversión» será aquella que ofrezca transferir al capital privado parte o toda la renta petrolera. Privatización mediante concesiones o contratos incentivados que junto con el saqueo de Pemex y de la CFE llevó al estrangulamiento energético en el que nos encontramos y hoy intentamos salir.

Que no se diga que el petróleo mexicano ya no es tan buen negocio. Al respecto, el experto en economía de la energía, José Antonio Rojas Nieto, escribió: «Es altamente probable que, en promedio, los costos (de las nuevas reservas petroleras de México) resulten inferiores a los de los yacimientos más caros, cuya producción sea requerida por el mundo en los próximos 10, 15 o 20 años. Esto le garantizaría ingresos extraordinarios [...] al propietario del petróleo»[11].

Ante la amenaza de que mediante las concesiones ya otorgadas y las que podrían seguirse otorgando en el marco de la ley de 2013 el control de nuestro principal recurso energético siga pasando a manos de los tiburones del mercado petrolero, puede ser útil explicar aquí, didácticamente, de qué bolsillo sale el sobrelucro asociado con los combustibles fósiles. ¿Quién paga la renta petrolera? La renta la pagamos todos, pues viene en el precio de los combustibles y de los bienes y servicios en cuya fabricación, generación o transporte se emplean petróleo o sus derivados.

Como hemos visto, se llama renta a las utilidades extraordinarias que se embolsan quienes hacen negocios con petróleo por el hecho de que es escaso y tiene mucha demanda. Y esas utilidades extraordinarias o rentas contenidas en el precio del crudo, en el caso mexicano son altísimas,

exploración y producción en la zona de Chicontepec», en *La Jornada*, 21 de diciembre de 2012

10 José Antonio Rojas Nieto, «La energía hoy: tercera aproximación», en *La Jornada*, 10 de marzo de 2013

11 *ibid*

pues nueve de cada diez pesos que se pagan por este aceite mineral son renta. Esto es así porque aquí sacar el llamado oro negro cuesta apenas una décima parte de lo que vale en el mercado.

¿Y quién paga esta renta? No la pagan los empresarios que emplean petróleo o sus derivados, pues éstos la cargan en el precio de lo que producen. La renta la pagamos los consumidores finales. La pagamos los que no compramos insumos para producir y vender sino bienes para subsistir. La enorme renta petrolera sale de tu bolsillo, de mi bolsillo y del bolsillo de todos los consumidores. Pagamos renta petrolera cuando compramos gasolinas o nos subimos a un camión, pero también cuando pagamos la luz, pues gran parte de la electricidad se produce quemando combustibles fósiles. Y también hay renta petrolera en el precio de la tortilla, el pan o los jitomates, pues en su cultivo se usan fertilizantes y otros agroquímicos derivados de los hidrocarburos y en su transporte se emplean diésel o gasolina. La renta petrolera no sale del subsuelo cuando brota el petróleo, sale de nuestros bolsillos cuando pagamos lo que con petróleo se produce. Y el petróleo está en todas partes, de modo que compres lo que compres en su precio siempre estará oculta la renta petrolera.

Suponiendo que todos los demás precios se mantuvieran invariables, el alza de la renta (por real escasez, por especulación, o por ambas) se expresa en alza del costo de la vida. Encarecimiento que afecta sobre todo a los trabajadores y equivale a una reducción universal de los salarios. Así, sin mover un dedo y sin tener que contratar a nadie, el capital rentista nos explota a todos. El odio que producían entre la gente los llamados «gasolinazos» estaba más que justificado.

RENTISMO, FASE TERMINAL DEL CAPITALISMO

> *Permitir que el mecanismo del mercado sea el único director de la suerte de los seres humanos y de su medio natural... terminaría en la demolición de la sociedad*[12].
> Karl Polanyi

El petróleo es un recurso natural que se puede extraer y comercializar, pero no fabricar o cultivar. El petróleo es una de las mercancías ficticias —de las que habla Karl Polanyi— que al ser dejadas a la lógica del mercado distorsionan internamente la reproducción del capital y a la vez agudizan la contradicción externa de éste con la naturaleza.

El petróleo está ahí, en el subsuelo, de donde se saca y transforma. Y estos procesos de extracción y procesamiento generan utilidades porque resultan de inversiones. Pero generan también renta: un sobrelucro que se origina en la valorización por el mercado de un bien natural escaso. Utilidad extraordinaria que remite a la lógica interna del capital, pero también a la relación entre economía y naturaleza.

La renta es la forma que adopta en el mercado el beneficio económico que le genera al capital el empleo productivo de un bien natural escaso y diferenciado cualquiera que éste sea. Lo valorizado puede ser tierra, agua, aire, paisaje, biodiversidad, recursos del subsuelo, ubicaciones privilegiadas, espectro electromagnético.

El Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, es importante y atractivo para los inversionistas por cuanto se trata de la zona del continente más estrecha que separa el Atlántico del Pacífico, después de la región centroamericana. Y esta privilegiada ubicación genera rentas. También hay rentas en la industria turística porque apropiarse de un clima benévolo, de un paisaje amable, de una playa, de la tibieza del mar permite valorizar recursos naturales que por ser limitados resultan exclusivos y, por tanto, más preciados. E igualmente se valorizan cosas tan

12 Karl Polanyi, *La gran transformación*, Juan Pablos, México, 1975, p. 112

sutiles como las bandas electromagnéticas; ahí tenemos las enormes rentas que se embolsan las televisoras privadas no por sus inversiones sino por estar usufructuando un bien natural limitado y propiedad de la nación. Y es verdad que así como las inversiones en la agricultura pueden modificar la magnitud y el destino de la renta de la tierra, las inversiones en digitalización amplían el potencial de las televisoras pero no cancelan las rentas que se embolsan quienes usufructúan el espectro electromagnético.

La presencia de la renta en el capitalismo fue analizada por economistas canónicos como Adam Smith[13], David Ricardo[14], Thomas Robert Malthus[15] y Carlos Marx[16]. Y aunque a veces se la ve como rezago del viejo orden feudal, los estudios más incisivos la caracterizaron como fenómeno específico del absolutismo mercantil.

El más claro y certero en este asunto es David Ricardo, que desde las primeras páginas de su *Principios de economía política*[17] se percata de que las rentas meten ruido en la operación de las leyes propias del sistema cuyo funcionamiento se ha propuesto dilucidar. En la sección primera del capítulo I, dedicada al valor, Ricardo establece que la ley de los precios funciona para las mercancías «cuya cantidad puede ser aumentada por el esfuerzo de la industria humana y en cuya producción la competencia actúa sin restricciones»[18], y más adelante insiste en que de esta ley hay que hacer «excepción de las mercancías que no pueden ser aumentadas por la industria humana»[19]. En el capítulo II, se ocupa de la renta del suelo y en el III de la renta de las minas, es decir, de las actividades donde hay «restricciones» a la industria humana porque dependen de la naturaleza y su «potencia original»[20]. El suelo y los minerales son recursos no creados por el hombre que ocasionan «variación del valor relativo de las cosas»[21] por cuanto aparecen como escasos ante las necesidades de la producción social. La renta es, pues, un epifenómeno de la escasez cuando ésta se presenta en el contexto de la producción capitalista: «cuando la tierra es muy abundante, productiva y fértil no produce renta»[22], y «si hubiera abundancia de minas igualmente fértiles, de las que cualquiera pudiera apropiarse, no producirían renta»[23].

Esta variación al alza del «precio relativo» de ciertas mercancías proveniente de que la «potencia original» de la naturaleza resulta diferenciada y escasa respecto de las necesidades de la producción social es un fenómeno que se incrementa en proporción directa de la expansión de la actividad humana. La idea de que las potencias científico-tecnológicas de la industria suplirían progresivamente la «potencia original» resultó inconsistente, lo que se hace patente en tiempos de catastrófico cambio climático, desertificación, saqueo de la vida marina, escasez y contaminación del agua dulce, pérdida de biodiversidad, enrarecimiento de los hidrocarburos fósiles, etcétera. Hoy son escasos los recursos naturales que hace 200 años parecían inagotables.

> ¿No hace la naturaleza nada por el hombre en la manufactura? —se pregunta Ricardo reaccionando a una aseveración en ese sentido de Adam Smith en *La riqueza de las naciones*—. ¿No son nada la potencia del viento y el agua, que mueve nuestra maquinaria y ayuda a la navegación? La presión de la atmósfera y la elasti-

13 Véase Adam Smith, *Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones*, t. I, FCE, México, 1958, sobre todo cap. IV

14 Véase David Ricardo, *op. cit,* caps. I, II y III

15 Véase Thomas Robert Malthus, *Principios de economía política*, FCE, México, 1977

16 Véase Carlos Marx, *El capital*, t. III, FCE, México, 1965, sobre todo caps. XXXVII-XLVIII

17 David Ricardo, *op. cit.*, p. 27-34

18 *ibid.*, p. 28

19 *ibid.*, p. 29

20 *ibid.*, p. 63

21 *idem*

22 *ibid.*, p. 69

23 *ibid.*, p. 79

> cidad del vapor, que nos permite mover las máquinas más estupendas, ¿no son acaso dones de la naturaleza?, sin contar los efectos del calor para ablandar y derretir los metales, la descomposición de la atmósfera en los procesos del tinte y de la fermentación. No puede mencionarse una sola manufactura en la que la naturaleza no proporcione al hombre su ayuda generosa y gratuita[24].

Pero esta generosidad y gratuidad son limitadas, y Ricardo apunta las repercusiones de una escasez que le parece remota: «Si el aire, el agua, la elasticidad del vapor y la presión de la atmósfera fuera de diferentes calidades, si pudiesen ser apropiados, y cada calidad existiese solamente en cantidad moderada, estos agentes, lo mismo que la tierra, producirían renta»[25].

Si sustituimos los factores naturales que enumera Ricardo, por los que dos siglos de expansión productiva han puesto en entredicho, tendremos que reconocer que en nuestros días su situación hipotética se ha vuelto realidad. En el tránsito del siglo XVIII al XIX el problema eran las rentas territoriales; en el arranque del tercer milenio el problema es que cada vez más recursos naturales que aparecen como escasos son «apropiados» —ahora decimos «privatizados»— y generan rentas cuantiosas. Pues, como sabía Ricardo, «el trabajo de la naturaleza se paga, no porque rinde mucho sino porque rinde poco. En la medida en que se vuelve mezquina en sus dones, exige un precio mayor por su trabajo»[26].

Las rentas son directamente proporcionales a la escasez. Y es precisamente la escasez de recursos naturales lo que define la época de descalabros ecológicos que nos tocó. El capitalismo de la crisis ambiental es un capitalismo cada vez más rentista, un capitalismo en el que la plusvalía generada por el trabajo que se desempeña en inversiones productivas se desvía cada vez más al capital básicamente especulativo que valoriza la rareza de ciertos recursos naturales. Flujo de valor perverso que se suma a la explosión de las ganancias generadas por la especulación financiera, para configurar un capitalismo rentista especulativo cada vez más distante del sistema basado en las ganancias industriales que avizoraban Ricardo y Marx.

La renta no es una perversión ocasional, un sobrelucro infrecuente y marginal. Estamos rodeados de rentas. Después de cientos de años de capitalismo, un sistema que debía sustentarse estrictamente en la acumulación de plusvalía generada por la inversión productiva no sólo reproduce sino que amplía las fuentes de ingreso de raigambre precapitalista sustentadas más que en la aplicación de capital, en la apropiación de recursos naturales escasos. Hoy podemos afirmar que el capitalismo realmente existente se reveló como un sistema rentista, donde la inversión productiva es un medio para realizar las rentas y, en especial, para incrementar las diferenciales.

Hay también una renta del dinero: las utilidades que genera la especulación financiera y que son el mayor negocio del capitalismo rentista financiero hoy imperante. La financiarización, sostiene Beinstein, «facilitó la expansión de un fenómeno de tipo parasitario que frena o desordena las actividades productivas, sobre todo los emprendimientos de largo plazo»[27].

Los efectos de esto son mayúsculos y catastróficos, pues la renta tiene un doble efecto disruptivo: hacia adentro del sistema económico distorsiona los procesos de acumulación de capital al premiar no la inversión sino la propiedad excluyente, y desviar una gran parte de la plusvalía total a un sector monopólico y productivamente pasivo; hacia fuera y en lo tocante a la relación entre la economía y el medio, la renta alienta la apropiación predadora de los recursos naturales y sociales, propiciando su desgaste y agotamiento por cuanto el sobrelucro rentista es directamente proporcional a la escasez. Al respecto, Beinstein sostiene que

> la superexplotación de los recursos naturales [...] ha generado en muchos casos dinámicas irracionales, globalmente destructivas, aunque perfectamente «racionales» si las explicamos desde el ángulo de la racionalidad (perversa) instrumental de los grupos de poder dominantes en el mundo. Es el caso de los recursos energéticos saqueados apuntando a su extinción, pese a las numerosas alertas acerca de su peligrosa disminución[28].

La especulación y las rentas son las principales responsables de las crisis económicas y del ecocidio. Están en el origen de la debacle polimorfa a la que, por analogía con la Gran Peste de Londres, la Gran Guerra y la Gran Depresión, he llamado Gran Crisis. El multidimensional estrangulamiento civilizatorio al que hoy se suma la covid-19 es una crisis de escasez; enrarecimiento de los recursos naturales y sociales necesarios para la reproducción de la vida, pero también para la valorización del capital. Y como ya sabía Ricardo, la renta es directamente proporcional a la escasez, de modo que el capitalismo crepuscular de la Gran Crisis es un capitalismo depredador, especulativo y rentista; un capitalismo al que no le preocupa profundizar la escasez, lucra con ella; es un capitalismo suicida.

Al desmedido saqueo se le ha llamado «extractivismo», un concepto no im-

24 *ibid.*, p. 71

25 *ibid.*, p. 70

26 *idem*

27 *ibid.*, p. 19

28 *ibid.*, p. 18

procedente pero puramente descriptivo que no deja ver la base estructural de la cuestión que son las rentas. Concepto que se soslaya, pero al que hay que entrar.

CÓMO SE FIJA EL PRECIO DE LAS «MERCANCÍAS FICTICIAS»

> *El metal obtenido de la mina más pobre que se trabaje debe a lo menos tener un valor de cambio suficiente... para proporcionar los beneficios usuales al capital... El rendimiento que el capital obtuviera de la mina más pobre que no pagara renta regularía la renta de todas las demás minas más productivas*[29].
>
> David Ricardo

El petróleo resulta de cursos milenarios, primero biológicos y luego geológicos. Procesos de fotosíntesis desarrollados por los vegetales a partir de la luz del sol, de los que surge una enorme biomasa que, al acumularse, sedimentarse y ser sometida a grandes presiones, da lugar a los hidrocarburos de los que forma parte el providencial oro negro.

Entonces, ahí hay un «trabajo» —hablando en términos metafóricos—, trabajo biológico y geológico acumulado durante millones de años, cuyo producto fue agotado por nosotros en un lapso no mayor de un siglo y medio. En términos históricos, los «veneros del diablo» de los que hablaba Ramón López Velarde se agotaron. Se acabaron cuando menos los hidrocarburos fáciles, el petróleo barato, aunque nos queda el que está a mil, dos mil o tres mil metros de profundidad y bajo la capa marina; el que está en arenas bituminosas; el que se encuentra en rocas que hay que fracturar; el que se ubica en yacimientos situados bajo ecosistemas frágiles; el que hay que ir a buscar a regiones inhóspitas de Alaska. Pero lo que está fuera de toda duda es que enfrentamos el rendimiento energético decreciente de un recurso natural escaso, diferenciado y no renovable.

Ahora bien, ¿cómo se paga este trabajo biofísico?, ¿cómo se fija el precio del petróleo? En este caso, el método no puede ser el del juego de la oferta y la demanda, un mecanismo que opera más o menos bien con las mercancías de fábrica, pero no con los precios de bienes naturales como el petróleo, o sociales, como el trabajo (cuyo monto no se puede fijar en automático, pues remite a factores culturales), precios con los que se adquieren bienes que han sido transformados en mercancías pero que en sentido estricto no lo son. Y no lo son, pues se producen y reproducen con base en procesos —naturales uno y sociales el otro— externos al sistema económico; procesos cuya lógica inmanente nada tiene que ver con la racionalidad del capital.

En el caso de los bienes naturales, específicamente del petróleo, alguien podría pensar que el precio sí se fija a través del mercado, en un proceso en el que juegan libremente las fuerzas de la oferta y la demanda. Sin embargo, viéndolo más de cerca nos daremos cuenta de que la cotización de este combustible resulta de una correlación de fuerzas y una negociación. Regateo acotado por el hecho de que los costos diferenciales de los barriles provenientes de diferentes regiones, mantos y pozos asignan automáticamente ingresos diferenciales, es decir, rentas diferenciales. Pero estos sobrelucros particulares se establecen sobre la base de los precios generales de las diferentes calidades de petróleo. Precios que tienen que ser suficientes para hacer viable la extracción del barril más caro necesario para satisfacer la demanda, pero que no tienen que fijarse en ese mínimo, pues el grado de monopolio y la capacidad de negociación especulativa de los grandes productores puede elevarlos. Lo que resulta evidente si observamos el comportamiento de las «siete hermanas» —las corporaciones petroleras más poderosas— o si analizamos la política de las principales naciones exportadoras desde 1960, año en que se creó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y empezó a presionar sobre las cotizaciones.

Dicho de otra manera: el precio del petróleo contendrá siempre una renta diferencial determinada automáticamente por las diferencias de productividad existentes en el conjunto de los pozos en explotación, pero puede contener también una renta absoluta especulativa que dependerá de la situación de la oferta y la demanda y sobre todo del nivel de monopolio y la capacidad de chantaje energético que tengan los grandes productores.

En lo que toca a su componente de renta absoluta especulativa, el precio del petróleo es resultado de su abundancia o escasez relativas, pero también de la presión de los grandes productores —privados o gubernamentales— que al monopolizar los mayores yacimientos pueden reivindicar e imponer un sobrepago por el combustible. Su monto está condicionado por la situación del mercado y cuando se generaliza la recesión y se desploman las expectativas de crecimiento de la economía global, también los precios del petróleo pueden caer, pero aunque las condiciones cambien el chantaje energético no se detiene y aun en tiempos recesivos los estados petroleros y las grandes compañías que operan con el crudo siguen presionando sobre las cotizaciones.

Rentas diferenciales

Más allá del precio de venta, que tiene que ver con la disponibilidad total, con las diferencias de fertilidad de pozos y mantos y con la capacidad de presión económica de los extractores, la pura fijación del costo del petróleo es particularmente compleja. Y es que, por una parte, debe incluir el costo de reposición de

29 D. Ricardo, *op. cit.*, p. 79

las reservas detectadas, el trabajo de prospección y exploración, entre otros; pero, en tiempos de escasez y crisis energética, debe considerar también el costo de la transición o conversión a otras fuentes, de ser posible renovables y menos contaminantes.

Un problema de alta sofisticación que supone complejas consideraciones técnico-energéticas y ambientales no puede abandonarse a la ciega operación de la oferta y la demanda —y a las presiones de quienes la manipulan—, so pena de provocar una catástrofe mayor de la que ya tenemos. La salida al atasque energético no está en perfeccionar el mercado de libre competencia sino en acotarlo. Conclusión que se fortalece si profundizamos un poco más en los intríngulis de la renta, distinguiendo entre la absoluta, la especulativa y la diferencial.

La renta diferencial resulta del hecho de que cuando un proceso económico depende de recursos naturales escasos y diferenciados, productos iguales pueden tener costos de producción desiguales. Un litro de gasolina cuesta menos si el petróleo lo sacamos de un pozo que está a mil metros de profundidad, que si está a tres mil metros; si está en tierra que si está en el mar; si está en las aguas someras o si está en las aguas profundas; si el pozo está casi agotado y ya no tiene gas asociado, de modo que hay que inyectarle algún otro gas para que pueda seguir brotando el petróleo; si el aceite que se obtiene es ligero o es pesado. Hay, pues, costos diferenciales: un barril de petróleo contiene diferente cantidad de trabajo e inversión según dónde y cómo se haya obtenido.

Ahora bien, en una economía de mercado que funciona sobre la base de la ganancia, para que pueda seguir produciendo petróleo su precio deberá girar en torno a los costos mayores de producción efectiva y no en torno a los costos medios. Aquí, el pozo menos eficiente, el que produce el barril más caro, es el que fija el precio, no el pozo de rendimiento medio. En las ramas de la producción propiamente industriales, el costo medio más la ganancia media son los que, tendencialmente, definen los precios de mercado, por cuanto el diferencial de los costos está determinado por los sistemas productivos y la tecnología utilizados; recursos por lo general disponibles en el mercado, de modo que las empresas que circunstancialmente tienen rendimientos menores pueden acceder a la tecnología necesaria para aumentar su productividad y hacerse competitivas. El que los precios tiendan a fijarse en la media social obliga a que los que están rezagados se modernicen, mientras que los que en un momento dado van adelante, si no siguen avanzando tecnológicamente, con el tiempo serán alcanzados por el resto. Esta competencia de los que vienen atrás, los que vienen enmedio y los que van adelante —como en una carrera de ciclistas— es la que nos venden como virtuosa porque hace que se desarrolle la tecnología, aumente la productividad y disminuyan los precios. Es la «mano misteriosa» que presuntamente asigna los recursos y ordena racionalmente la producción.

Pero las cosas suceden de otra manera cuando la productividad no depende tanto de la tecnología y de los procedimientos, como de un bien natural escaso, en este caso la disponibilidad y diversas calidades de yacimientos petroleros. En esta actividad, si queremos que siga saliendo petróleo del pozo menos fértil que es necesario mantener activo para abastecer la demanda, tenemos que pagar sus costos. Y como todos los barriles de calidad equivalente se venden a precios iguales, el precio general del petróleo se fijará sobre la base de los costos mayores y no de los costos medios.

Hacia el interior del sector esto significa que el productor en peores condiciones obtiene al menos la ganancia media, pero todos los que tienen ventajas comparativas, es decir, todos los que producen petróleo a costos menores que el más caro, van a obtener un ingreso extraordinario. Ésta es la renta diferencial tal como se les presenta a los productores, un sobrelucro que será mayor cuanto mayor sea la eficiencia relativa de los mantos y pozos de que disponen[30].

Lo anterior hace que el negocio del petróleo sea extraordinariamente lucrativo. El que trabaja en el pozo o el manto menos

30 Al respecto, véase José Antonio Rojas Nieto, «El precio de los productos primarios», en *La Jornada*, 1 de febrero de 2011

eficiente gana, como mínimo, lo normal, lo que podemos llamar una ganancia media. Pero todos aquellos que tienen mantos más o menos privilegiados obtendrán utilidades extraordinarias que además de la ganancia media incluyen una renta diferencial. Y el diferencial de costos que define el monto de esta renta es enorme, pues no depende de factores técnico-económicos sino naturales.

Es la sociedad en tanto que consumidora la que, directa o indirectamente, paga la enorme renta diferencial. Porque todos empleamos artículos de plástico y ropas de fibras sintéticas, porque todos comemos productos agrícolas en los que se emplearon fertilizantes, porque todos dependemos en cierto modo de la gasolina, aunque nos transportemos en bicicleta o en burro. Como sociedad estamos pagando la renta petrolera, y si la retiene el Estado quizá nos la compense, de alguna manera, a través del gasto público, pero si la capta una gran corporación privada le estamos dando un tributo extraordinario a una fracción de capital que es más lucrativa que el resto simplemente porque tiene acceso a mantos petroleros que son recursos naturales escasos.

Renta absoluta

Esa es la renta diferencial, pero ¿qué tiene que ver con la renta absoluta a la que antes nos referíamos? En la versión clásica como la expone, entre otros, Karl Marx[31], la renta absoluta se origina en la posibilidad de que el pozo del que se saca el barril de petróleo más caro se obtengan no sólo los costos de producción y la ganancia media, sino también una renta. Es decir, el peor pozo también puede generar una renta, pues mientras haya demanda insatisfecha de petróleo, hasta el usuario del peor pozo en operación estará en condiciones de valorizar su producto por encima de la ganancia media por el simple hecho de que obtener esos barriles en otros pozos todavía menos fértiles y por ello todavía fuera de la producción tendría costos aún mayores[32].

La renta absoluta no clásica —la que tenemos hoy y que es enorme— tiene que ver con la valorización de la propiedad, pero no sólo la propiedad del pozo menos productivo, sino la valorización de la propiedad sobre cientos, miles, decenas de miles de pozos, sobre extensos mantos, sobre millones y millones de barriles de petróleo y sobre la infraestructura para su extracción, transporte, almacenamiento y refinación. Es decir, se trata de la valorización de un monopolio.

Quienes controlan partes sustantivas de la oferta petrolera tienen una significativa capacidad de elevar los precios, porque los hidrocarburos son bienes naturales escasos, de modo que yo no puedo poner pozos petróleos tan eficientes como los tuyos al lado de los tuyos; así puede operar la industria manufacturera, pero no la industria petrolera. Situación providencial para los que disponen del aceite mineral, que les permite elevar el precio del energético por encima del costo de producción más la ganancia media del pozo menos eficiente. Y este diferencial, que es renta absoluta entendida como renta especulativa, es enorme. Si quieren apreciar de bulto la magnitud de la renta petrolera sugiero que vean el Burj Khalifa, que con sus 830 metros de altura es con mucho el edificio más alto del mundo. Y no está en alguna de las grandes metrópolis de occidente sino en Dubái, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

LOS COSTOS DE LA CONVERSIÓN ENERGÉTICA

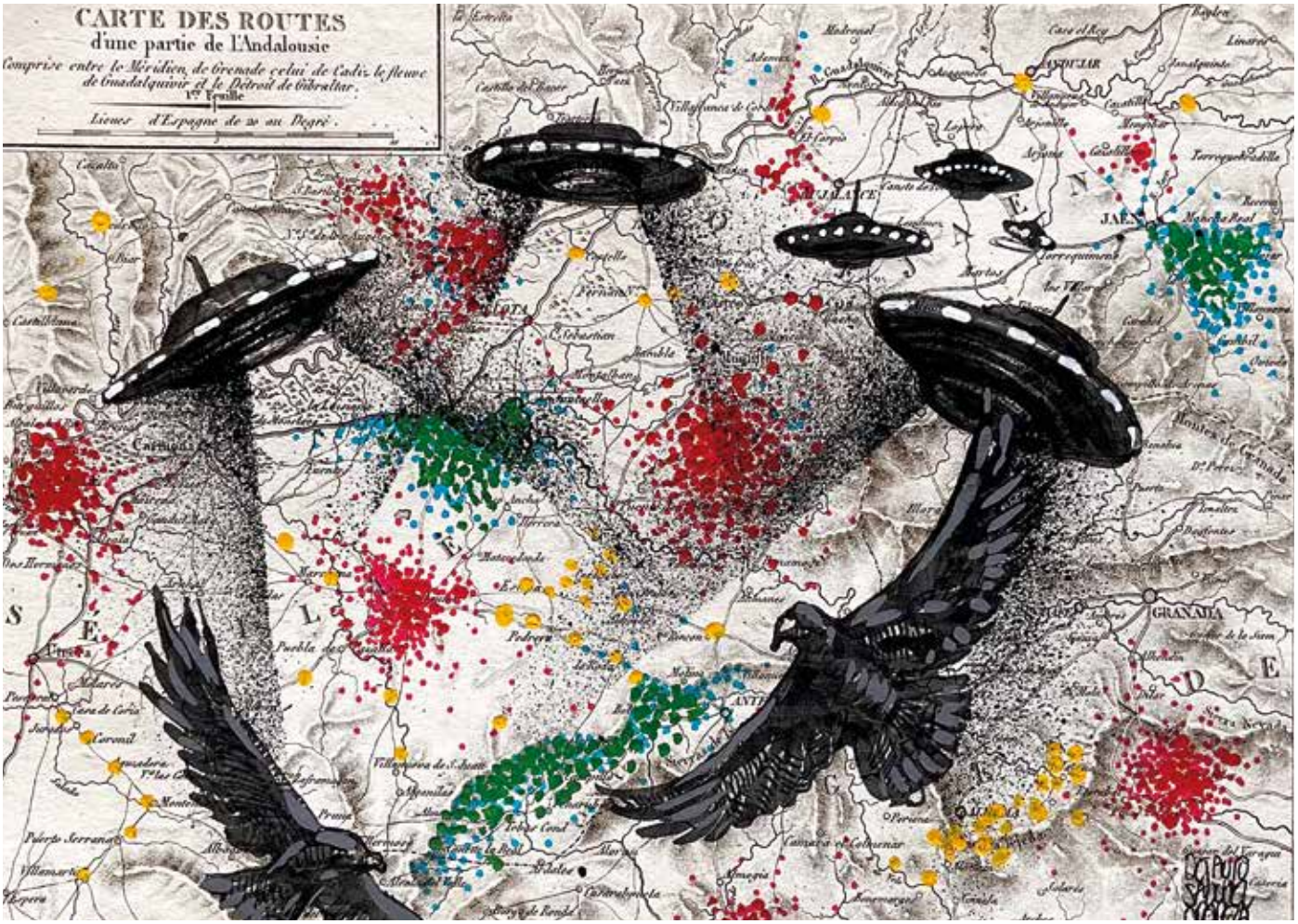
> *El Estado establecerá la transición energética, utilizando de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación, reduciendo paulatinamente las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero y contará con las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para esta transición, impulsadas por el financiamiento y demanda nacional como palancas de desarrollo.*
> Iniciativa para la reforma de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución

El sistema económico que padecemos es insostenible, entre otras cosas por depender excesivamente del petróleo. Debe ser urgentemente transformado. Pero ¿cómo vamos a transitar de una sociedad petrolizada a una sociedad energéticamente sostenible? Porque esta transición tiene un costo que, cuando menos en parte, debiera incluirse en el precio del petróleo que nos queda. La renta petrolera debería servir para financiar la conversión energética.

Adoptando una perspectiva economicista, se podría argumentar que el mercado ya está permitiendo financiar la transición a un mayor empleo de otras fuentes de energía, porque éstas se hacen más competitivas en la medida en que el petróleo es menos abundante y más difícil de extraer y refinar, de modo que sus rendimientos energéticos disminuyen y los costos unitarios de la energía por él generada aumentan. La energía eólica, la geotérmica, la que se puede obtener de las mareas o mediante celdas fotoeléctricas no se descubrieron ayer, pero eran poco competitivas cuando había petróleo en abundancia. Sin embargo, cuando escasea y encarece, esas energías devienen cada vez más viables. Entonces un economista ortodoxo diría que el mercado está permitiendo la transición porque al elevarse los precios de los combustibles convencionales estamos pasando de usar petróleo a usar también, y en mayor proporción, otras fuentes de energía. Pero esto es falso.

31 Karl Marx, *op. cit.*, p. 694-716

32 Para una discusión sobre estos temas, véase Armando Bartra, *El capital en su laberinto. De la renta de la tierra a la renta de la vida*, UACM/CEDRSSA/Ítaca, México, 2006, p. 61-154.



En primer lugar, porque no se trata simplemente de pasar de una fuente de energía a otra: hay muchas fuentes de energía, entre ellas los agrocombustibles y las plantas nucleares, que conllevan serios problemas por sus fuertes impactos ambientales y por el alto riesgo implícito. La conversión energética que se requiere es parte de un replanteamiento civilizatorio. Tenemos que modificar nuestro modo de producir y consumir, de comer y viajar, de sentir y pensar. Necesitamos cambiar el mundo, no sólo el sistema económico sino la civilización humana construida sobre la base del abuso energético. Y una parte de esta magna conversión la tendríamos que financiar con los recursos sociales disponibles a partir de la renta petrolera. Cosa que, evidentemente, no está sucediendo, pues ésta se privatiza.

En segundo lugar, el proyecto económico convencional es equivocado porque una gran parte de la renta petrolera no se la apropian la sociedad o el Estado, que podrían destinarla a financiar la gran transición, sino que pasa a manos de petroestados y grandes compañías. Megaextractores que no sólo saquean el subsuelo, también los bolsillos de la humanidad al adueñarse de un excedente social que resulta mayor cuanto más escaso es el petróleo y más diferenciados son los rendimientos de los pozos. La renta petrolera que se embolsan privadamente ciertos grandes productores y capitales monopólicos aumenta conforme el petróleo se acerca a su agotamiento total; es obvio que estos recursos crecientes no están siendo empleados para facilitarle a la humanidad el tránsito a otro modelo energético y a otro modelo civilizatorio.

Se trata de cambiar de caballo a la mitad del río y este cambio de monturas energéticas cuesta. El problema mayor no está, entonces, en quién se queda con la renta petrolera. Porque si se la embolsa un gobierno de orientación neoliberal o una compañía privada como Haliburton, la diferencia no es muy grande; de todos modos, directa o indirectamente, va a parar en la bolsa de Haliburton y sus semejantes. La cuestión de fondo es que lo que la humanidad está invirtiendo para seguir teniendo energéticos a través de un sistema de mercado que agiganta y privatiza las utilidades debería emplearlo para transitar de un energético a otro y de un modelo productivo a otro.

Los combustibles de origen mineral como el petróleo, el coque o el gas son terriblemente contaminantes, pero, a la vez, de una extraordinaria generosidad energética. Los podemos extraer o almacenarlos allí, en un yacimiento; y una vez extraídos los podemos guardar o procesar; y una vez procesados los podemos conservar indefinidamente; además de que los podemos trasladar adonde haga falta. En cambio, la energía eléctrica no se puede producir y consumir cuando y donde uno quiere, sino cuando hay agua en los ríos que se puede retener en presas, y entonces es hidroeléctrica; o cuando y donde sopla el aire, si es eólica; o cuando y donde hay suficiente luz solar, si es fotoeléctrica; o cuando y donde hay expulsión de calor de la tierra, si es geotérmica; o cuando y donde hay mareas, etcétera. Además de que resulta extremadamente costoso conservar esta energía en baterías y acumuladores, pues tenemos que transformarla en energía química para después volverla a transformar en fluir de electrones.

Nos hemos acostumbrado a depender demasiado de una sola fuente de energía y cuando pensamos en un repuesto pensamos en otro combustible igual que el petróleo, la gasolina o el diésel, pensamos en etanol y biodiésel, es decir, en agrocombustibles. Esto supone que nosotros vamos a reproducir en unas cuantas semanas un proceso en el que la naturaleza invirtió millones de años: que vamos a generar mediante plantas cultivadas materia orgánica capaz de captar y retener energía solar a través de la fotosíntesis, para después transformar esta materia orgánica en alcoholes que pueden ser quemados, como se queman los petrolíferos. Esto se puede hacer de modo muy ineficiente con maíz, como en Estados Unidos; de modo menos ineficiente, empleando caña, como en Brasil; o de manera algo más eficiente utilizando algas, como en Holanda. Pero, finalmente, se está recurriendo a un proceso natural para obtener un combustible que alimentará automóviles y otros artilugios de combustión interna.

Así pues, estamos metidos en una trampa, y si tenemos la voluntad de escapar, la renta petrolera debería ayudarnos a salir menos raspados. Alguno dirá que es contradictorio y hasta obsceno querer emplear en la descontaminación la renta generada por el peor contaminante. Pero es que mientras se extraiga, procese y consuma petróleo una parte sustantiva de la riqueza mundial se irá a la renta. Una renta que puede utilizarse para impulsar la descarbonización o para seguir construyendo edificios altos.

Sin embargo, el hecho es que no sólo no se emplea el ingreso petrolero extraordinario para desarrollar fuentes energéticas alternas, sino que, al contrario, el monopolio privado —o estatal privatizador— maximiza especulativamente el sobrepago por concepto de rentas, y esto lo hace en mayor proporción cuanto más escaso es el recurso natural, más diferenciados sus costos y más monopólica su apropiación. Esta viciosa distorsión especulativa no se origina en el monopolio, sino al revés, el monopolio y las rentas que genera son inevitable resultado de la operación de la lógica mercantil sobre recursos naturales escasos y diferenciados, y más aún, si éstos son no renovables.

En América Latina las rentas están en el centro de un importante debate académico y político. Una de las expresiones del incontenible crecimiento económico global y de su contrapartida, la escasez de los recursos naturales que la hacen posible, es la tendencial carestía de las materias primas. Altos precios que propiciaron la reprimarización de algunas economías emergentes.

Este curso tiende a conformar un modelo de desarrollo que se ha dado en llamar extractivista, y que ha sido acremente criticado por autores como Eduardo Gudynas[33], que ven pernicioso extractivismo en todas las estrategias económicas que aprovechan los altos precios de las *commodities* para capitalizar a un país. Pero el problema está en el fundamentalismo de la crítica, pues con frecuencia se descalifican tanto las estrategias sin duda cuestionables en que las rentas engordan capitales privados, como aquellas otras en que las rentas han sido recuperadas total o parcialmente por los Estados y se emplean para construir infraestructura, fomentar el crecimiento no extractivo y financiar gastos sociales que atenúen la inequidad.

Lo cierto es que en los tiempos de precios altos de las materias primas los gobiernos de izquierda de países como Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Uruguay canalizaron los ingresos nacionales extraordinarios provenientes de las exportaciones agrícolas y mineras a la expansión de la producción no extractiva, del consumo popular y, en general, del mercado interno. Expansión que puede ser sólido pilar de un futuro crecimiento sostenido, incluyente y redistributivo. De ser así, en vez de incurrir en un insostenible extractivismo se estaría empleando la renta para dejar de depender de la renta[34]. Habrá que ver.

Resumiendo: la renta petrolera total es enorme, como enorme es el costo que la humanidad ha pagado por permitir que el mercado y la lógica del lucro decidieran su estrategia energética. Si hemos de rectificar el rumbo cuando aún estamos a tiempo será necesario recuperar este colosal ingreso y ponerlo al servicio de la sociedad y de sus tareas más acuciantes. Tareas que son de orden civilizatorio, pues lo que hoy está en juego es el destino de la humanidad tal como la conocemos.

33 Eduardo Gudynas, «Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual», en varios autores, *Extractivismo, política y sociedad*, Centro Andino de Acción Popular y Centro Latinoamericano de Ecología Social, Quito, 2009, p. 187-225

34 Armando Bartra, *Tiempo de mitos y carnaval. Indios, campesinos, revoluciones. De Felipe Carrillo Puerto a Evo Morales*, Ítaca, México, 2011, p. 151-169

***** Para profundizar sobre la cuestión de la renta, puede consultarse la charla virtual titulada *Armando Bartra: la renta de la tierra*, disponible en el canal de youtube de la Escuela de Cuadros de Venezuela: *youtu.be/acRZJPUaUQQ*

Las guerras eléctricas en el México de la Cuarta Transformación

Oriol Malló

Hay un mundo de resistencias que vive «la ansiedad del colapso»[1]. Hay un universo de capitalistas que saca tajada de la crisis climática. Y hay un país llamado México que, en el sexenio de la Cuarta Transformación, concita la desazón, la ira o el recelo de ambos grupos, del ecologismo militante al capitalismo verde.

En el ambientalismo mexicano no basta que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya frenado aeropuertos, cerveceras, concesiones mineras o plaguicidas como el glifosato. El corazón petrolero y desarrollista de Morena es, para ellos, casi más peligroso que cuarenta años de neoliberalismo sin freno, pues el apoyo y la legitimidad del presidente le permiten retomar proyectos que sus antecesores dejaron bien en papel, como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, bien en conflicto latente, como fue el caso de la central termoeléctrica de Huexca, Morelos.

En este juicio sumario a los megaproyectos del desarrollismo obradorista resalta el polémico Tren Maya, cuya ejecución refleja las tensiones de un gobierno dividido entre Fonatur, principal promotor del negocio turístico, y la «planeación sustentable» de engendros urbanísticos como Cancún, e instancias como Semarnat o Conacyt, enfocadas hacia ordenamientos territoriales desde abajo que eviten el clásico proceso de expolio y degradación de los polos turísticos mexicanos.

Para la vanguardia mediática del capitalismo verde, los propagandistas de *#WeTweetEenergy*, el relato es igualmente siniestro: en vez de avanzar hacia la generación masiva con renovables intermitentes, la sustitución del motor de combustión interna por el coche eléctrico, el impuesto al carbono y la electrificación

1 Pepe del Amo González, «Fisher, Akira y la ansiedad del colapso», en *Medium*, 2021

(privada) de todas las cosas, surge un presidente de corte setentero que propulsa el rescate de Pemex y la creación de refinerías contaminantes. Furiosamente escandalizados, rechazan una obra de gobierno que promueve la sutil renacionalización de la industria eléctrica nacional, rompe el esquema de subvenciones directas e indirectas a productores independientes de ciclo combinado, parques eólicos y solares, castiga los contratos simulados de compraventa de energía limpia entre particulares y redescubre las virtudes del desarrollo endógeno a través del petróleo.

Para los partidarios del «descenso energético», convencidos de que la emergencia climática es la mejor vía para recuperar las «formas de vida de una Baja Edad Media»[2], aferrarse al capital fósil[3] es un retroceso inmoral, criminal y ecocida, pues, al decir de Naomi Klein, estos «monstruos centralizados»[4] del combustible fósil no deben nacionalizarse, sino desmantelarse a cambio, esencialmente, de nada o un descenso —consensuado, se dice— del nivel de vida de esos millones que viven en sus vidas y trabajos el lento declinar de toda perspectiva de un futuro que merezca el adjetivo de digno.

Si estamos cerca del pico petrolero y la escasez de materias primas[5] o en un mar de petróleo por explotar[6] es lo de menos: se nos dice que la descarbonización es la única alternativa, aunque nuestro mundo no pueda existir sin esos derivados del petróleo que los colonialistas internos y las agencias de promoción del capitalismo verde quieren sustituir con supuestas modelaciones 100% renovables que se convierten en negocios con beneficios de dos dígitos y en emergencias cada vez más acuciantes de los sistemas energéticos nacionales donde la seguridad y la soberanía se ponen en riesgo para proteger las inversiones subvencionadas y garantizadas por el Estado de multinacionales como Iberdrola o Sempra Energy.

Algo que señala una y otra vez el más lúcido de los decrecentistas, el físico Antonio Turiel: «intentar mantener sin petróleo un sistema económico con la escala y el volumen actuales es absurdo» porque «no tenemos nada que se le compare en términos de densidad energética, facilidad de transporte, facilidad de carga y estabilidad»[7]. Dicho en palabras cínicas, sólo renuncia a los hidrocarburos quien no los tiene.

Así pues, construir nuevas refinerías en Dos Bocas, Tabasco, tomar el control mayoritario de otra en Deer Park, Texas, y conseguir que las gasolinas sean producidas por Pemex a un precio decente, sin exceso de subsidios, puede ser la mejor solución para aprovechar, en beneficio de todos, el petróleo y el gas que mora en nuestro subsuelo y casi siempre se ha exportado crudo y desvalorizado para surtir refinerías estadunidenses o desaprovechado, como el gas asociado en los yacimientos de Pemex o las reservas de la Cuenca de Burgos, en una política de alineación texana que convirtió Houston en rectora y controladora final del suministro de gas natural a través de gasoductos privados que otorgan a este estado sureño un poder discrecional.

Combinado con los intereses geopolíticos de Estados Unidos de garantizar sus ventas de energéticos a la Unión Europea para golpear al enemigo ruso, esta agenda coloca a México en una peligrosa disyuntiva y pone en evidencia las cuentas alegres del neoliberalismo azteca y sus proyecciones de un mercado integrado con el vecino del norte donde seríamos poco más que comisionistas agradecidos del *lobby* texano y su molécula siempre barata. Cuando en febrero de 2021 el gobernador de Texas decidió suspender, en forma unilateral, toda exportación de hidrocarburos tras el colapso invernal, al lado sur de la frontera supimos con toda crudeza lo que significa estar a la merced de otro país. Y así como sucede con el gas, pasa con el petróleo y también con los sistemas eléctricos privatizados. Sin control, planeación y gestión pública de los insumos básicos para la vida de las naciones, no existe soberanía energética más que en el papel.

Aunque ambos extremos de la doctrina del choque climático apuestan por una política de reducción, castigo y desmantelamiento del capital fósil, donde este capital está socializado al servicio de los trabajadores y de la patria, nada puede ser más suicida y colonial que entregar a intereses extranjeros y particulares las llaves de un desarrollo que redunde en beneficio de todos. El petróleo es también un parteaguas que marca la diferencia entre la dependencia colonial o la soberanía nacional. ¿Hace falta recordarlo?

Cuando los teóricos del decrecimiento, como Jason Hickel, perciben que la clave del capitalismo de ayer y hoy es la promoción de una artificial escasez de todas las cosas mediante la apropiación privada de los bienes públicos, la respuesta no puede ser una renuncia generalizada a la explotación de la naturaleza, sino el uso racional y colectivo de esos recursos para fomentar un suministro abundante y accesible de todas las fuentes energéticas primarias y secundarias en un proyecto de gobierno que guarde y expanda las promesas de una modernidad sin coyotes, agiotistas y mercaderes de electro-

2 Vicente Gutiérrez Escudero, «La intensidad de una verdad: la importancia de la emergencia energética para afrontar el colapso del capitalismo fosilista», en *Viento Sur,* 2021

3 Andrés Malm, *Capital fósil. El auge del vapor y las raíces del calentamiento global*, Capitán Swing, España, 2020

4 Naomi Klein, *Esto lo cambia todo: el capitalismo contra el clima*, Paidós, España, 2015

5 Antonio Turiel, «De fanáticos y perdedores», en *The Oil Crash*, 25 de julio de 2021

6 Antonio Cerrillo, «Las petroleras se resistirán a la descarbonización», en *La Vanguardia,* 30 de junio de 2021

7 Manel Riu entrevista a Antonio Turiel, «El petroli caurà a la meitat en cinc anys... i la crisi del 2008 serà una broma», en *El Crític,* 14 de enero de 2021

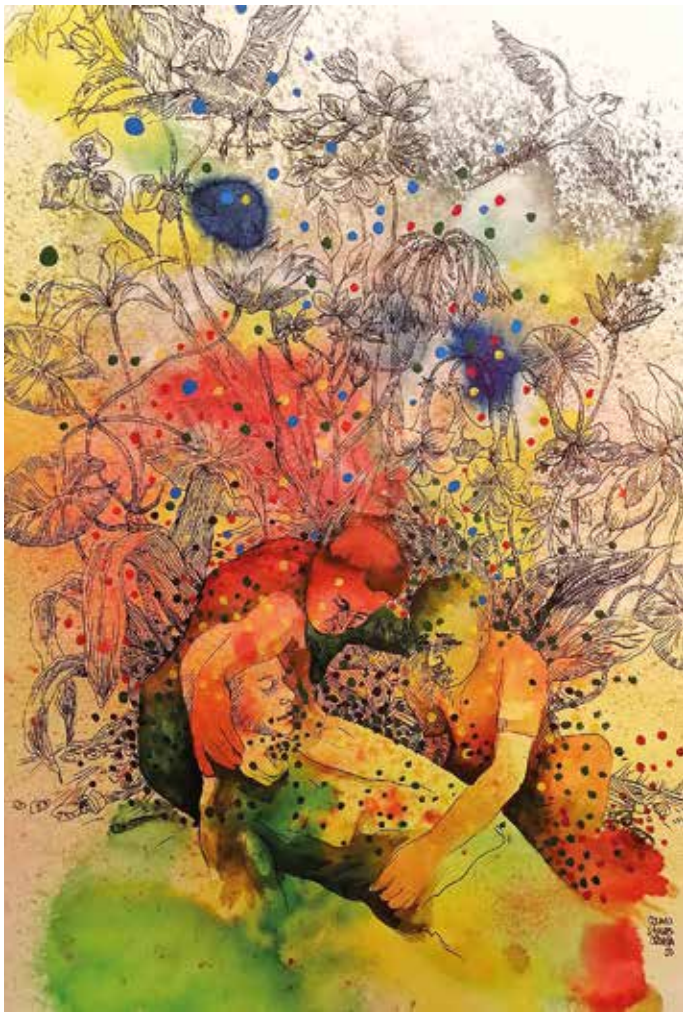
nes o hidrocarburos que definan, a su libre albur, el precio que el resto pagamos por simplemente sobrevivir[8].

Entre el decreto de expropiación petrolera que firmara en 1938 Lázaro Cárdenas y la nacionalización de las minas de los magnates del estaño, decretada por Paz Estenssoro en 1952, la lucha por la recuperación de las riquezas del subsuelo fue una constante que permeó en la memoria de los pueblos americanos; y lo mismo sucedió con los sistemas eléctricos nacionales que sólo al hacerse públicos pudieron cumplir con el objetivo —siempre pospuesto por los privados— de que los beneficios de la corriente alterna llegaran hasta las áreas rurales y al conjunto de una población a partir de una clara y precisa definición de la electricidad como un derecho humano que no puede ni debe subordinarse al pecuniario interés de los capitalistas.

Luego, todo ese entendimiento del mundo cambió y el espíritu prometeico y transformador del nacionalismo energético menguó en pos del retorno a los mercados y la regresión a la comunidad. En menos de una década, una pléyade de movimientos sociales «abandonó sus llamamientos históricos a la expropiación, la nacionalización y la propiedad colectiva de los medios y productos de la extracción (...) y abrazaron el antiextractivismo»[9]. Esta transformación que Thea Riofrancos estudió para el caso ecuatoriano durante la presidencia de Rafael Correa (2007-2017) se reprodujo en el escenario boliviano con el conflicto por la carretera del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure.

En distintos formatos, esta nueva doctrina se ha propagado por todos los países del continente y la propia evolución del Ejército Zapatista de Liberación Nacional —del nacionalismo energético posrevolucionario a la negación simultánea del capital y el Estado (o la equiparación de CFE con Iberdrola)— comprueba esta ruptura histórica entre corrientes políticas que compartieron un mismo horizonte antimperialista. En el olvido quedó una de esas verdades históricas que pocos gustan de recordar. Fue la rectoría del Estado sobre los hidrocarburos y el monopolio público de la energía eléctrica lo que en México, como en muchos otros países liberó las fuerzas productivas y mejoró la vida de los ciudadanos al expropiar o limitar el poder de una clase rentista que controlaba los recursos naturales y sometía de facto a los gobiernos. Como recordaba Michael Hudson, mantener los servicios públicos bajo el dominio estatal es «impedir que se conviertan en vehículos para la extracción de rentas»[10], algo tan fundamental que define la mera posibilidad de convertirse en nación o seguir siendo protectorado funcional a los imperios realmente existentes.

Una transición energética basada en revertir las nacionalizaciones petroleras y eléctricas del siglo XX, o en fantasías comunitarias de generación distribuida, sin alternativas de progreso para las masas empobrecidas, allana el terreno para una doctrina del choque climático que empobrecerá aún más a los países en vías de desarrollo. Y entiendo por choque climático el conjunto de normas, sanciones e impuestos de obligado cumplimiento, promovidas por organismos no democráticos con derechos de injerencia en todo el mundo. Estas medidas de excepción se imponen a partir de una emergencia climática cuyas bases científicas no están sujetas a discusión, pues «el corrosivo tribalismo de la ciencia climática»[11] exige ceñirse a un consenso sin fisuras, tal y como probó la flamígera cargada contra *Unsettled*, el reciente ensayo dudacionista de Steven



8 Leigh Philipps, *Austerity Ecology & The Collapse-Porn Addicts A defense of Growth, Progress, Industry and Stuff*, Zero Books, Inglaterra-Estados Unidos, 2015

9 Thea Riofrancos, *Resource Radicals: from petro-nationalism to post-extractivism*, Duke University Press, EU, 2020, p. 6

10 Michael Hudson, «The World's Absentee Landlord», en *Michael Hudson On Finance, Real Estate and the Power of Neoliberalism*, 13 de mayo de 2021

11 Tom Chivers, «Can we trust the climate scientists?», en *UnHerd*, 26 de julio de 2021

E. Koonin, quien fuera subsecretario de Ciencia con Barak Obama.

En otras palabras, y jugando a polemizar, diría que el «obsoleto programa setentero» del presidente Andrés Manuel López Obrador no niega las aportaciones del ecologismo político ni rechaza de plano las renovables intermitentes, como demuestra la planta solar de propiedad pública que se creará en Puerto Peñasco, Sonora, para el 2023. Forzar la «separación del poder económico del poder político», como insistentemente afirma López Obrador, implica también romper una espiral de privatizaciones que pone en riesgo desde la estabilidad de la red de alto voltaje a la seguridad energética del país, razón de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica o la Ley de Hidrocarburos, ahogadas en amparos, cuyo fin es recuperar el espíritu del artículo 27 constitucional que antes de las contrarreformas neoliberales erigió un modelo de dominio directo de la nación cuya aplicación a los hidrocarburos y a la industria eléctrica detonó en gran parte el milagro mexicano.

Seguir el consenso de Washington tuvo terribles y profundas consecuencias para México. Repetir el mismo error en tiempos de consenso climático sería igualmente funesto. Los molinos de sangre de La Ventosa aportarán energía limpia a gigantes de la contaminación como Cemex, pero la tarea de un gobierno de izquierdas no consiste en respaldar estas defraudaciones fiscales sino en evitar que la mafia del poder o los gerentes del capital sigan explotando mano de obra a precio de esclavo, mantengan el derecho a contaminar acuíferos y sigan desangrando al Estado emprendedor, entre subvenciones a fondo perdido e impuestos condonados. Y para todo ello se necesitan hidrocarburos. Como dijera Branko Milanović, si en Noruega no renuncian a los combustibles fósiles, porque allá como acá nadie quiere empobrecerse para salvar el planeta, entonces, «¿qué tipo de argumentos planean utilizar para convencer a México, Gabón, Nigeria, Rusia de reducir la producción de gas y petróleo?»[12].

Atrapados entre los persistentes propagandistas de Iberdrola y los decrecentistas de un país sin crecimiento, la única respuesta a la política energética del gobierno de México es una gran negación que conforta los espíritus, pero inhibe el esencial acompañamiento crítico que académicos, intelectuales o luchadores sociales podrían aportar a un proyecto de transformación que es, pese a todos los pesares, el último dique de contención contra todos los intereses fácticos que deciden casi siempre por nosotros y contra nosotros.

Recientes sentencias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde por falta de mayoría calificada se sostuvo la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica de 2021, o la alianza de todas las oposiciones para desbarrancar el 17 de abril de 2022 la reforma constitucional en materia energética —propuesta por el presidente de México al Congreso de la Unión—, sólo demuestran que las guerras eléctricas del siglo XXI se mueven en los mismos referentes del siglo XX, salvo que los agentes y promotores del capital internacional que en aquel entonces representaba la Royal Dutch-Shell y otras *hermanas* petroleras, revisten hoy de un verde intenso, cínico y climático sus trabajos de consultoría, puertas giratorias y colusión con Iberdrola y otros jugadores del capitalismo verde en tierras mexicanas.

Al fin, los mismos que claman contra la *#LeyCombustóleo* se movilizan contra los cambios de la NOOM-001 de la Semarnat que limitó los contaminantes permitidos en las descargas de aguas residuales y provocó una cascada de indignadas reacciones por parte de las organizaciones patronales de la industria; sí, esas mismas que promueven centrales solares y eólicas de autoabastecimiento remoto para no pagar sus facturas de luz a la CFE.

Aunque el ecologismo institucional de Cemda o Greenpeace defiende en tribunales las plantas de esos contaminadores de ríos y acuíferos, la conversión del ambientalismo en vanguardia de la gran industria nacional es sólo una evolución —irónica, sin duda— de esas prácticas de paternalismo colonial y tutela imperial que por dos siglos bascularon entre la propaganda y la intervención, entre la deuda externa y el golpismo interno, para impedir que la causa de los pueblos pasara de las palabras a la realidad. En la disputa por la nación, repitieron los guardianes de la transición mexicana que todo estaba ya dicho gracias la integración total con Estados Unidos y sus área de influencia, pero resultó que en la hegemonía discursiva se abrieron brechas reales desde 2018.

Que todo vuelva a ser como antes. En eso siguen. Y contra eso debemos seguir también los que, desde la trinchera opuesta, sabemos que sólo podremos ganar el futuro si recuperamos los logros del pasado. Si algo habrá probado este sexenio de rupturas a medias es que el menor de los cambios tiene un elevado costo ante una maquinaria de Estado que lleva cuarenta años en el poder real y desafía, con todas sus armas, al poder sexenal cuando, por una vez, no es correa de transmisión.

Las guerras eléctricas del siglo XXI en México reiniciaron su curso en 2018. Desde entonces, con grandes logros y dolorosas pérdidas, la lucha se sostiene y por primera vez Iberdrola pierde contratos, influencias y tajada de privilegios. Siempre que esa lógica nacionalista trascienda el 2024, podrán aquellos que como Rafael Galván (1919-1980) batieron el tambor del alba cuando la noche aún no se retiraba, ocupar su lugar en la memoria más necesaria de todas: la que se nutre de victorias concretas y reales sostenidas en el tiempo.

12 Branko Milanović, «Is Norway the new East India Company?», en *Global Inequality,* 23 de julio de 2021

Transición energética soberana de México

Alberto Montoya Martín del Campo

La iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentada en 2021, no alcanzó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados por una traición a la patria de una coalición de partidos que representan e imponen cínicamente al pueblo de México y su soberanía los intereses económicos y geopolíticos de empresas y gobiernos extranjeros[1]. Contrario a la propaganda de estos sectores, la iniciativa exponía una transición energética soberana de México con el fin de sustituir la energía primaria fósil por electricidad renovable y nuclear, pues para detener el cambio climático e impedir una catástrofe para la vida en el planeta —causada principalmente por las grandes potencias— se debe sustituir el sistema energético fósil.

Las potencias están llevando a cabo esta transición y desarrollando una nueva economía, por eso ambicionan la propiedad y control de los sistemas eléctricos y economías del mundo. Para ello intrigan, financian y crean aliados empresariales y políticos.

A pesar de la traición a México, se deben establecer de inmediato las bases jurídicas, políticas públicas y acciones que requiere esta transición, ya que para nuestra nación ésta es un imperativo histórico que le permitirá garantizar la autosuficiencia eléctrica y energética en el siglo XXI, con energías renovables y nuclear.

México puede y debe realizar la transición de manera autónoma, sin injerencia o subordinación a ninguna potencia extranjera. Será, además, la más importante palanca de desarrollo

1 Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano

en el siglo XXI. Se debe consolidar el sistema eléctrico nacional que desarrolló el Estado mexicano en el siglo XX, así como detener y revertir la reforma constitucional privatizadora y extranjerizante de 2013 y restablecer la electricidad como servicio público sin fines de lucro, constitutivo de la seguridad nacional y la soberanía. Todo esto a cargo del Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A la reintegración de generación, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica (como proceso integrado a cargo del Estado), se deben incorporar de manera planificada y acelerada energías renovables y nuclear para reducir emisiones de efecto invernadero y sustituir el 87% de energía primaria de nuestra matriz energética en los próximos treinta años. Se requiere producir con capacidades nacionales la ciencia, tecnología, ingeniería, industrias y servicios del nuevo sistema eléctrico sustentable, mediante una política industrial de Estado que produzca equipos de generación renovable, almacenamiento, sistemas, infraestructuras, así como una industria automotriz de capital nacional. Todo ello sobre la base del financiamiento y el mercado nacional.

La transición soberana de México impulsará el renacimiento económico nacional, aumentará el mercado interno, impulsará nuestra ciencia y tecnología, creará miles de empresas públicas, privadas y sociales de capital nacional, que pagarán impuestos al Estado mexicano y generarán millones de empleos, para reducir nuestra dependencia tecnológica, comercial, económica y política.

Ésta es una oportunidad histórica única para desarrollar nuestras capacidades como nación, con dos soportes: la CFE y una política de Estado que coordine atribuciones y recursos del Estado e impulse la participación de los sectores social y privado de capital nacional en actividades no estratégicas. La transición de México, además, puede contribuir en esfuerzos compartidos para crear la ciencia, tecnología e industrias para lograr la transición y emancipación de América Latina y el Caribe. En cambio, de no llevar a cabo una transición, México involucionará hacia una dependencia estratégica neocolonial que vulneraría gravemente la soberanía nacional y cancelaría el presente y el futuro de todos los mexicanos, especialmente de las nuevas generaciones.

DETENER EL CAMBIO CLIMÁTICO ES UN IMPERATIVO DE SUPERVIVENCIA HUMANA

Detener el cambio climático es un imperativo ético y vital para el mundo. La actividad humana en los últimos dos siglos ha aumentado de manera exponencial la temperatura de la tierra. Las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero (GCEI) acumuladas en el mundo de 1850 a 2021, y las que se sumarían en los próximos veinte años, obligan a todas las naciones a su reducción drástica e inmediata para detener el cambio climático (CC).

El último siglo ha sido el más caliente de los últimos 100,000 años. El panel intergubernamental para el CC concluye que es indispensable impedir que aumente la temperatura de la superficie terrestre en 1.5° para el año 2040, en relación con 1850. Si no se logra, será imposible detener el aumento en 2° a partir de 2050[2]. Este aumento sería catastrófico para el planeta, el clima y los ecosistemas, y pondrá en riesgo la vida sobre la tierra, la producción de alimentos y asentamientos humanos en costas y ciudades. En el año 2100 podrían desaparecer la mitad de las especies vivientes[3].

La causa principal del cambio climático antropogénico, junto con la deforestación, es el 84% de energía primaria de la matriz energética del mundo, que es de origen fósil y emite GCEI. Por eso, para atajar esta amenaza las naciones deben suprimir su principal causa: en el 2050 se debe sustituir el 84% de la energía primaria fósil del actual sistema energético con electricidad como energía secundaria proveniente de energías primarias renovables y nuclear.

El sistema energético fósil procesa energías primarias de la naturaleza (yacimientos) y las convierte en energías secundarias (combustibles o energía térmica). El sistema incluye sus infraestructuras de almacenamiento, transporte y equipos para usos finales, como automóviles o centrales eléctricas. La economía energética incluye el financiamiento de toda la cadena productiva, así como sus industrias y servicios. Todo esto cambiará en los próximos treinta años, pues la transición energética es simultáneamente un cambio de sistema energético y de sistema económico. La electricidad es el sistema energético del siglo XXI y del futuro de la humanidad.

Las grandes potencias son las principales causantes del cambio climático y tienen el deber de hacer su propia transición. Estados Unidos, con sus emisiones acumuladas, es el principal responsable del CC con un 20%; China le sigue con 11.4%. México, América Latina y el Caribe deben hacer su propia transición energética soberana; esta coyuntura histórica abre extraordinarias oportunidades para desarrollar el nuevo sistema energético y la nueva economía que le dará sustento.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA DEL MUNDO

Para Estados Unidos, la Unión Europea, China y otros países la transición es cuestión de seguridad nacional. El contencioso entre Rusia y Ucrania ha mo-

2 IPCC, *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*, 2021

3 Jeremy Rifkin, *El Green New Deal Global*, Paidós, 2020, p. 11

tivado políticas para reducir la dependencia energética y en particular del gas y petróleo importado. Todas las naciones reconocen ahora la autosuficiencia energética como objetivo estratégico sustancial, económico, político y geopolítico.

La transición energética del mundo obliga al crecimiento exponencial de la electricidad, lo que requiere un nuevo sistema energético y una nueva economía que cambiará las relaciones de poder internacional. Las potencias ya establecieron políticas científicas, tecnológicas e industriales para el nuevo sistema eléctrico, porque son determinantes del poder y soberanía de las naciones, así como para el acceso, propiedad, industrialización y precio de minerales estratégicos para la transición, como el litio. Como estrategia política, las potencias exigen a otras naciones la eliminación de sus emisiones, cuando ellas son las principales causantes. Pero su objetivo político y económico es controlar la propiedad de los sistemas eléctricos de otros países, impedir el desarrollo de su ciencia, tecnología e industrias propias y apoderarse de sus mercados.

El sistema financiero da creciente prioridad a inversiones en energías renovables y provocará una declinación gradual del valor de los activos de energía fósil. La industria automotriz evoluciona rápidamente a la electromovilidad y se propone controlar el litio y otros minerales estratégicos para el almacenamiento de electricidad. Por eso, ante el cambio del sistema energético y su nueva economía, así como los cambios geopolíticos a nivel mundial, México tiene dos opciones para su futuro: ser convertido en colonia económica dependiente, sin poder nacional, soberanía, libertades y derechos humanos o establecer una transición energética soberana.

NECESIDAD DE UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA SOBERANA DE MÉXICO (TES)

México se debe hacer cargo de sus emisiones de efecto invernadero: 1% del mundo. Si México no establece una transición soberana, las políticas expansionistas e injerencistas de las potencias representan la más grave amenaza a la soberanía nacional en el presente siglo.

La energía no es un sector económico, sino la base económica, técnica y estratégica de todo el sistema económico, institucional, educacional, de salud, transporte, comunicacional y de poder de todas las sociedades modernas. Es también por ello que México está obligado a una transición soberana, porque no tiene autosuficiencia con energía fósil. En 2021:

1. La matriz de energía primaria de México es 86.9% fósil, 11.25% renovable y 1.85% nuclear.
2. No obstante, México tiene un 87% de autosuficiencia energética. El 13% importado se reducirá a partir de 2024, con la autosuficiencia en combustibles.
3. Con sus reservas de hidrocarburos México no puede alcanzar la autosuficiencia, pues solamente pueden garantizar la autosuficiencia en combustibles hasta 2031. Posteriormente declinará.
4. México tiene dependencia estratégica del gas importado: en 2021, las importaciones por gasoductos representaron el 76% del suministro total de gas natural. El gas sustenta el 57.7% de la generación eléctrica.
5. A futuro, México no puede alcanzar la autosuficiencia en gas, lo que representa una amenaza para la seguridad nacional.
6. Con el hidrógeno verde generado con energías renovables, México puede reducir esta dependencia, pues es posible quemar mezclas de gas natural e hidrógeno o sólo hidrógeno, sin emisiones, con nuevas turbinas.

La electricidad, energía secundaria, se genera en México en un 70.40% con energía fósil, 25% con energía renovable y 3.5% nuclear. La transición energética soberana de México, en ese sentido, requiere crear un sistema eléctrico de tal magnitud que permita sustituir los combustibles que hoy se producen con 87% de energía primaria fósil, mediante electricidad proveniente de energías renovables y nuclear.

El futuro para México es muy promisorio, porque dispone de recursos naturales extraordinarios para la generación eléctrica con energías renovables fotovoltaica, eólica, oceánica, geotérmica, biomasa, hidráulica, entre otras, así como energía nuclear. Disponemos de energías renovables extraordinarias, lo que constituye una condición excepcional de la cual no disponen otras naciones. Para convertirlos en sustento de una nueva realidad energética y económica es indispensable establecer una política de Estado para la transición.

PRINCIPIOS POLÍTICOS Y GEOPOLÍTICOS DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA SOBERANA

Los principios políticos y geopolíticos necesarios son:

1. Rectoría del Estado sobre la transición, sin injerencias ni sujeción a potencias extranjeras.
2. Fortalecer la autodeterminación económica, seguridad nacional y soberanía de la nación y emanciparse de cualquier dominación tecnológica, energética y económica.
3. Ser potencia económica por nuestros propios medios para satisfacer las necesidades de alimentación, salud, trabajo, energía y derechos humanos de los mexicanos, sobre la base del sistema eléctrico nacional a cargo del Estado y de la política industrial de Estado para la transición.
4. Suprimir la dependencia estratégica de la nación establecida mediante la reforma energética de 2013.
5. Derogar la reforma constitucional energética privatizadora universal de hidrocarburos y electricidad de 2013, que tiene como únicos beneficiarios a empresas, fondos y gobiernos extranjeros mediante rentas extraordinarias, subsidios, despojo del patrimonio y del funcionamiento económico del sistema eléctrico nacional y de la CFE, pago de tributos del pueblo de México a través de los certificados de energías limpias, nulo pago de impuestos al Estado mexicano y mercados monopólicos.
6. Que el Estado garantice la autosuficiencia eléctrica sustentable como derecho humano del desarrollo y condición inherente de soberanía y seguridad nacional.
7. Obligación del Estado de abastecer energía eléctrica sustentable a toda la población, como condición para el ejercicio de sus derechos humanos.
8. Reintegrar en la Constitución la electricidad como área estratégica y servicio público sin fines de lucro a cargo del Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad, que incluya la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica.
9. Establecer a la CFE como organismo del Estado responsable de la planificación y ejecución de la transición en materia de electricidad.
10. Planificación de la transición a treinta años, con actualizaciones anuales, que garantice en todo momento la autosuficiencia energética de la nación durante el proceso de sustitución gradual del sistema energético fósil por electricidad proveniente de energías renovables y nuclear, que incorpore la planificación de la reducción y eventual eliminación de GCEI.
11. Garantizar en una primera etapa para el 2032 la autosuficiencia en combustibles para el parque vehicular de combustión estimado en 45-50 millones de vehículos.
12. Establecer y desarrollar el conglomerado industrial y de servicios durante la siguiente década (2022-2032), para estar en capacidad de avanzar hacia la segunda fase de la transición 2033-2050, que requerirá aumentar la generación de electricidad a tasas del 12% anual, lo cual cuadruplica el 3% observado en los últimos veinte años.
13. En ese momento ya se dispondrá de capacidades nacionales en ciencia, tecnología e industrias, las cuales podrán aumentar la escala de su producción y satisfacer este aumento exponencial de la demanda.
14. Crear, sin intervención extranjera, la nueva economía de la energía, para que el Estado mexicano pueda garantizar bienestar, empleo, igualdad, justicia y libertad.
15. Política educativa que incorpore la transición como contenido y proceso formativo significativo, que prepare a los niños y jóvenes como sujetos y beneficiarios del nuevo sistema energético basado en la electricidad, y que puedan participar en procesos productivo-formativos del conglomerado industrial.
16. Política científica que produzca los conocimientos, la propiedad intelectual y el usufructo económico a favor del Estado de las tecnologías críticas de la transición.
17. Política industrial de Estado para construir el conglomerado mexicano de la transición, responsable de producir tecnologías, bienes de capital y servicios para la generación eléctrica central y distribuida, sistemas informáticos, inteligencia artificial, sistemas de geoposicionamiento, nueva red eléctrica inteligente, infraestructuras y servicios para la electricidad renovable, medios de almacenamiento de electricidad, electromovilidad pública y privada, y equipos para usos finales de la electricidad que requiera la transición en transporte, procesos productivos de la industria, autosuficiencia alimentaria y servicios financieros, comerciales y educativos.
18. Ejecución de la política industrial de Estado para la transición mediante empresas públicas en las áreas estratégicas, responsables del diseño y manufactura de tecnologías críticas por parte del Estado, y empresas privadas y sociales de capital nacional en las áreas prioritarias que produzcan todos los equipos y componentes no críticos, que generen empleos y paguen impuestos al Estado mexicano, todo ello en un proyecto soberano de bienestar, justicia, libertad e igualdad.
19. Reserva, explotación y beneficio, a cargo del Estado, de los minerales y compuestos considerados estratégicos para la transición, y su uso primordial por las industrias de capital nacional del conglomerado industrial de la transición.
20. Establecer el financiamiento de la banca de desarrollo y compras del sector público como recursos de la nación im-

pulsores de la política industrial de Estado, para reducir la dependencia estratégica de la inversión extranjera.

21. Coordinar todas las atribuciones y recursos de dependencias, entidades, organismos públicos descentralizados, así como recursos de entidades federativas y municipios, y de los sectores social y privado, para crear una sinergia capaz de movilizar la estructura productiva y social de la nación.
22. Cooperación e integración económica con América Latina y el Caribe con proyectos industriales conjuntos a escala continental, que amplíen la profundidad y escala de las capacidades científicas, industriales y tecnológicas propias de la región.

VALOR ECONÓMICO DE LA DEMANDA Y DE LOS EQUIPOS QUE REQUIERE LA TRANSICIÓN

El valor económico de los equipos que requiere la transición energética soberana de México es extraordinario. Se debe considerar como el más importante impulsor estratégico y palanca del desarrollo económico y bienestar en el siglo XXI.

Una primera estimación de la demanda de bienes de capital en los próximos treinta años, para desarrollar las capacidades de generación eléctrica y avanzar en la evolución tecnológica del sistema eléctrico nacional, indica que se requiere adquirir, instalar y dar mantenimiento a equipos para al menos:

- 220 millones de paneles solares
- 8,500 turbinas eólicas
- 220,000 km de red eléctrica, con su infraestructura y equipos
- 63 millones de vehículos particulares y públicos
- 5 millones de inversores de generación distribuida doméstica y comercial
- 6,000 MW de baterías para la Comisión Federal de Electricidad
- 14 millones de cargadores eléctricos domésticos
- 3 millones de sistemas de generación eléctrica para irrigación y uso doméstico rural
- 3 millones de unidades productivas agropecuarias con equipos e implementos
- 15,000 estaciones de carga para vehículos eléctricos
- 9 millones de focos y luminarias

Una estimación conservadora con valor presente de estos equipos es de 28.9 billones de pesos en los próximos 29 años, sin considerar el valor económico de la programación, sistemas informáticos e inteligencia artificial. El promedio del periodo es de 1 billón de pesos anuales. El valor de la producción actual es reducido, pero dentro de una década ello representará montos de 2 o más billones de pesos anuales.

En ausencia de una transición soberana, el valor de toda esta infraestructura será importado e instalado por empresas extranjeras, lo que generará inversiones, empleo e innovación de estas empresas en sus propios países, o en otros en donde tienen sus cadenas de suministro, así como utilidades extraordinarias para bancos y fondos de inversión extranjeros e impuestos que recibirán las grandes potencias a costa de la transición mexicana. México se convertiría en nación espectadora, pasiva, compradora y meramente usuaria de los avances tecnológicos e industriales de otras naciones.

Desde el punto de vista económico, esta apropiación extranjera de la economía nacional tendrá implicaciones graves de naturaleza macroeconómica, pues limitará el crecimiento económico en nuestro país (como lo ha demostrado ya la economía política neoliberal en las últimas tres décadas), no se dispondrá de las divisas para dichas importaciones y se observará una crisis fiscal sistémica y permanente.

Sin transición soberana, México impulsaría las economías de otras naciones y el Estado mexicano sería incapaz de garantizar el crecimiento económico, empleos formales, salarios, desarrollo económico y derechos humanos de los mexicanos. Contrario a este escenario, México debe aspirar a producir un porcentaje significativo, no inferior al 50%, de este valor económico con su ciencia, tecnología, ingeniería, industrias, infraestructuras y servicios propios, además de la producción e industrialización estatal de litio y minerales considerados estratégicos. La transición soberana impulsará el mercado interno y la acumulación de capital de empresas de capital nacional y reducirá las presiones por el tipo de cambio que genera el déficit comercial.

POLÍTICA INDUSTRIAL DE ESTADO PARA LA TRANSICIÓN

La política neoliberal establecida en México desde su incorporación al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1985, el inicio del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá desde 1994, y la red de tratados de libre comercio, de protección recíproca de inversiones, y tratados bilaterales que impiden la doble tributación, han creado en México una economía política que ha vaciado el poder del Estado mexicano, impidiéndole garantizar el cumplimiento de sus mandatos, los derechos humanos y la rectoría del Estado del desarrollo. Esta política es exactamente opuesta a las políticas que siguieron las grandes potencias para su desarrollo económico, tecnológico, financiero y comercial global.

Con la cancelación de la Ley Glass-Steagall en 1999, creada en 1933 para regular el funcionamiento del sistema financiero estadunidense (que entre otras causas había conducido a la Gran Depresión), se ha observado una hegemonía del sistema financiero sobre los otros sectores económicos, así como una concentración económica y del capital con beneficios extraordinarios sin precedentes en la historia económica del mundo.

La economía política nacional tiene ahora un índice de internacionalización excesivo que no se observa en las economías de las potencias mundiales. La suma de importaciones y exportaciones, como proporción del producto interno bruto, manifiesta una participación anómala e inusual que limita el desarrollo del mercado interno. A esto se agrega el déficit de recaudación del Estado mexicano, resultado de los tratados que impiden la doble tributación y por los cuales los impuestos sobre la renta de las utilidades de las empresas de inversión extranjera en nuestro país se pagan a los Estados de sus casas matrices, lo que se traduce en ingresos públicos sistemáticamente inferiores a los de economías similares a la mexicana que limitan el poder de la inversión y gasto público para fomentar el crecimiento económico y el empleo. Se observa también que un reducido número de mexicanos poseedores de capitales significativos invierten en el extranjero las utilidades obtenidas en el país por un monto de más de 200 mil millones de dólares.

A la fecha no se conoce iniciativa alguna del sector privado de capital nacional para generar la oferta que se requiere para satisfacer la demanda nacional de la transición. Por ello esta economía política destaca el imperativo de que sea el Estado quien diseñe, conduzca y lleve a cabo la política industrial de Estado. La carta magna constituye la ley suprema de la nación y da sustento jurídico a una política industrial de Estado en el artículo 25 constitucional; este precepto se debe vincular con el artículo 26 constitucional y ambos con el primero y cuarto, que establecen los derechos humanos de los mexicanos. Estos mandatos constitucionales fundamentan políticas públicas, rectoría del Estado y la participación de los sectores social y privado.

De la misma manera que se requiere planificar la transición, se necesita planificar el desarrollo de las capacidades nacionales científicas, tecnológicas, de ingeniería, industriales y de servicios que sean requeridas por la transición. La demanda de bienes de capital, equipos y sistemas de la transición son el punto de partida de esta planeación, como lo hacen

las grandes potencias. En los Estados Unidos, las demandas del Departamento de Defensa impulsaron el complejo militar industrial, la revolución tecnológica digital, internet, satélites, robótica, lenguajes de cómputo, programación, inteligencia artificial, nuevos materiales, nanotecnologías, macrocomputación y automatización.

México tiene toda la legitimidad y derecho para utilizar su demanda nacional y compras de gobierno para financiar la investigación científica, la generación de propiedad intelectual del Estado y el usufructo económico de tecnologías críticas, así como la producción industrial por el Estado de las mismas, y organizar un conglomerado con la participación de los sectores social y privado para su producción, instalación, operación y mantenimiento.

Además de utilizar la demanda nacional para impulsar la oferta de empresas públicas, sociales y privadas de capital nacional, la política industrial de Estado puede alcanzar rápidamente el dominio de tecnologías de frontera, con lo cual será posible diseñar dispositivos y equipos que correspondan a las necesidades específicas de la sociedad mexicana y que al mismo tiempo sean accesibles a los reducidos niveles de ingreso de la mayoría de la población.

En la estrategia para crear empresas de capital nacional es importante impedir normativamente la concentración de la propiedad y poder de decisión por dos razones: *1)* los beneficios de capacidades creadas mediante la suma de capacidades públicas y privadas se deben distribuir equitativamente, y *2)* es fundamental impedir que los esfuerzos nacionales sean comprados y controlados por empresas extranjeras.

Si eso llegara a ocurrir, todo el esfuerzo de la nación sería de inmediato apropiado y controlado por la fuerza económica y de mercado de las corporaciones y capitales globales.

ELECTROMOVILIDAD: PRINCIPAL IMPULSOR DE LA TRANSICIÓN

En el consumo de los sistemas energéticos de México y también del mundo, el transporte representa la mayor proporción del uso de la energía, seguido del consumo industrial, de servicios públicos y doméstico. El transporte es la fuente más importante de emisiones de GCEI, por ello la sustitución de vehículos ligeros, de transporte público y carga que consumen combustibles fósiles por vehículos eléctricos, es el camino necesario e inmediato para detener el cambio climático.

No puede ser un cambio súbito, sino una construcción acelerada de vehículos eléctricos y del sistema de generación eléctrica, almacenamiento, generación distribuida e infraestructura para la carga de los vehículos en todo el territorio nacional. En México, 45 millones; 1,500 en el mundo. Cabe señalar que las potencias tienen ya avances decisivos en políticas públicas, normativas, acuerdos y presupuestos para la electromovilidad. Estados Unidos, la Unión Europea, China y Japón ya lo hicieron. Por su parte, con la política industrial de Estado, México puede producir automóviles eléctricos, celdas fotovoltaicas, baterías, circuitos, sistemas y programación con tecnología 100% nacional, con propiedad intelectual y derechos económicos del Estado en componentes críticos, así como la producción de los mismos por parte del Estado, y producción de los no críticos por empresas sociales y privadas de capital nacional.

La electromovilidad debe ser planificada por la Comisión Federal de Electricidad y transición en conjunto con la Secretaría de Energía, para mantener coordinados los procesos de todo el sistema energético mexicano.

El nuevo sistema de transporte requiere una política que incorpore en un marco estratégico, integral y sistémico en todo el territorio nacional las dimensiones siguientes: planificación del territorio, de las áreas económicas, procesos y demandas de las cadenas productivas, de donde resultan las dinámicas de necesidades cualitativas y cuantitativas de transporte. Para ello es fundamental la coordinación de las políticas de planeación nacional con las de las entidades federativas y municipios. La disponibilidad de vehículos y la velocidad de su incorporación requiere contar con la infraestructura necesaria para su permanente y eficaz movilidad.

Los vehículos eléctricos mexicanos deben ser diseñados para satisfacer las necesidades productivas y sociales de la población. El precio de los mismos debe corresponder a los ingresos de la sociedad e incluir los paneles solares necesarios para la generación distribuida, inversores y baterías domésticas de almacenamiento de electricidad. Esta infraestructura deberá tener respaldo de la red eléctrica inteligente de la CFE para garantizar la movilidad permanente de los usuarios.

El Estado mexicano, como garante de la transición soberana, debe asegurar la creación de una empresa ensambladora de equipos originales, así como el desarrollo de la cadena de valor de las autopartes requeridas para la producción de vehículos de transporte público, ligeros y de carga, que ensamblará autopartes producidas por la industria de capital nacional y las tecnologías críticas aportadas por las industrias públicas.

AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA CON LA TRANSICIÓN

Una de las más graves consecuencias de las políticas neoliberales y sistemas de tratados internacionales de comercio, inversión y fiscales es la economía política tributaria y dependiente de México.

¿Quién debe alimentar a los mexicanos? El actual modelo estipula que deben ser las empresas nacionales o extranje-

ras las que generen la oferta más barata. Esta falacia oculta las políticas del Estado estadunidense para capturar mercados fuera de su territorio, como impulso a sus empresas y por el poder geopolítico que les aporta. No existe libre competencia a nivel internacional. Estados Unidos subsidia sus exportaciones. Los productores mexicanos no compiten con los estadunidenses, sino con los presupuestos y políticas de su gobierno.

En 2022, México experimenta las consecuencias de esta incorporación dependiente a la economía global. Al igual que en 2008, y por causas distintas, se observa un aumento importante en los precios internacionales de los alimentos que México, de manera innecesaria, importa. Posterior a 2008, seis millones de mexicanos fueron lanzados a la pobreza extrema. Ahora se actúa con oportunidad para atajar esta amenaza, mediante el aumento de la producción destinada al autoconsumo. La paradoja es reconocer que en la balanza comercial total, que incluye frutos rojos, cerveza y tequila (ahora propiedad en su mayoría de corporaciones globales) se observa un superávit que se interpreta como autosuficiencia y soberanía alimentaria.

Este concepto es falso. México tiene una dependencia del 47% de alimentos básicos y estratégicos importados, granos, oleaginosas, proteína animal, leche y derivados, que son bienes salario por excelencia. Pero México puede y debe tener autosuficiencia alimentaria. Más de la mitad del territorio nacional es propiedad social y comunitaria, conquista de uno de los momentos históricos transformadores de la nación: la Revolución Mexicana.

De aproximadamente 20 millones de hectáreas en producción agrícola durante 2021, 7.3 millones de hectáreas disponen de irrigación, de lo cual la superficie irrigada, que es de propiedad social, sólo representa el 50% de las 3.3 millones de hás en los distritos de riego y el 46% de los 4 millones de hás irrigadas en las unidades de riego. La mayor parte de la propiedad social y de pequeños propietarios privados no dispone de infraestructura para cosecha de agua, almacenamiento, bombeo y riego. Más que ningún otro insumo de producción, con los avances que ya existen en los sistemas agroecológicos y equipos de producción el agua es el factor más importante y determinante de la productividad y permitirá también producir las semillas en las cuales tenemos dependencia.

Los sistemas agua-energía a nivel cuenca, microcuenca y parcela son indispensables para aumentar la productividad, incorporar nuevas tierras a la producción y alcanzar la autosuficiencia alimentaria. El diseño y producción de motores eléctricos para bombeo de agua permitirá crear al menos 3 millones de sistemas de energía-agua para bombear e irrigar las parcelas de los pequeños productores del sector social y particulares. La industrialización, empaque, logística y comercialización de alimentos requieren equipos producidos en nuestro país, alimentados con energías renovables. Esta integración de los eslabones de las cadenas productivas nos hará autosuficientes en producción y aumentarán el valor agregado económico.

Se debe tomar en consideración, además, que la población mexicana observa aumentos absolutos anuales importantes, así que por lo menos en los próximos treinta años será necesario alimentar en promedio un millón adicional de seres humanos.

Con esta política de Estado de autosuficiencia alimentaria, sustentada en aumentos de productividad resultado de la instalación de millones de sistemas de bombeo verde, será posible movilizar productivamente y ofrecer oportunidades de vida a millones de jóvenes que actualmente sufren la violencia y coacción económica de la economía política tributaria y dependiente, resultado de la política de incorporación a la economía global, sin proyecto productivo, económico, social y de autodeterminación política que se instaló hace cuatro décadas. Por si todo esto fuera poco, con los bienes de capital que producirá el conglomerado de la transición también se podrá reducir el costo de la generación eléctrica con energías renovables para la eficiencia energética en toda la economía, el alumbrado público y el bombeo de agua de los municipios.

Construir el sistema eléctrico sustentable como servicio público a cargo del Estado y la nueva economía que requiere la transición energética soberana constituyen las estrategias más profundas y eficaces para superar la economía política neoliberal, tributaria y dependiente, formalizada en tratados internacionales de libre comercio, protección de inversiones y fiscales. México conduce de manera soberana su transformación histórica en un mundo que cambia en sus dinámicas tecnológicas, económicas, políticas, geopolíticas, militares y ecológicas. Con la transición energética soberana, uno de sus pilares transformadores, el futuro será brillante para las próximas generaciones en nuestro país.

Hacia un enfoque descarbonizado de la política

Nuevos progresismos y crisis climática

Gustavo Petro

Estamos en una época de cambios. Hay quien suele nombrar este momento con el término «posneoliberalismo»; sin embargo, dicho concepto pone en evidencia que no poseemos una idea del todo clara sobre lo que se avecina a partir de este momento. Y no podría ser de otra manera, pues aquello por venir siempre es difuso y está marcado por tendencias profundamente contradictorias que pocas veces parecen armonizar con el presente. Pero es también ese presente, nuestra realidad, el que muestra indicios, perspectivas hacia el futuro, el posible camino a seguir durante las próximas décadas; y este presente nos está gritando todos los días.

La pandemia de covid-19, que nos ha mantenido acorralados durante los dos últimos años, es una clara demostración —más allá de los análisis científicos en torno a la estructura genética del virus— de la expansión del mercado que no es más que el reflejo de la expansión del capital que penetra el mundo y a la naturaleza, de tal forma que ocasiona enfermedades, desata virus y con ellos la muerte. Así, si este mismo análisis lo aplicáramos al fenómeno del cambio climático, encontraríamos una relación semejante (sin que ahora podamos establecer una relación clara entre el cambio climático y el surgimiento de la covid-19) en que la crisis climática —que amenaza todos los días con agudizarse— se muestra como resultado del mismo proceso de acumulación capitalista. No hay que olvidar, por ejemplo, que en las últimas décadas todos los nuevos virus que han aparecido son resultado de la transferencia a los seres humanos (a través de las grandes producciones ganaderas de cerdo, pollo o vaca) de virus que están en la naturaleza, pero que afectan originalmente a otras especies. Las altas y antinaturales concentraciones de animales que caracterizan a la

producción capitalista, son imprescindibles para dicho modelo económico en su búsqueda de disminuir costos, maximizar ganancias y con ello minimizar el valor relativo de la fuerza de trabajo en todo el mundo; pero también son las que generan estos graves padecimientos en la salud pública. Todos los problemas que hoy enfrentamos tienen como base el sistema de acumulación moderna del capital.

La crisis climática es el fenómeno estructurante del mundo futuro. Éste será el origen de muchos virus que hoy permanecen ocultos debajo de los hielos, en lugares recónditos, alejados de la humanidad, pero que el cambio radical a escala global de los ciclos del agua pondrá tarde o temprano en contacto con nuestra especie. Según los científicos, es altamente probable que sea este hecho, más que los grandes desastres naturales (como huracanes, terremotos o diluvios al estilo hollywoodense), el que marque una tendencia brutal que apunte incluso a la extinción de la vida. No hablamos de milenios, sino de uno o dos siglos. Si esto continúa de esa manera, la vejez de los hombres y mujeres del presente será terrible, y la vida de sus hijos será aún peor en todas las familias del mundo. Estamos ante una auténtica crisis civilizatoria cuya tendencia genera cada vez más efectos políticos. Hasta hace algunos años, el término «cambio climático» causaba extrañeza, en algunos medios incluso parecía interpretarse de manera jocosa. Pero hoy la experiencia humana ha palpado esta crisis y ya no es cuestión de narrativa, de un discurso, sino de un fenómeno que se expresa en erosiones, lluvias, sequías. En Colombia, por ejemplo, fuimos nosotros los primeros en intentar posicionar el problema desde el plan de desarrollo Bogotá Humana (2012-2016), y aunque entonces provocaba desconcierto, hoy vemos que el problema y su exposición adquieren protagonismo en tanto nuevo eje estructurante de la política.

¿Cómo va a determinar la crisis climática a la política? Hay distintas tendencias, cada una de las cuales puede adquirir un alto nivel de dramatismo. Una de ellas es la barbarie, la cual podemos hallar incluso en aquello que pensamos con el nombre de posneoliberalismo: una suerte de parodia de aquel 1933 alemán que provocó el ascenso del nazismo. Pero a diferencia de éste, en nuestros días estamos frente a barbaries de escala mundial, algunas con el nombre de democracias, liberalismos o centros políticos, posibles gracias a formalidades políticas como las elecciones, pero de alcances y consecuencias brutales. Pensemos, por ejemplo, en Donald Trump y su retórica xenofóbica en torno al muro fronterizo (hay que considerar que no fue él el único en hablar de esta iniciativa ni el primero en construirlo), o bien, pensemos en la política estadunidense que promueve campos de concentración para niños inmigrantes, migración que para nosotros representa un éxodo de los excluidos, aunque para Washington o Nueva York no tenga gran importancia. Y pensemos también en Europa, ahí donde nació la palabra democracia, en Grecia, y pensemos en el mar Mediterráneo, que paradójicamente es hoy la fosa común más grande del planeta tierra. No en México, no en Colombia, a pesar de los gobiernos neoliberales genocidas. Es en Europa donde miles de seres humanos se ahogan buscando escapar de las guerras del petróleo, el cual es la causa principal de la crisis climática; y tratan de escapar también de la sed, el hambre y la desertización que se dirige hacia el sur, obligando a millones de seres humanos a intentar cruzar a una Europa que los espera con ametralladoras y campos de concentración; del mismo modo que les ocurre a miles de centroamericanos que cruzan por México para llegar a los Estados Unidos. Es 1933, pero a escala global. Estamos en la barbarie, rodeados de gobiernos como éstos que cuentan con una poderosísima capacidad industrial de muerte. Y la democracia muere en medio de la crisis climática.

«El neoliberalismo ya no es capaz de dominar ni gobernar el mundo, es por eso que van surgiendo victorias populares en distintas partes del planeta, casi siempre sin articulación entre ellas y muchas veces sin una auténtica perspectiva global».

Pero vemos también otra tendencia, acaso balbuceante, que es la de las resistencias que se expresan muchas veces a través de organizaciones sociales y pueblos originarios, en comunidades campesinas y mundos agrarios que se resisten a la explotación del petróleo en sus tierras o al agotamiento del agua a través de la práctica del *fracking*; resistencias mundiales que representan el grito de una humanidad que se niega a permitir su propia extinción, que hace uso de su instinto de conservación y que se moviliza a través de acciones políticas como las que vimos no hace mucho en Chile o Colombia.

Que el proyecto neoliberal de la derecha latinoamericana no haya podido consolidarse, a pesar de golpes de Estado (como en Bolivia) o de distintos triunfos electorales que la devolvieron momentáneamente al gobierno, indica que ésta ya no cuenta con una élite fuerte como aquella que se dedicó a regular el capitalismo a través de regímenes neoliberales (y no debemos pensar que acabar con el neoliberalismo significa terminar con el capitalismo). El neoliberalismo ya no es capaz de dominar ni gobernar el mundo, es por eso que van surgiendo victorias populares en distintas partes del planeta, casi siempre sin articulación entre ellas y muchas veces sin una auténtica perspectiva global.

En este contexto, tal vez podríamos intentar repetir la agenda del progresismo que triunfó hace tan sólo algunos años en casi toda América Latina; sin embargo, si echamos un vistazo a esos 20 años que comienzan con Hugo Chávez en Venezuela, podemos darnos cuenta que casi todos esos gobiernos estuvieron caracterizados por modelos económicos de distribución de la riqueza relativamente exitosos (en algunos casos más que en otros), pero ninguno cambió los regímenes de producción y, más preocupante aún, casi todos se asentaron sobre prácticas extractivas: petróleo, carbón, gas, etcétera. Fue una época de oro gracias a los altos precios internacionales, que si bien es cierto dependieron en muchos sentidos de China, también fueron resultado de la presencia de Chávez y de su trabajo de reorganización de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Gracias a ello fue posible distribuir la riqueza y disminuir la pobreza, pero fue una época que terminó rápidamente y el advenimiento de la pandemia de la covid no hizo más que acelerar su final, desplomando los precios de las materias primas y generando una crisis mundial que padecemos actualmente en todo el mundo.

Debemos buscar alternativas. Así, una tendencia democrática será la que pueda proponer con seriedad una salida al extractivismo y la superación real del capitalismo fósil, lo que abre una importante discusión teórica acerca de si es posible o no un capitalismo que vaya más allá del uso del carbón, gas o petróleo. Es posible imaginarlo, desde luego, pero en la práctica parece difícil concebir la existencia de un capitalismo (que desde su origen ha tenido un espíritu anárquico) capaz de establecer por sí mismo un cambio en los sistemas energéticos y en la producción de materias primas, de tal forma que pueda generar de otro modo el volumen que se requiere para satisfacer las necesidades actuales de la humanidad. Si el capitalismo no es capaz de ello, entonces la disyuntiva es la extinción de la especie humana o la superación del capitalismo, no sólo del neoliberalismo.

¿Qué sigue entonces? No se trata de repetir dogmas del pasado; la historia no se repite. Lo que sigue, desde un punto de vista democrático, es la articulación de las fuerzas sociales del mundo, esas resistencias que hoy se hacen evidentes y que están ya articuladas en tanto abogan por la superación de la crisis climática y abren rutas hacia la superación del capital y sus efectos negativos. Es desde aquí, desde estas experiencias, que podríamos vislumbrar formas de producción y consumo novedosas que si bien puedan tener algún paralelismo con el pasado, serían inéditas en tanto la humanidad nunca antes tuvo ante sí un problema de la magnitud del que hoy enfrentamos. Alguna vez Karl Marx afir-

mó que el capitalismo era capaz de destruir las fuentes de producción de la riqueza: la naturaleza y el ser humano; y aunque con ello de algún modo fue capaz de pensar el omnicidio que hoy nos amenaza, su propia muerte y su época no le permitieron siquiera imaginar lo que estamos viviendo.

El progresismo latinoamericano, que es donde nos corresponde pensar y actuar, necesita aglutinarse alrededor de este problema. José Mujica, Rafael Correa y Andrés Manuel López Obrador han dado muestras claras de tenerlo presente. La situación que enfrentamos, sin embargo, nos obliga a abandonar ese pragmatismo que da siempre las mismas respuestas a preguntas tales como si es posible o no sustituir el petróleo, cuántas son nuestras reservas energéticas, qué impactos tenemos si no las extraemos o si es posible o no construir formas diferentes de producción energética. Ese pragmatismo nos lleva inevitablemente a la extracción de rentas, que aún es el camino de Venezuela, pero nos condena también a crisis políticas que no convienen a nuestro proyecto ni a nuestros objetivos. Debemos explorar otro camino, y para ello valdría la pena tener en cuenta otras experiencias.

Podríamos comparar América Latina con el sureste asiático desarrollista y profundamente depredador, pues no hay que olvidar que China es, junto a los Estados Unidos, uno de los grandes responsables de la crisis climática. Pese a eso, hay elementos importantes que podrían servir para el análisis: *1)* El sureste asiático ha tenido muy buenos mecanismos de planificación pública, lo que contrasta con el descuido que al respecto ha imperado en nuestro continente. Su ejemplo debería ayudarnos a planificar el tránsito de una economía productiva. *2)* El sureste asiático, en las últimas cuatro o cinco décadas, hizo énfasis en la creación e implementación de reformas agrarias: lo mismo los comunistas de China o Corea del Norte que los anticomunistas de Taiwán, Corea del Sur o Japón, llevaron a cabo profundas reformas que les permitieron abandonar el mundo premoderno feudal, a diferencia de buena parte de América Latina (con sus excepciones) y sobre todo de países como Colombia, donde aún impera un régimen feudal y violento que mata y desplaza campesinos sistemáticamente. *3)* En el rubro de la educación, en el sureste asiático se ligó el saber a un elemento que le es consustancial y por ello prioritario: la producción agrícola e industrial. No hay que olvidar, por ejemplo, que en la década de 1960 Corea del Sur era mucho más pobre que Colombia, pero hoy está muy lejos de nosotros en múltiples aspectos, en parte gracias a que toda su juventud tiene a su disposición la posibilidad de la educación superior. Y es sobre la base de esos saberes que ellos desarrollan su agricultura, su agroindustria y su industria, al punto de estar hoy a la vanguardia tecnológica en múltiples campos. Por la misma ruta es que China está muy próxima a superar a los Estados Unidos.

No se pueden imitar experiencias históricas. El caso del sureste asiático surgió en condiciones diversas y eso hay que tenerlo presente. Pero los dos elementos antes mencionados —reforma agraria y sociedad del conocimiento— significan verdaderos puntales que deben ser impulsados con un enfoque distinto, asumiendo la obligación de que la agricultura, la industria y la producción deben entenderse con la naturaleza, de tal modo que evitemos seguir profundizando la crisis climática. Este enfoque descarbonizado nos da una agenda y de algún modo nos marca la ruta hacia una transición necesaria, y ello pone en evidencia que América Latina precisa de hombres y mujeres capaces de gobernarla teniendo en cuenta sus genuinos problemas presentes y futuros, nunca dispuestos a repetir recetas del pasado.

Ejes y perspectivas del Pacto Histórico en Colombia

Angélica Dueñas entrevista a Iván Cepeda Castro

El triunfo electoral de la izquierda en Colombia marca el inicio de una etapa absolutamente novedosa en la historia de este país suramericano. Para comprender este momento, Conciencias *conversó con el recientemente relecto Iván Cepeda Castro, senador por la lista del Pacto Histórico (2022-2026) y miembro del equipo que acompañó en su campaña a los hoy electos Gustavo Petro y Francia Márquez. Filósofo de profesión, Cepeda ha dedicado su vida a la construcción de la paz en Colombia, participando como facilitador en los Acuerdos de Paz entre el gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). Su militancia política lo ha hecho merecedor de varios premios nacionales e internacionales, pero también le ha significado amenazas, persecución política y exilio.*

AD. *Colombia es un país geopolíticamente estratégico para el sistema-mundo capitalista. Al contrario de casi todos los países latinoamericanos, su historia no cuenta con la presencia de algún gobierno de izquierda que haya sido capaz de llegar al poder, ni siquiera en la primera ola de gobiernos progresistas que arribaron a finales del siglo XX y principios del XXI. Hoy, sin embargo, la historia parece dar un giro y la balanza se inclina hacia el triunfo del Pacto Histórico, representado por Gustavo Petro y Francia Márquez. En este sentido, ¿qué significaría para Colombia y América Latina un posible triunfo electoral de la izquierda colombiana? ¿Qué es el Pacto Histórico y cuáles son esos puntos nodales que hoy le permiten ser una verdadera opción de gobierno?*

IC. Lo primero que habría que hacer es tener claro el contexto, y es que efectivamente en Colombia ha sido muy difícil, a lo largo de toda su historia republicana, el triunfo de una opción de-

mocrática (ni siquiera progresista), que acerque al país y a su sistema político y económico a unos cambios democráticos.

En Colombia no se han abierto paso reformas elementales para introducir a nuestra nación en la modernidad, en el verdadero espíritu de un capitalismo de índole liberal y, contrario a la imagen de una nación democrática en donde priman las libertades, lo que ha ocurrido es que se ha impuesto un régimen ultraconservador, antidemocrático, que tiene en sus entrañas una violencia endémica que ha sido practicada especialmente en el ámbito político; violencia que, en efecto, ha impedido el triunfo de una opción democrática y progresista, significando muchas veces la muerte de miles de líderes y lideresas. En todo momento, cuando nos hemos acercado a la posibilidad de un triunfo democrático, se ha impuesto el magnicidio, el genocidio y otras formas de violencia que han impedido el cambio.

Ante estas circunstancias, han ido surgiendo posibilidades de cambio. En las últimas dos décadas hemos librado una lucha incesante para que sean posibles esas transformaciones, y eso lo hemos hecho a través de distintas vías que nos han permitido avanzar sustancialmente en el camino de una opción democrática. Esos avances se han plasmado en varios aspectos: *1)* El triunfo del proceso de paz en 2016, que es una conquista democrática del pueblo colombiano y que significó que a pesar de la oposición de los sectores que han impulsado la violencia y después de muchos esfuerzos, fue posible obtener un acuerdo político con la que era en ese momento la guerrilla más antigua de nuestro continente. Y ese acuerdo abrió la perspectiva de unos cambios políticos de fondo. *2)* Poco a poco la izquierda y los sectores progresistas hemos ido ganando experiencia y acumulando poder especialmente en el ámbito local, al punto de que en las pasadas elecciones para alcaldías y gobernaciones, la izquierda o la centro izquierda triunfó en las principales ciudades del país. *3)* Como se pudo ver en abril del año anterior, se produjo lo que se ha llamado el estallido social: un ciclo de movilizaciones que paralizaron el país y que pusieron de manifiesto un nivel de conciencia y de capacidad organizativa muy grande en el seno del pueblo colombiano, de sus organizaciones y movimientos sociales.

El conjunto de esos cambios políticos ha generado la coalición amplia y pluralista que es el Pacto Histórico, un frente amplio que no sólo comprende a los partidos políticos de izquierda y progresistas, sino también formaciones que se acercan al liberalismo, expresiones de movimientos sociales, organizaciones sindicales y procesos de organización territoriales. Una expresión clara de esa circunstancia es que al lado de Gustavo Petro, que es el líder político más destacado de esta formación, está Francia Márquez, que es una representación auténtica de las luchas comunitarias, especialmente de las mujeres de origen afrocolombiano de la Costa Pacífica de nuestro país, las cuales han enfrentado al poder de las compañías del extractivismo minero.

Se trata de un conjunto de fuerzas que están hoy en la posibilidad de obtener ese triunfo inédito que, por obvias razones, tiene sin exageración connotaciones históricas en Colombia, puesto que es la primera vez que un haz de fuerzas, una coalición de esta naturaleza se aproxima a tener acceso al poder político.

Es clara la diferencia que existe entre gobierno y poder. Varios autores, entre ellos John Holloway, hablan sobre eso y discuten acerca de la posibilidad de llegar al gobierno y no necesariamente ejercer el poder, pues las estructuras capitalistas, por diferentes medios y estrategias, consolidan poderes fácticos que trascienden el gobierno. En este sentido, y según la experiencia de los progresismos de América Latina, vemos que éstos efectivamente gobernaron e hicieron cambios importantes, pero no lograron minar en su totalidad las estructuras del poder, lo que en parte posibilitó el retorno de la derecha (a veces incluso en sus versiones más extremas). Ahora que el Pacto Histórico se convertirá en gobierno, ¿cree usted que pueden ejercer también el poder? ¿Cuáles son las estrategias que están utilizando para construir un verdadero poder popular? ¿Qué aprendizajes quedaron de los procesos de Brasil, Ecuador, Bolivia o Argentina?

Este camino no es ni será fácil. Es evidente que hay fuerzas interesadas no sólo en obstruir el camino hacia la elección de un presidente y una fórmula vicepresidencial alternativos en Colombia; obstáculos que pueden incluir, como lo hemos denunciado, planes criminales en contra de ellos y en contra de los principales dirigentes de nuestra formación política. Aquí se van a conjugar muchas estrategias.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una intervención pública que hizo en México en días recientes, denunció la campaña sucia que estamos padeciendo en Colombia, con propaganda y descalificaciones. El 9 de junio de 2022, por ejemplo, aparecieron en medios de comunicación horas enteras de conversaciones del equipo estratégico de la campaña, lo cual muestra que nos han infiltrado y han grabado desde la sala donde se producían estas reuniones. Esto a nosotros no nos atemoriza, pero muestra el nivel de acción ilegal en contra de nuestros liderazgos y nuestro proyecto político.

Estamos conscientes de que las cosas serán así incluso si ganamos en las elecciones y comenzamos a construir un gobierno progresista. Pero también es necesario señalar con claridad que hay fuerzas acumuladas y fuerzas actuantes que nos permiten pensar que es posible nuestra victoria en las elecciones. Es por eso que debemos avanzar protegiendo a nuestros líderes, convencidos de que es

posible producir las transformaciones que queremos no sólo mediante el respaldo popular, sino también gracias a una política de alianzas inteligentes como la que hemos venido desarrollando. Tenemos un programa fuerte y contamos con liderazgos con la fuerza necesaria para producir esos cambios.

Ahora bien, no sólo hemos aprendido de la experiencia nacional, sino también de gobiernos amigos y experiencias progresistas de la región. Hemos leído atentamente lo que ha ocurrido en el vecindario, sus éxitos, fracasos y equivocaciones como una forma de guiarnos en la propia experiencia colombiana. Leemos con autonomía y con cabeza propia, de modo que en Colombia no se está implantando ningún modelo extranjero como han dicho reiteradamente algunos de nuestros opositores políticos. No, aquí tenemos una clara idea de cómo debe ser un gobierno reformista y progresista, pero también sabemos cuáles son los problemas que tenemos en Colombia y conocemos muy bien nuestra historia. Hemos leído, repito, de una manera atenta, crítica, la experiencia de nuestros compañeros en el continente; hemos visto cómo esta ola progresista ha triunfado, teniendo a veces retrocesos y otras veces cobrando fuerzas. Y nos entusiasma, porque por vez primera estamos en posibilidad de avanzar en ruta progresista en un país como Colombia, que cuenta con una gran tradición de izquierda que nunca ha podido participar políticamente en el gobierno nacional.

En ese mismo sentido, en una reunión que tuvo lugar en la última Cumbre de las Américas, México, en voz de su canciller Marcelo Ebrard, propuso refundar las relaciones en América Latina y poner fin a la OEA. Ahora que el Pacto Histórico ha llegado a la presidencia, ¿cómo ve las relaciones entre los países latinoamericanos y progresistas?

Parte de nuestro programa político establece el problema de la integración latinoamericana como un punto esencial de las relaciones políticas entre nuestros países y con los pueblos hermanos. Creemos que hoy más que nunca es necesario establecer relaciones de cooperación, colaboración e intercambio permanente entre países que tenemos realidades políticas y culturales similares, que estamos hermanados por luchas y resistencias históricas.

Nos interesa tejer una relación con las organizaciones políticas en México, pues con ellas no sólo compartimos relaciones históricas y culturales que tienen un largo recorrido, sino que también compartimos problemas que tienen un carácter transnacional. Con ello me refiero, en primer lugar, al problema del narcotráfico, que debería ser objeto de una conversación y estrategias de gobiernos progresistas. De este modo, con Petro como presidente de la República, en México pueden tener la certeza de que una de nuestras prioridades, una de las primeras acciones de gobierno será discutir sobre estrategias comunes frente a esta clase de problemas.

Desde su larga trayectoria política, así como en calidad de senador electo para el próximo periodo legislativo, ¿cuáles son las propuestas de trabajo que desde su espacio de acción política pretende impulsar para acompañar el nuevo gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez?

Nuestro programa cuenta con 6 ejes que han sido discutidos no sólo entre los dirigentes políticos y las formaciones que integramos el Pacto Histórico, sino que también han hecho parte de largas conversaciones y diálogos con los movimientos sociales de Colombia. Esos 6 ejes atañen al conjunto de problemas que requieren urgente solución. *1)* La paz, el fin de los conflictos armados y las violencias en Colombia como resultado de unos cambios y transformaciones políticas, económicas y culturales, especialmente en los territorios de lo que llamamos la Colombia profunda. *2)* La pobreza, el atraso en muchas de las regiones y de los sectores que han sido más gravemente afectados por el modelo neoliberal y por esta crisis que se profundizó con la pandemia. *3)* Las consecuencias del cambio climático, teniendo en cuenta todo lo que generó ese largo periodo de recesión económica y desempleo. *4)* El problema de la corrupción y de cómo ha sido cooptado el Estado colombiano por las mafias y los sectores aliados de la extrema derecha en nuestro país, llamada a veces parapolítica. *5)* El problema de la democracia es un problema también esencial, pues se pretende lograr mayor participación de los jóvenes y las mujeres en la vida política, en la toma de decisiones de los problemas esenciales que atañen a nuestra sociedad. *6)* Relaciones internacionales que tienen que ver con la posibilidad de construir una integración latinoamericana a partir del respeto a nuestra soberanía, lo que implica la construcción de relaciones equitativas en el plano internacional. Todo eso y más es lo que pretendemos impulsar.

De progresismos y transformaciones

En torno a los nuevos desafíos de la izquierda latinoamericana

David Antonio Pérez Nava entrevista a Álvaro García Linera

Vicepresidente de Bolivia de 2006 a 2019, Álvaro García Linera es uno de los intelectuales bolivianos más importantes de nuestros días, cuyos análisis se nutren de años de experiencia política adquirida durante su gestión a lado de Evo Morales. Por sus aprendizajes acumulados, que pueden servir de insumo para la acción política de los militantes de nuestro partido-movimiento, esta entrevista que ahora presentamos reviste particular importancia.

DAPN. *Usted ha insistido en la figura de la «segunda oleada progresista» para designar a los gobiernos de izquierda que han irrumpido en América Latina en los últimos tres o cuatro años. Aceptando esta denominación, ¿qué es lo que distingue a esta nueva oleada de su primera manifestación surgida a inicios del siglo XXI? ¿Cómo comprender los distintos escenarios políticos (y a los actores que en ellos toman parte) en uno y otro caso?*

AGL. La actual presencia simultánea de gobiernos de izquierda o progresistas en el continente no es una casualidad. Es un síntoma de una época convulsa. La primera oleada de gobiernos progresistas se dio entre los años 2000-2014, y abarcó a Venezuela, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, El Salvador, Nicaragua, Honduras. Luego vino una restauración neoliberal, democrática en unos casos, o violenta y antidemocrática, como en Honduras, Brasil y Bolivia. Y ahora, desde el 2018, nuevamente estamos asistiendo a una segunda oleada que tiene características distintas a la primera.

Esta segunda oleada progresista latinoamericana presenta dos corrientes internas paralelas pero diferenciadas. Allá

donde hay un segundo momento o regreso progresista al gobierno, como en Argentina, Bolivia, Honduras y probablemente Brasil, no viene acompañada de grandes levantamientos sociales, como sucedió a inicios del siglo XXI. En tanto que en los países en que el progresismo triunfa por primera vez, como Perú, Chile, probablemente Colombia, su ascenso electoral cabalga grandes movilizaciones sociales contra el viejo régimen de alianzas conservadoras gobernantes. México es una excepción en este arco del Pacífico de victorias progresistas, pues si bien pertenece a este último grupo, su contraparte social la coloca en el primero.

La presencia y densidad de grandes movilizaciones sociales que preceden o acompañan a las victorias electorales progresistas, o su ausencia, es determinante para comprender la radicalidad y margen de acción de los gobiernos. No sólo porque la acción colectiva ayuda a horadar el antiguo sistema de tolerancias morales de los gobernados hacia los gobernantes, sino que, además, habilita un espacio de nuevos horizontes culturales posibles de la acción política, nuevas formas de organización y politización social que los gobiernos electos están obligados a tomar en cuenta para construir legitimidad.

Las movilizaciones colectivas siempre empujan a los gobiernos a decisiones más audaces. No hay mejor pedagogía popular que la amenaza de la calle sublevada para obligar a los presidentes a ser más radicales. Aunque nuevas posibilidades de decisión gubernamental no significan necesariamente obligatoriedad de tomarlas, también influirá el temperamento del gobernante, su esquema de alianzas parlamentarias y, por supuesto, la envergadura de la fuerza conservadora al frente.

En el caso del progresismo que no viene de la mano de la acción colectiva de la sociedad, inicialmente el espacio de reformas que la sociedad demanda y está dispuesta a aceptar es mucho más reducido y moderado. Por lo general las expectativas populares se inclinan a restablecer los derechos y reconocimientos avanzados en la primera ola progresista que fueron mutilados por el breve periodo restaurador neoliberal o, en el caso de México, frenar la cadena de agravios y depredación de bienes públicos de décadas de gobiernos conservadores. No se está ante la disposición social de crear una nueva sociedad más allá de lo que se diseñó en la primera oleada, sino de restablecer y estabilizar lo que entonces se logró.

No es casual que el regreso del progresismo al gobierno haya acontecido a la cabeza de candidatos moderados y que ello haya permitido la victoria electoral. El signo de la época era, en el momento de su victoria, no el de las grandes reformas, sino el de la administración y rencauzamiento de las que se iniciaron en la primera ola. Por ello es que este progresismo de segunda ola, por ahora, no abandera la conquista de un futuro esperanzador sino sólo la defensa de un presente menos agobiante.

Pero esta predisposición a la estabilización administrativa del actual progresismo choca con una realidad contradictoria a sus expectativas que va a redefinir su futuro inmediato. Por un lado, las reformas que impulsó en la primera oleada están comenzando a mostrar signos de agotamiento, ya sea porque cumplieron su misión de reducir parcialmente la pobreza y las desigualdades o porque la pandemia y la crisis económica que la acompaña han creado un escenario inédito: gran parte de las medidas sociales y económicas que se tomaron 10 o 15 años atrás ya no producen los efectos esperados ante las injusticias y sufrimientos sociales. Nadie había previsto los efectos calamitosos que traería el «gran encierro» de 2020-2021, que ha llevado a la mayor parte de los países de América Latina a un retroceso en el bienestar social de una a dos décadas.

De mantenerse en una estrategia meramente «administrativista», puede conducir a que el progresismo vaya perdiendo su veta transformadora para convertirse en un partido del orden y la estabilización. Ésta es la expectativa de la mayoría de los nuevos liderazgos progresistas. Sin embargo, la crisis múltiple que agobia al mundo, médica, económica, ambiental, alimentaria, cultural y política, impiden una normalización de los

equilibrios. Al contrario, han incrementado de manera colosal los sufrimientos sociales, las desigualdades y las incertidumbres, que demandan acciones estructurales, giros decisionales que protejan a los sectores populares y le devuelvan una actitud optimista ante el porvenir. Y si el nuevo progresismo no lo hace, con el tiempo la insatisfacción social que se va incubando podrá ser articulada por proyectos políticos retrógrados capaces de recubrir su melancolía por el viejo programa neoliberal con brillos rupturistas y de cambio. La posibilidad que haya un rebase del progresismo administrativo por la izquierda, teóricamente posible, es más difícil porque la experiencia política popular al interior del progresismo carismático ha sido la más duradera y profunda de los últimos 50 años, y desprenderse de ella o superarla requiere una movilización social y cognitiva tan intensa y expansiva como la que se dio a inicios del siglo XXI. Así, en tanto no acontezca este nuevo momento de ruptura histórica, es más factible el gradual debilitamiento del bloque nacional-popular, la mutación de partidos políticos de cambio por partido del orden, el surgimiento de desafección y frustración social que dificulte nuevas victorias electorales y, en algunos casos, la fractura del progresismo en varios liderazgos medios.

La recomposición de este bloque neoliberal es otra de las actuales características que no existieron en la primera oleada progresista. Cuando se inició, las fuerzas neoliberales quedaron pasmadas, desorganizadas y carentes de iniciativa histórica ante un pueblo en movimiento que abrazaba banderas de cambio. Quince años después han remontado su parálisis, han ampliado sus plataformas de lucha a las calles, a las redes sociales y al discurso público donde han normalizado un lenguaje de odio y violencia; han acumulado errores del progresismo para enrostrarle sus debilidades y han endurecido su narrativa, ya no en torno a esperanzas universales, sino alrededor del resguardo de privilegios, lealtades morales, fidelidades raciales o autoritarismos domésticos. El discurso final es el mismo que hace 40 años: privatizar lo público, premiar a los ricos, enseñorear a los fuertes, prescindir de los débiles y perdedores. Pero el método para llegar a ello, la pasión movilizada es distinta. No se trata de construir un mundo a imagen y semejanza de los exitosos al que un día todos podrán llegar sino de amurallarse contra los que lo amenazan: los pobres, los migrantes, las mujeres empoderadas o indígenas levantiscos a quienes hay que escarmentar, disciplinar y expulsar para que dejen a los primeros gozar en paz de sus privilegios.

Este neoliberalismo crecientemente fascistizado, violento, religioso, racista y antidemocrático es el nuevo rostro organizado de las fuerzas conservadoras que el progresismo tiene al frente. Son los encuevamientos autoritarios del eclipse mundial del consenso neoliberal; es la histeria política neoconservadora ante el gran disenso entre élites dominantes, unas más inclinadas a políticas estatistas y proteccionistas; en tanto que otras, a mantener el credo en el libre mercado. Pero se trata de un crepúsculo de época crecientemente autoritario y feroz; por tanto, peligroso. Esto modifica el escenario de la lucha por la conducción del sentido común de la sociedad que, en el fondo, es el epítome de cualquier lucha política.

En esta descripción, en la que usted distingue entre dos corrientes paralelas al interior de la segunda oleada progresista, la primera de éstas parece enfrentarse a un panorama adverso gracias a su escasa fuerza social, que en muchos casos puede traducirse en rápidos reveses electorales. En este sentido, si esta corriente progresista retoma la dirección de las instituciones, pero ahora sin una movilización social que la respalde, potencie y resignifique, ¿cuál debe ser entonces su papel ante esa aparente pasividad social que la debilita? ¿El progresismo en el gobierno, en esta particular circunstancia, puede hacer algo para dinamizar a la sociedad y restituir en ella su potencia transformadora?

El protagonismo de la sociedad laboriosa no se delega desde el Estado, pues en tal caso ya no es protagonismo sino subordinación movilizada. Tampoco el Estado puede sustituir a la sociedad, pues el primero siempre está en manos de una élite (empresarial, intelectual o plebeya) que monopoliza los bienes comunes de esa sociedad. El Estado puede fragmentar a la sociedad o, en el mejor de los casos, con gobiernos progresistas o revolucionarios, usar su monopolio de monopolios para abrir caminos, crear expectativas, habilitar medios materiales, to-

mar decisiones que ayuden a ampliar la deliberación y mayor organización popular.

Reconocer y respaldar desde el Estado la formación de sindicatos aboliendo legislación antisindical ayuda a expandir modos de autorganización obrera. Implementar una tributación progresiva a las grandes fortunas o nacionalizar centros productivos de elevada rentabilidad, al mismo tiempo que ampliar los bienes comunes susceptibles de ser redistribuidos entre los trabajadores, valoriza lo común y la igualdad sobre la competencia y la injusticia. La consulta gubernamental con comunidades, asociaciones vecinales y sindicatos instituye mecanismos de debate y decisión de políticas públicas de amplia participación popular. Sobre estos nuevos campos posibles organizativos y cognitivos impulsados desde el Estado, las clases sociales menesterosas podrán apoyarse para producir nuevos horizontes de acción autónoma frente a la gran propiedad, experimentar modos más intensos de democratización de gestión de los bienes públicos, etcétera.

En tiempos de reflujo social o estado pasivo de la sociedad, un gobierno progresista puede ayudar a crear condiciones materiales y cognitivas para un gradual renacimiento del protagonismo de la sociedad plebeya. Sólo ahí radica su garantía para contener los brutales asedios y las pulsiones antidemocráticas de las fuerzas conservadoras incómodas y furiosas por la presencia progresista.

Apostar a una ingenua tranquilidad de todas las clases sociales mediante una gestión meramente administrativa del poder estatal a mediano plazo no sólo alejará a las clases subalternas del gobierno en el que no hallan soluciones a sus carencias, agravios y sufrimientos, sino que, además, tampoco obtendrán la condescendencia y apoyo de las clases adineradas que prefieren a los suyos en la gestión gubernamental. Con el tiempo, un gobierno progresista abandonado por los de abajo que se sienten frustrados y rechazado por los de arriba por representar siempre un riesgo a sus privilegios caerá gradualmente en una orfandad histórica que desorganizará por un largo tiempo a las clases populares.

El progresismo sólo puede serlo avanzando cada vez en nuevas iniciativas redistributivas y de igualdad social, incluso aunque por un tiempo sólo sean iniciativas enteramente estatales. Detenerse en sus bríos igualitarios en aras de un ilusorio equilibrio social lo llevará a convertirse en un jugador de segunda en el sistema político y con un sentido común cada vez más escorado a la derecha fruto de su propia defección.

Estos gobiernos progresistas de segunda generación, sobre todo los que se vieron forzados por las circunstancias a moderar su programa y sus candidatos para suplir su falta de arrastre social, ¿podrán cumplir ahora con esta tarea? ¿Cómo pasar de un mero ejercicio de rencauzamiento de los derechos adquiridos con la primera ola (y perdidos gracias a la reacción conservadora que los despojó momentáneamente del gobierno) hacia la construcción de un conjunto de reformas de segunda generación, ajustadas al momento presente y capaces de satisfacer las nuevas exigencias sociales sin descuidar a los desposeídos de siempre?

Un gobierno moderado de centro izquierda en tiempos de movimientos sociales activos es un estorbo y lo más probable es que sea arrastrado por la dinámica de la acción colectiva radicalizada que lo obligará a radicalizar sus medidas de cambio en favor de los sectores laboriosos, o lo peor, ante su pasividad podrá ser desplazado por una reacción conservadora que canalizará, regresivamente, los ímpetus de cambio apetecidos por los sectores populares y la demanda de orden de los sectores medios.

Un gobierno de centro izquierda en ausencia o declive de grandes acciones colectivas puede proteger parcialmente a los sectores populares de los efectos calamitosos de la crisis múltiple y tal vez ampliar algunos derechos colectivos. En ambos casos, no se está ante una añorada transformación popular de la organización social y económica del país, sino ante un esfuerzo por paliar los agobios que aprisionan la vida cotidiana del pueblo.

Este tipo de progresismo moderado en tiempos de pandemia, crisis económica y derecha neoliberal enfurecida tiende a ser un acontecimiento político transitorio, de corta duración, pues no es un proyecto de reforma de las estructuras socioeconómicas vigentes en el país; es sólo una mutación en

las formas de gestionarlas y, por tanto, el regreso de las fuerzas oligárquicas que las gestionaron anteriormente es previsible a corto plazo, ya que sus fuentes de poder e influencias no han sido desmontadas.

Este destino temporal del progresismo moderado también afecta a las experiencias que ya vivieron la primera oleada, pues los límites y dificultades que experimentó el progresismo en ese primer momento no buscan ser remontados con una nueva batería de reformas.

Por tanto, por donde se vea, la moderación tiene un horizonte corto y, paradójicamente, la restauración neoliberal también, pues busca restablecer endurecidamente algo que fracasó y que dio lugar precisamente a la oleada progresista continental. Entonces el horizonte predictivo de la sociedad, la esperanza movilizadora y organizadora de previsibilidad colectiva se estanca, se diluye en un caos de incertidumbres asfixiantes. Es la experiencia patética de un tiempo suspendido en el que ni la izquierda tiene un proyecto disruptivo de transformaciones igualitarias expansivas capaces de alumbrar nuevos universales esperanzadores a corto y mediano plazos ni las derechas autoritarias y desembozadamente antidemocráticas tienen una oferta de reformas capaces de capturar el optimismo histórico de la sociedad. Es tiempo confuso de victorias cortas y derrotas cortas, de desapasionamiento y angustia estirados en el tiempo.

La manera de devolver el movimiento al tiempo, de romper su desmoralizadora dilatación y comprimirlo, sólo puede venir de un despertar social que invente, como todo acontecimiento de rebelión social, los nuevos horizontes al cual aferrar las esperanzas colectivas; o bien, en tanto ello no acontezca, de un protagonismo del gobierno progresista para alumbrar nuevos cursos de acción posibles de la sociedad mediante un conjunto de reformas progresistas

de segunda generación que no sólo amplíen la redistribución de la riqueza afectando a las pequeñas oligarquías multimillonarias de los países, sino que, además, produzcan una base productiva expansiva propia que garantice a esta igualación social una sostenibilidad material en el tiempo. Una ampliación de derechos sociales, una profunda reforma tributaria progresiva a los grandes millonarios, un impulso estatal al empleo, a la generación de excedentes económicos y a la modernización técnica de la pequeña economía popular pueden ayudar a que las clases populares puedan desplegar su propio protagonismo y la generación de nuevos objetivos de su autorganización.

La pandemia de la covid-19 y la crisis económica intensificada por ella ha hecho retroceder al mundo, en particular a América Latina, décadas de desigualdad social. Hay decenas de millones de más pobres, de trabajadores más precarizados, de endeudamiento familiar, de pérdida de empleo, de estancamiento de la formación educativa de niños y jóvenes y, paradójicamente, todo ello en medio de un incremento obsceno de la riqueza de algunos empresarios. El progresismo no provocó esta tragedia, pero tiene que asumirla y superarla. Ahí se juega su responsabilidad histórica. Y ello sólo lo puede hacer asumiendo un conjunto de acciones gubernamentales y sociales audaces, excepcionales para tiempos excepcionales. Los ejes son precisos: redistribuir riqueza, ampliar las bases productivas de la sociedad, democratizar la gran propiedad, ampliar derechos universales.

Todo ello pasa por un nuevo programa de políticas sociales redistributivas hacia los sectores pobres que remonte su actual condición de carencias materiales; impulsar grandes obras públicas de infraestructura, de cambio de la matriz energética en la generación de electricidad y transporte, que a la vez que generen empleo remodelen la infraestructura de las sociedades; elevar el salario mínimo que favorece a trabajadores formales e informales, pero también mejorar la escala salarial intermedia de trabajadores cualificados y profesionales; reducir y subvencionar las tasas de interés para la micro y pequeña empresas, dando incentivos a su formalización y a su reconversión técnica que mejore la productividad; establecer impuestos extraordinarios a las grandes ganancias empresariales, a los grandes ingresos y a la gran riqueza patrimonial de las familias millonarias; colocar la banca al servicio de la producción, el empleo y la economía popular. El Estado debe premiar y proteger la asociación laboral para que una nueva oleada de presiones colectivas limite los salarios gerenciales, la distribución de dividendos a los grandes accionistas, y para que se democratice la gestión de las empresas. Igualmente, el Estado debería asumir la propiedad de áreas estratégicas de alta rentabilidad a fin de incrementar el patrimonio social para ser distribuido universalmente.

Se trata de avanzar con audacia en un modelo de desarrollo anfibio y flexible, que priorice por igual mercado interno y externo, la productividad con igualdad, la inversión con la democratización, de tal manera que a diferencia

de la primera oleada progresista que no pudo consolidar su propia base productiva, ahora se pueda crear una tupida red de sistemas productivos a pequeña y mediana escalas interconectados local y regionalmente, en áreas como la agricultura, el procesamiento del litio, la industria automotriz, los artefactos electrónicos, la reconversión energética, la formación educativa.

Se necesita una estructura económica que permita achatar la parte superior e inferior del «rombo» social de los ingresos y agrandar horizontalmente la parte intermedia. En ello el progresismo se juega la posibilidad de un liderazgo político y cultural duradero en el tiempo.

En todo caso, ¿a qué atribuye usted el actual estado pasivo de la sociedad, incluso en el caso de muchos países latinoamericanos que son hoy nuevamente gobernados por la izquierda? ¿Es un síntoma de época, un momento necesario al interior de los procesos de cambio o, como han afirmado algunos, un efecto pernicioso del progresismo?

Los gobiernos progresistas, a su modo, expresan electoralmente la densidad y alcance de la movilización social. Ciertamente siempre hay un ámbito de autonomía de los gobiernos para ser más radicales (excepcionalmente) o más moderados (la mayor parte de las veces) que el movimiento social que le precede o acompaña. Pero se trata de un espacio de discrecionalidad acotado por la propia vigilancia de la acción colectiva y la recurrente validación electoral a las que tienen que someterse regularmente los progresismos y las izquierdas. De ahí que la continuidad gubernamental siempre ha obligado al progresismo a expresar, en términos generales, el curso de las expectativas populares, sus demandas y formas organizativas.

La retórica de cierta izquierda que denuncia que el progresismo hubiera pasivizado un creciente radicalismo de masas dispuesta a tocar las puertas del socialismo, tiene que explicar de manera seria por qué esas masas que en un momento están dispuestas a tomar el cielo por asalto luego se detienen a las puertas de las empresas por decisión propia y dejan las grandes deliberaciones para regresar a su vida cotidiana, también por decisión propia, una vez que sus demandas universales se han convertido en políticas públicas y sus representantes han sustituido a las viejas élites de gobierno. El argumento de unas masas engañadas por unos gobernantes maliciosos repite mediocremente el viejo prejuicio supremacista y racista de un pueblo ignorante y crédulo sometido a las falacias de un puñado de embaucadores. En esta supuesta reivindicación de la radicalidad hay una radical ignorancia de la realidad fáctica y, lo peor, un menosprecio colonial de las capacidades cognitivas de los sectores populares. Los ideólogos de la pasivización externa de la sociedad son, al final, la otra cara de la moneda de los ideólogos que hablan de una inyección externa de conciencia revolucionaria a las masas. En ambos casos el pueblo es tratado como un mero objeto manipulable sin protagonismo propio. No es casual que, con el tiempo, varios de los integrantes de estas corrientes acaben convertidos en oficiosos portavoces de las élites reaccionarias que, como en Bolivia, acuden a las puertas de los cuarteles militares para rezar que tomen el gobierno.

Comprender la realidad impura de las luchas de clases, el modo histórico de sedimentación viva de las experiencias colectivas, el despliegue creativo de sus radicalidades y de los límites temporales de los grandes movimientos sociales contra las estructuras de dominación es la única manera de explicar el curso concreto de los procesos de autodeterminación social, la fuerza que éstos tienen al interior de los momentos progresistas, pero también sus debilidades y deficiencias para empujar, o sobrepasar, esas experiencias progresistas. En este escenario, las grandes movilizaciones sociales tienen una dinámica de oleadas, no son continuas. Nunca lo han sido. Tienen su momento de gestación, triunfo, estabilización o derrota y luego, en todos los casos, repliegue. En un primer momento las clases subalternas, por su propia cualidad de subalternidad, están fragmentadas, unificadas localmente, molecularmente, en torno a múltiples estructuras organizativas de trabajo o localidad. Ésta es su condición predominante. En momentos excepcionales, estas moléculas dispersas se articulan, se fusionan para dar lugar a macroestructuras de movilización, deliberación y liberación cognitiva. Se produce la clase como autodeterminación y el bloque social emergente con voluntad

de poder como fusión práctica de las clases plebeyas en torno a unos agravios comunes, un nuevo horizonte compartido y unas acciones asumidas por todos. Se pasa de la reivindicación sectorial a proposiciones universales, se crea una nueva territorialidad social con la ocupación de los espacios públicos, se democratiza de manera plebeya la deliberación sobre los asuntos comunes, se amplía el espacio de lo común, de los bienes que deben considerarse comunes, lo que llega a reflejarse en los comportamientos electorales y la organización del Estado. Es lo que Gramsci llamaba el momento catárquico de las clases populares. El Estado, como monopolio de lo común, se reorganizará en correspondencia con esta nueva correlación de fuerzas y con las cualidades de los nuevos sujetos políticos.

Al inevitable recambio de élites en el gobierno lo acompañará una sustitución de las clases sociales articuladoras de la nación y organizadoras de su nueva narración. Si la densidad de la democratización de la gestión de lo común es mayor, podrán irse desvaneciendo algunos pedazos del andamiaje estatal que siempre funciona por monopolios. De no tener un correlato continental y mundial, esta experiencia de esporádica dilución de la función estatal o de intervención social en los asuntos públicos se irá enfriando, desvaneciendo, lo que dará lugar a un gradual reflotamiento de las funciones administrativas de la burocracia estatal en la gestión de lo común. No será un regreso a lo anterior: la condición de clase de las élites estatales habrá cambiado, dependiendo de las clases insurgentes, del momento plebeyo de la acción colectiva. Igualmente, el espacio de lo común se habrá agrandado con nuevos derechos y el nuevo criterio cultural predominante, fruto de la irrupción popular en la política, ahora será distinto. Al final, el Estado como monopolio burocrático de lo común se restablecerá.

El pueblo llano vivirá el momento incandescente de la política y el nuevo espíritu de época inaugurado por su impronta, como una victoria histórica que le ha garantizado nuevas prerrogativas y reconocimientos, pero luego se replegará a su localismo. Nada que no sea su experiencia victoriosa lo empuja a ello. Es el momento corporativo de la condición popular o declive de la acción colectiva. Es un curso inevitable, como lo demuestran el curso de toda revolución y sublevación victoriosa o derrotada. La diferencia entre una y otra no es la permanencia de la revolución, que no existe en realidad y es sólo una frase. Será si, en caso de victoria, los derechos colectivos han aumentado y la experiencia de la unificación social es sedimentada como nuevo piso a partir del cual remprender a futuro las nuevas luchas. O, en caso de derrota, si los derechos y unificación retroceden a condiciones inferiores a las que existían antes de haber emprendido la movilización revolucionaria.

Ahora en los lugares que han tenido lugar grandes levantamientos populares que precedieron o acompañan a los gobiernos progresistas las acciones de los gobiernos pueden ayudar a potenciar estas acciones o a colocarles obstáculos, pero no pueden mutilarlas ni inventarlas externamente. Lo primero requeriría una represión violenta y generalizada sobre los movimientos sociales medulares, lo que inmediatamente haría de ese gobierno un gobierno contrarrevolucionario enfrentado al movimiento popular, incluido el inmediato desapego electoral; lo segundo, la producción de movilización social desde arriba ya no es una acción colectiva, cuya premisa es precisamente la autonomía y protagonismo de lo social.

La pasivización social se mueve con reglas propias de la dinámica ascendente y descendente de la acción colectiva y es en ellas, en su trayectoria, donde hay que ir a encontrar las condiciones de su presencia.

En los países que ya atravesaron la primera oleada progresista se está en una etapa de reflujo social y hay que luchar para una nueva ofensiva social que lleve al progresismo y la izquierda mucho más allá en términos de autodeterminación social. En los países que están iniciando y pueden comenzar la primera experiencia progresista, el porvenir está abierto y las posibilidades de superar los alcances de la primera oleada progresista dependerán de cómo el movimiento social pueda mantener su protagonismo en la afectación del poder material y espiritual de la gran propiedad dominante.

¿Cuál cree usted que debería ser el papel del partido, su dirigencia y sus liderazgos en este proceso? ¿Qué puede hacer el partido políticamente organizado e ideológicamente determinado para irradiar a la multiplicidad de sujetos y necesidades hasta articular una nueva esperanza colectiva, restituir el movimiento y coadyuvar al despertar social? Hay quien sostiene que el supuesto fracaso del progresismo de primera generación radicó fundamentalmente en su desatención de la formación política, entendida ésta como un conjunto de herramientas educativas capaces de mostrar a la totalidad de la comunidad política el «camino adecuado hacia la utopía correcta». Hay, en este sentido, quien incluso sostiene que el partido debería ser antes que cualquier otra cosa una «escuela». Pero cuesta creer que las transformaciones sociales sean fruto de un simple acto pedagógico, resultado de un ejercicio de adoctrinamiento masivo.

Ninguna revolución triunfa temporalmente, ni fracasa por la acción, presencia o ausencia de un partido político. Esa mirada fallida de la historia no sólo quiere convertir a un puñado de activistas en el centro del mundo, sino que además denigra a las clases populares convertidas en mero artefacto de arrastre de las vanguardias. Las revoluciones, las revueltas y cambios políticos sustanciales son procesos sociales extraordinarios que tienen como protagonista a los pueblos, a la mayoría de

las clases subalternas que, en un arrebato de audacia histórica, de quiebre moral con las antiguas tolerancias hacia los gobernantes, de epifanía cognitiva sobre cómo debe ser un nuevo orden del mundo inmediato, toman por asalto la política de sus necesidades vitales, de los asuntos comunes y transforman los sistemas de dominación políticos y económicos. Los partidos políticos revolucionarios, las vanguardias, nunca han tenido en ningún lugar del mundo la capacidad de producir, inducir o planificar estos quiebres históricos que tienen su propia dinámica interna en las formas histórico-concretas de agregación molecular de las clases plebeyas. La rebelión indígena aymara de 1781 en Bolivia, la experiencia más radical de una emancipación comunal de ese siglo XVIII, no tuvo un partido que la haya provocado. La Comuna de París de 1871, la forma «política al fin descubierta» (como dijera Marx) para llevar a cabo la emancipación del trabajo no la introdujo un partido. Semanas antes de la Revolución Soviética de 1917, Lenin se lamentaba de que probablemente no vería una nueva revolución. Es que éstas son actos de creación histórica de millones de personas que toman en sus manos la conducción de su destino.

Pero lo que sí pueden hacer los partidos revolucionarios es, años o décadas previas, sedimentar lentamente en la experiencia colectiva un conjunto de prácticas asociativas, un conjunto de mitos unificadores, un conglomerado de conocimientos, vínculos y liderazgos locales que, llegado el momento de las grandes irrupciones colectivas, ayudan a articular de manera más rápida y eficiente los procesos de fusión activa de las clases populares. Ya en pleno despliegue de la revolución o sublevaciones el partido puede ayudar a impulsar las tendencias más revolucionarias por encima de las tendencias más localistas o conservadoras, siempre presentes al interior del magma creativo de la insurgencia plebeya. Los partidos, sus militantes, ayudan a darle cohesión al despliegue social que desborda las instituciones y los monopolios de la política, aportan esclareciendo la experiencia práctica de la sociedad, contribuyen a precisar de mejor forma el movimiento colectivo, a enunciar de manera más eficiente las narrativas que dan cuerpo explicativo y performativo a la irrupción social, etcétera. Y llegado el caso de que representantes populares accedan a puestos de gobierno, pueden contribuir a consolidar como derechos la fuerza autónoma de la sociedad, a facilitar nuevas rutas de autorganización social, además de portar mística, entrega y sacrificio, que impulsan una reforma moral contra las degeneraciones corruptas de la política.

Esta incidencia de los partidos en el curso de la historia, destacando o fortaleciendo las tendencias más transformadoras de la sociedad, adormeciéndolas y reforzando las más conservadoras, sucede porque en los levantamientos populares las ideas fuerza dominantes, el sentido común de jerarquías «naturalizadas» y monopolios políticos legitimados se resquebrajan y entran en un proceso de licuefacción cognitiva, de predisposición colectiva a revocar antiguas creencias por otras nuevas y, entonces, los partidos pueden reforzar, en medio de esta explosión de tendencias, las más universales, las más radicales y que más ayuden a desmontar las relaciones de dominación, las injusticias y privilegios. Pero estas tendencias reales están ahí al interior de la sociedad en movimiento, no se inventan en un comité partidario y no son fruto de una pedagogía de adoctrinamiento. Al final, la historia la hacen las luchas sociales, las clases sociales en lucha, no los partidos.

Un partido revolucionario se diferencia de un partido tradicional en que el segundo sólo busca ser partícipe en el recambio de élites en el gobierno para garantizar a los suyos fuentes laborales y privilegios a su clase en la gestión de los monopolios económicos sobre los recursos comunes poseídos por el Estado (impuestos, propiedades públicas, contrataciones, inversiones, derechos, creación de dinero, tasas de interés bancaria, recursos naturales, etcétera). Un partido revolucionario, en cambio, buscará des-

monopolizar y socializar la gestión pública, ampliar lo común, disminuir la gran propiedad privada, redistribuir la riqueza común, etc., es decir, cambios estructurales en las relaciones de dominación y explotación. Pero la posibilidad de esto y lo que debe sustituirlo debe estar gestándose al interior de la propia experiencia colectiva de las clases populares. Si sólo es un artilugio vanguardista gubernamental será sólo eso, una nueva medida burocrática administrada por élites y con resultados administrativos para la burocracia y nada más. Eso no cambia un ápice las relaciones de dominación.

En el caso de las experiencias progresistas y de izquierda en el continente, éstas han surgido de levantamientos sociales, revoluciones o politizaciones colectivas con determinadas fuerzas transformadoras y determinados límites. Es ahí donde hay que ir a buscar la correspondencia entre acción gubernativa progresista y cursos de acción posibles de la sociedad en su conjunto.

Siempre hay y habrán una serie de medidas de gobierno que se podrían haber hecho de mejor manera o más radicalmente para consolidar derechos, para redistribuir más la riqueza, para desmontar los poderes fácticos de la gran propiedad. Ahí las críticas que se hacen al progresismo tienen un sustento fáctico y propositivo. Pero pensar que desde el gobierno se podrían decretar modos de socialización de la gestión de la economía que vayan más allá del capitalismo es suplantar el socialismo como un acto de autodeterminación social por un decreto burocrático de una élite gubernamental. Y está claro que esta concepción administrativista del socialismo fue enterrada el siglo pasado.

Sólo si comprendemos los límites del progresismo latinoamericano dentro de los límites del propio movimiento social que le dio nacimiento se puede concluir que la posibilidad de superar al progresismo actualmente existente es mediante una nueva ola de movilizaciones sociales y sublevaciones populares que vayan más allá, de lo que se hizo hasta ahora, en autorganización social, en democratización de la gestión de los bienes comunes y en afectación de la gran propiedad privada. Pensar que los límites del actual progresismo se superan sólo mediante otros progresismos más radicales achata la historia a una querella de élites políticas, tal como lo dice la piedra filosofal del liberalismo político.

Por eso, quienes afirman que el error del progresismo de primera generación es no haber «enseñado» o formado a la sociedad para que «asimilaran» el acceso al nuevo y moderado bienestar que trajo el progresismo a amplios sectores empobrecidos, y que por eso luego ellos votaron electoralmente por otros partidos, es una nueva forma de desprecio, a veces racializado sobre la plebe, a quien consideran una masa amorfa que debe ser instruida por unos esclarecidos profesores que se atribuyen el monopolio de la verdad y el verdadero destino histórico de la humanidad. Para ellos la historia no la hacen los pueblos sino las vanguardias, cuya labor es guiar a un rebaño de fieles.

La desafección de sectores populares favorecidos por las políticas progresistas no es un hecho de traición moral (no son malagradecidos), ni de ausencia de masajes pedagógicos a la conciencia; tiene que ver más con un anquilosamiento de la comprensión y la acción de articulación social del progresismo con respecto a la realidad material de la sociedad. Claro, uno de los resultados del progresismo es haber modificado la estructura de las clases sociales, eso que la sociología llama movilidad social ascendente y la economía disminución de la pobreza.

En una década, las políticas progresistas en América Latina han ayudado a sacar a 70 millones de trabajadores de la pobreza y la extrema pobreza. Es un logro de justicia social que trae implicaciones materiales en las formas organizativas y las expectativas aspiracionales de esos sectores populares. Al mejorar las condiciones de vida de éstos sus referentes organizativos se modifican, sus necesidades cambian, su horizonte de expectativas se modifica. Siguen siendo parte de las clases subalternas, pero sus condiciones de vida son otras. Y esto, que es fruto del éxito del progresismo, no es reconocido por el propio progresismo que en ocasiones mantiene la misma emisión discursiva y reivindicativa hacia ese sector social que cuando era mucho más pobre. Entonces se produce un desfase entre propuesta de un tipo de cambio, ya anacrónica para estos sectores, y disposición colectiva al cambio que no es comprendida por el progresismo. De persistir en esta fosilización discursiva, las fisuras en el bloque popular pueden ampliarse hasta dar lugar a escisiones que bien pueden ser aprovechadas por fuerzas reaccionarias.

El progresismo tiene que asumir los resultados de sus acciones, entender que la estructura social se ha modificado, que lo popular se ha complejizado y que la posibilidad de ayudar a articular los fragmentos populares pasa por aumentar las políticas públicas a los sectores más empobrecidos, nuevas políticas públicas hacia este nuevo sector de las fracciones populares emergentes, entre otras.

En tanto no se dé una articulación planetaria con tal densidad que pueda cambiar el orden lógico y moral de la vida material del mundo, toda revolución, toda sublevación, toda transformación fracasará en la conquista de sus propuestas más radicales. Pero en esa osadía fallida de querer asaltar el cielo, la sociedad habrá de anclar en las montañas más altas, en las nubes más cercanas un conjunto de derechos, experiencias y logros intermedios que mejorará su vida colectiva, a partir de los cuales la siguiente generación y la siguiente revolución se impulsarán para abrazar una nueva osadía de arañar el cielo.

Y así sucesivamente. Ésta es la única forma en que la historia de los pueblos avanza.

Usted sostiene que una de las particularidades de nuestro tiempo, que marca una diferencia significativa con los años de la primera ola progresista, es la existencia de un bloque neoconservador que ha sido capaz de asumir sus lecciones políticas, aprovechar los errores del progresismo y entrar en un proceso de reconfiguración que en el fondo no ha modificado su espíritu privatizador, excluyente y antidemocrático, pero cuyos métodos de difusión resultan atractivos no sólo para las élites y las clases medias, sino también para amplios sectores al interior de las clases desposeídas. ¿Qué podría hacer la izquierda para conectar con esos sectores? ¿Cómo responder a los nuevos y viejos inconformismos a los que no se ha podido integrar en un proyecto de futuro?

Hay tres tipos de inconformismos con el que las izquierdas no están sabiendo conectar, aunque por motivos distintos.

La rebeldía reaccionaria. En el caso de los países donde el progresismo y la izquierda han llegado al gobierno, cuando lo hicieron encarnaron el espíritu rebelde e inconforme de grandes segmentos de las clases subalternas. Fueron el cambio. Ahí donde sus éxitos en reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de las clases menesterosas modificaron la estructura social, ello provocó dos grandes disensos. El primero, inevitable, de parte de las élites adineradas que vieron reducir parte de sus potenciales ganancias. Se trata de una reacción conservadora que debe ser neutralizada con acciones gubernamentales que impidan la fusión del poder económico privado con el poder político y, además, regulen el régimen de los grandes patrimonios empresariales. El segundo, de parte de las clases medias tradicionales que ven emerger una nueva clase media de origen popular, indígena y asalariada que ahora les arrebata un conjunto de privilegios laborales, contratos, cargos públicos y reconocimientos anteriormente monopolizados por estirpe, redes de amistad o tradición.

La devaluación de su condición de clase intermediaria es vivida como un desquiciamiento moral del mundo que debe ser respondida con una cruzada cívica, y a veces religiosa, contra el ascenso de un barbarismo plebeyo (llamado populismo) que amenaza con demoler los cimientos de la civilización. Se trata de una rebeldía reaccionaria de linaje, que es la forma que está adoptando un modo de politización conservador de las clases medias. Este inconformismo no es negociable para el progresismo, pues requeriría retroceder en su programa de reformas en favor de la igualdad. Lo que se puede hacer es aislarlo, que no irradie hacia los emergentes sectores sociales medios, alentar políticas de integración cultural y educativa con las nuevas clases sociales ascendentes e impulsar políticas de reconocimiento, pero en torno a ejes identitarios desracializados e igualitarios.

La segunda rebeldía es la que resulta del ascenso de expectativas de las clases populares ascendentes. Esta inconformidad social emerge de las propias virtudes de las transformaciones realizadas por el progresismo. Al impulsar políticas públicas de movilidad social ascendente de las clases populares los beneficiarios de ellas no sólo van modificando el conjunto de sus consumos, sino sus propios intereses de clase social. Al producirse una mejora material sustantiva de las condiciones de vida de las clases plebeyas, una parte de ellas ya no asienta su organización en la satisfacción de necesidades básicas y buscan nuevos satisfactores materiales, en tanto que otros segmentos ascienden socialmente de clase social y se fragmentan o asocian de maneras distintas. En ambos casos, el

conjunto de sus expectativas sociales se modifica distanciándolos de sus antiguos intereses inmediatos y de las formas de organización empleadas cuando eran clases populares pobres. Es un hecho aspiracional que nada tiene que ver con una supuesta «traición a su clase», pues son clases sociales populares modificadas por rotación interna o formación de unas nuevas clases al interior del bloque popular. Sus estilos de vida cambian, sus formas de construir opinión colectiva se modifican, al igual que sus reivindicaciones y construcciones discursivas. El progresismo ha cambiado la composición interna de las clases populares y la densidad demográfica de cada una de ellas. Entonces, si el progresismo no comprende la magnitud material de su obra, la transformación de los intereses de una parte importante de los sectores populares puede llevarla a posiciones anacrónicas y desfasadas de la nueva condición objetiva y subjetiva de las clases populares.

Si el progresismo mantiene la misma propuesta de reforma social con la que llegó al gobierno en la primera ola, podrá hallar recepción en los sectores sociales que aún siguen en la posición social de hace décadas; pero no hallará resonancia en aquellos sectores que han atravesado movilidad social ascendente o descendente. Más aún, es probable que al interior de ellos se incube un sentimiento de desafecto e inconformismo que, ante la ausencia de esperanzas movilizadoras desde la izquierda, pueda empujarlos hacia posiciones conservadoras o reaccionarias como único espacio donde hallar reconocimiento de sus nacientes necesidades.

Lo que el progresismo está compelido a hacer para no perder la dirección de lo popular es ampliar, enriquecer su proyecto, sus propuestas de transformación social, a fin de incorporar las expectativas colectivas igualitarias y de justicia social de esta nueva composición de las clases populares. Sin abandonar el programa referido a los sectores más empobrecidos de la sociedad que aún se mantienen en condiciones similares a las de hace décadas, debe incorporar prácticas colectivas, esperanzas nuevas de carácter universal, democrático e igualitario que se producen al interior de la renovada configuración de las clases plebeyas.

Todo ascenso social tiende a destacar o reforzar miradas individualistas y jerarquías de movilidad ascendente, pero también prácticas asociativas, aspiraciones de carácter universal e igualitarias que son las que el progresismo debe articular y potenciar para formular unas reformas o transformaciones de segunda generación capaz de profundizar el posneoliberalismo y arañar nuevos horizontes poscapitalistas.

Un tercer tipo de inconformismo es el que podríamos llamar la rebeldía de época, y es la que emerge en los países que no han atravesado experiencias progresistas en los últimos años. Hablamos del que surge entre las clases menesterosas por décadas de abuso y empobrecimiento neoliberal, o en las clases medias por la frustración ante el fallido ascenso social meritocrático de mercado. Esta rebeldía es claramente antineoliberal y es el escenario propicio para el fortalecimiento de propuestas de izquierda, progresistas y transformadoras.

Que no surjan o fracasen no es un problema de la sociedad, de la falta de condiciones o de conformismo colectivo. La insatisfacción social está ahí, brota de mil maneras y que no sea canalizada por proyectos progresistas es fruto de la ineptitud y torpeza de quienes se proclaman de izquierda. En algunos casos han sido incapaces de construir proyectos alternativos de sociedad anclados en la realidad existente y entonces sus propuestas son meras divagaciones escolásticas para minúsculas sectas de creyentes. En otros casos han sido y siguen siendo cómplices de lo que Nancy Fraser llama «neoliberalismo progresista», que ha trastocado vergonzosamente el internacionalismo revolucionario por el globalismo y la lucha contra las dominaciones por la disputa mediática de lo «políticamente correcto». Son izquierdas que en su desdén por la ideología soberanista echan también por la borda al Estado, que es la huella de lo común universal de una sociedad y el espacio político en torno al cual las clases populares también se autorganizan para transformarlo o superarlo.

En otros lugares se trata de izquierdas que se han atrincherado en exuberantes y sofisticados aparatos conceptuales de impotencia política y renuncian a la disputa por la conducción del sentido común de sus sociedades. Están más preocupados por una gimnasia de preciosismos literarios que por entender los flujos cotidianos y contradictorios del malestar de las clases humilladas. Y allí donde temporalmente logran sintonizar con las rebeldías efervescentes de lo popular, dilapidan su proeza en mezquinas e infantiles disputas de liderazgos futuros que al final nunca llegan.

Vivimos tiempos excepcionales de incertidumbre y desquiciamiento cognitivo. Es un tiempo liminal que ha suspendido el horizonte de previsibilidad de las personas. La dominación atraviesa un callejón de estupores aleatorios que le han hecho perder su optimismo en el porvenir. Es por tanto el tiempo de las izquierdas para ayudar a producir una esperanza renovada en un futuro cargado de igualdad, justicia y comunidad. Toda victoria política popular siempre ha venido precedida de victorias culturales de la izquierda en torno a los horizontes posibles. Y si no lo hace, inevitablemente lo hará la derecha, sólo que ahora como castigo, odio y sanción a los revoltosos que han profanado el viejo orden perdido. Cada victoria política de la derecha es el recordatorio de un fracaso injustificado de la izquierda.

Los recientes acontecimientos internacionales parecen insinuar la posibilidad de un proceso de reconfiguración global que amenaza con dejar atrás definitivamente la hegemonía occidental, profundizando a su modo el posneoliberalismo del que usted nos hablaba antes. El poderío militar y el músculo político que ha mostrado Rusia en los últimos meses, así como la cada vez más consolidada economía China y la presión que ésta ejerce sobre prácticamente todos los países hegemónicos (incluidos los Estados Unidos), parecen constituir empíricamente los pilares de ese hipotético nuevo orden mundial. Paradójicamente, estos dos son los países que más incomodan políticamente a un cierto sector de la izquierda. ¿Cómo debería ubicarse el progresismo o las izquierdas latinoamericanas en este novedoso escenario internacional? ¿Cómo incrustarse en una coyuntura que promete la superación efectiva del actual mercado mundial (mucho más que cualquier utopía abstracta —como dijera Ernst Bloch—, pero lo hace teniendo como modelo político, económico y cultural un paradigma distinto al que parece haber defendido el progresismo durante los últimos veinte años?

El orden unipolar que emergió tras la derrota de la URSS en 1989 está languideciendo. La crisis económica de 2008 y 2020 ha puesto de cabeza el dogma neoliberal de menos Estado y cero déficits fiscales. Ambas crisis han tenido a los Estados y a sus bancos centrales como los grandes impresores de dinero que han inundado los mercados para impedir un colapso financiero y productivo. En las principales economías del mundo, la austeridad ha sido remplazada por multimillonarias inyecciones de dinero para obras públicas, pago de salarios de empresarios privados y asistencia social. El Estado no sólo crea mercados sino que los ha salvado de la catástrofe. El crecimiento del comercio mundial y el movimiento del flujo transfronterizo de capital se ha ralentizado. Y con una medida ejecutiva del gobierno estadunidense y la Unión Europea, un pedazo gigantesco del mundo, Rusia y sus aliados, han sido desglobalizados. Todos los fundamentos naturalizados del viejo orden de libre comercio y globalismo se han resquebrajado e, incluso, la fusión de libre comercio con democracia representativa se ha disociado. El presidente estadunidense promueve golpe de Estado contra su propio parlamento. Las élites políticas mundiales divergen sobre cómo salir de la crisis: unos apuntan a más proteccionismo; otras, a la fascistización; en tanto que los fósiles ideológicos, a más neoliberalismo. El gran baluarte de la globalización, China, tiene una economía altamente estatizada y no se apega al recetario demoliberal europeo. El orden real y el orden imaginado del mundo se ha fraccionado en múltiples retazos. Se ha diluido el horizonte de previsibilidad del mundo y lo único que reina es la incertidumbre estratégica. La fantasía cultural del fin de la historia ha engendrado un monstruo de mil cabezas enfrentadas que se muerden unas a otras.

En medio de este caos sin precedentes que marca el ocaso del unimperio estadunidense, pequeños imperialismos o protoimperialismos que vivieron arrinconados en la sombra saltan a escena a disputarse una porción territorial del orden planetario unipolar que se desvanece. Estamos en medio de una batalla de viejos y nuevos imperialismos que busca su mejor tajada en una nueva versión de la secular disputa de territorios del mundo, ahora reducidos a mercados para sus productos, mercados para fuerza laboral barata, áreas de seguridad circundantes y fuentes de abastecimiento de materias primas, flujos de capital y remisión de ganancias.

El filósofo Santiago Alba Rico habla de un mundo con un imperio fallido (Rusia), un imperio en decadencia (EU)

y un imperio en ciernes (China). Faltó mencionar a un manojo de microimperios añejos y melancólicos (Europa) que tratan al resto del mundo como colonias *soft* de sus intereses y que, en conjunto, están llevando al planeta a un periodo de militarizaciones aceleradas, declaratorias por doquier de adversarios sistémicos, reivindicación de soberanías de gran potencia en el ámbito energético, alimenticio, tecnológico, geopolítico o lo que sea, a fin de legitimar nuevas agresiones e invasiones. Los tiempos crepusculares de las grandes hegemonías (Inglaterra a inicios del siglo XX, EU a inicios del siglo XXI) son siempre tiempos de imperialismos combatientes por el reparto del planeta. Y no pequemos de ingenuos: así como no hay imperialismos buenos a los cuales apoyar, tampoco hay manera de abstraernos de esta realidad dantesca.

La izquierda mundial y el progresismo latinoamericano deben rechazar cualquier invasión a una nación soberana, porque en su destino está posiblemente el nuestro. Debe rechazar la formación de bloques militares, comenzando por ese fósil de la guerra fría llamada OTAN, porque son la garantía de nuevas invasiones

(Yugoslavia, Afganistán, Siria). Debe apoyar las luchas de liberación nacional de una nación agredida por cualquier potencia y propugnar la conversión de esa lucha por la soberanía en una lucha también por la emancipación social. Y debe asumir su ubicación en el mundo como continente, pues de modo individual cada nación será arrastrada a ser tratada como una insignificante colonia. La fuerza de los pueblos es su unidad y la fuerza de las naciones frente a los imperialismos es también su unidad. En medio de la barbarie intraimperialista, los pueblos latinoamericanos, africanos y asiáticos luchemos por resguardar colectivamente nuestra soberanía; articulemos nuestras economías para utilizar de mejor manera nuestros recursos naturales y nuestras capacidades productivas; negociemos en bloque nuestra inserción en el mercado mundial para capturar una mayor rentabilidad a nuestros productos estratégicos que los imperialismos quieren controlar. Protejámonos de manera articulada durante estas dos décadas de turbulencia destructiva que amenaza con triturar la esperanza y la vida de millones de trabajadores del mundo.

Me gustaría que nos compartiera algunas palabras finales sobre su concepción de las transformaciones sociales. Me queda claro que su idea del progresismo por oleadas surge como una respuesta contra aquellos que lo mismo al interior de la derecha que de la izquierda, y al modo de Francis Fukuyama, decidieron declarar categóricamente el «fin del ciclo progresista», como si la historia tuviera un desarrollo lineal en el que cada etapa deja totalmente superada a la que le precede. Ante esto, ¿qué hacer teórica y políticamente para pensar y construir (más allá de romanticismos e ingenuidades, y aceptando el carácter impuro y contradictorio de la condición humana) una genuina ruptura del orden vigente? En definitiva, ¿cómo pensar entonces la dinámica de las transformaciones sociales?

El concepto de oleadas progresistas no es una especulación teórica; es la manera de nombrar un hecho fáctico de lo que sucede hoy en el continente entre los años 2000 y 2020 y, en general, en los procesos revolucionarios de los últimos dos siglos. La lógica de la acción colectiva se mueve por flujos y reflujos a lo largo de un tiempo revolucionario, para luego entrar en una larga época de descenso y repliegue. Pero esto no significa que haya una relación directa en momento de ascenso y repliegue social con momentos progresistas y luego conservadores. Hay progresismos que han llegado al gobierno como fruto inmediato o posterior de una oleada social de protesta (Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile), pero también hay gobiernos progresistas que se han instalado sin el apoyo de una gran movilización social (Uruguay, Paraguay, Brasil o México). También hay gobiernos progresistas que se han mantenido a lo largo de los flujos y reflujos de la movilización social (Bolivia).

Pese a ello, el progresismo en su primera oleada dura cerca de 15 años y en algunos casos más. Pero lo que lleva a que en esta segunda oleada la probabilidad de su duración sea más corta o intermitente es la fragilidad o los límites manifiestos del nuevo programa progresista y del propio programa restaurador. Esto es lo decisivo hoy. Es la cualidad del tiempo presente. Por un lado, el conservadurismo sólo ha recalentado el enmohecido neoliberalismo de los años 90 del siglo XX, envolviéndolo en una retórica autoritaria y enfurecida. No es un nuevo modelo de economía, Estado y sociedad que supere las contradicciones que dieron lugar al progresismo. Es el antiguo programa, sólo que a palos. El progresismo tampoco lleva ahora un programa de grandes reformas que no sea restituir y administrar lo que se hizo en la primera oleada, que en los hechos ya comenzaba a mostrar límites y lento agotamiento. Entonces surge un tiempo de estupor general porque ninguna propuesta logra proyectarse en un tiempo largo; ninguna es portadora de un optimismo histórico capaz de jalar la energía, el entusiasmo y la esperanza de la mayor parte de la sociedad a mediano y largo plazos. Son proyectos de horizonte corto, de adhesiones moderadas, de entusiasmos evanescentes. Incluso los progresismos que emergen ahora por primera vez, si bien pueden tener probabilidades de extenderse un poco más en el tiempo, no lo hacen como constructores de un modelo de economía, Estado y sociedad de largo aliento. Se mueven también en la transitoriedad.

Así será en tanto el programa conservador, como el programa reformador, no logre trazar un horizonte creíble y posible de transformación social capaz de producir un nuevo horizonte predictivo de largo plazo anclado en las expectativas de la mayoría de las clases laboriosas. Pero la sociedad en su conjunto, tarde o temprano, abrirá su espacio de disponibilidad colectiva para buscar, reclamar y abrazar un principio de certidumbre estratégico, el que sea, pero que otorgue certidumbre. Ninguna sociedad se estabiliza en la incertidumbre estructural; necesita aferrarse a una certeza. Si lo hace sólo en torno a la propiedad, será un horizonte reaccionario. Si lo hace en torno a la igualdad y la comunidad, será progresista o revolucionario.

Por eso estos tiempos de caos global, de incertidumbre predictiva, que acontece cada 40 o 50 años, es el tiempo más creativo de porvenir que excepcionalmente acontece en la historia social. Es lo que precede a la inevitable estabilización. Lo que las izquierdas tenemos que hacer es luchar para que este decantamiento social sea precisamente el de la igualdad y la emancipación colectivas. Si no lo hacemos en la siguiente década y dejamos que triunfe la salida reaccionaria planetaria, no habrá posibilidad de cambiar el curso de la historia de aquí a medio siglo.

China y Estados Unidos: ¿del conflicto económico al militar?

José Valenzuela Feijóo

CAPITALISMO, CRECIMIENTO DESIGUAL Y POTENCIAS HEGEMÓNICAS

Con el advenimiento del capitalismo bien se puede sostener que emerge el fenómeno del crecimiento económico como dimensión clave de las nuevas sociedades; y si bien se expande por todo el globo terráqueo, lo hace generando una fuerte desigualdad. Se configura muy pronto un polo desarrollado o centro del sistema; y por el otro, un polo subdesarrollado o periferia, espacio donde vive buena parte de la población mundial (entre un 80% o 60% del total). Aquí, si bien hay crecimiento respecto a fases previas, es muy inferior al que experimenta el centro. O sea, parece operar una tendencia de largo plazo a la desigualdad creciente[1]. Otro rasgo clave es la existencia de una potencia hegemónica, la que suele extender su dominio a buena parte de la periferia y que es cambiante en el tiempo.

En los países centrales también se observa disparidad en materias de crecimiento, por lo mismo suele darse un periodo histórico en el que tal o cual país funciona como líder o potencia hegemónica, para luego avanzar a otro periodo en que es otra la potencia dominante. Por ejemplo, se habla de Holanda, Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte en la gran superpotencia, abrumadoramente superior en lo económico y

1 Según Maddison, la diferencia entre el PIB per cápita del centro versus el de la periferia fue de 1.3 en 1500, de 1.65 en 1700, de 1.97 en 1820 y de 6.92 en 1998. Cfr. A. Maddison, «La economía mundial. Una perspectiva milenaria», OCDE *y Mundo Prensa*, Madrid, 2002, p. 28. En el presente siglo, si no se toma en cuenta el papel de China en un contexto de lento crecimiento en el centro y la periferia el diferencial del ingreso per cápita se modifica poco.

lo militar. Digamos también que se habla de un mundo bipolar, pues también surge un campo socialista liderado por la URSS y que compite fuertemente con el bloque liderado por EU. En el cuarto de siglo que le siguió, Europa y Japón parecen darle alcance a EU. También se observa un campo socialista que funciona con muy altos ritmos de crecimiento, pero luego, en el último cuarto del siglo XX, el campo socialista se derrumba y el deterioro de EU respecto a Japón y Alemania parece detenerse. Es el periodo de un mundo unipolar con el dominio irrestricto de EU en lo económico, en lo político-militar y en lo ideológico. Son los tiempos en que el *american way of life* se torna el ideal soñado y buscado. Con todo, al iniciarse el siglo XXI (o antes) aparece un nuevo desafío: el de China.

2. EL DESAFÍO CHINO. LOS DATOS BÁSICOS

Este país viene desde muy abajo y de un periodo en que bajo la dirección de Mao Tse Tung se buscó avanzar al socialismo, proyecto que fue cancelado y que ha dado lugar al despliegue de una vía capitalista en que el país crece a ritmos desaforados[2] y empieza a desafiar a la que todavía es la gran superpotencia: Estados Unidos. Pareciera que este país sigue siendo la primera potencia mundial, pero pudiera ser que China lo esté alcanzando y hasta superando. Para el caso, conviene recordar algunos datos básicos[3].

En términos del producto por habitante, usando tipos de cambio de paridad, el FMI estima que en el 2015 el PIB per cápita de EU llegaba a los $U.S. 52,704 y el de China a $U.S. 13,572. O sea, China se situaba en un 26% del nivel de EU, y como el diferencial de tasas de crecimiento es muy diferente, el desnivel se va reduciendo más y más[4]. No está de más señalar: en la actualidad, la población total de China equivale a 4.3 veces la de EU, por consiguiente, si el PIB per cápita de China es igual a un 23% o más del de Estados Unidos, el PIB global de China será superior al de EU. Algo que ya se viene dando.

Entre 2000 y 2019, el PIB global de China crece al 9.4% promedio anual; el de EU, al 1.9%. O sea, el PIB chino crece casi cinco veces más rápido. Y se debe agregar que durante la pandemia también hay una fuerte disparidad en favor de China, en lo cual resulta clave la política sanitaria de su gobierno, aunque de esto casi nada se informa en la prensa. Durante 2020, el peor año de la pandemia, el PIB chino no descendió (subió 2.2%). En mayo de 2021 la tasa de mortalidad (muertos por millón de población) fue de 3 en China y de 1,800 en EU. En China, las vacunas se declararon bien público y en Estados Unidos funcionan como mercancías y generaron fortunas siderales. Según Oxfam, «los monopolios de Pfizer, Biontech y Moderna han convertido en milmillonarias a cinco personas durante la pandemia y han ganado más de mil dólares de beneficios por segundo para sus empresas; sin embargo, menos del 1% de sus vacunas han llegado a las personas de países de renta baja»[5]. Conviene también apuntar que la pandemia ha impulsado un descenso serio en los niveles del PIB de EU. En los inicios de 2022, la recuperación viene experimentando problemas mayores, los que incluso amenazan con una recesión. En este contexto, en 2020 las ventas de armas de EU, según el Departamento de Estado, cayeron un 21%. Por lo mismo, las tentaciones para usar el aumento del gasto militar como palanca antirrecesión no pueden sino reforzarse.

En términos globales, el PIB total de China ya supera al de Estados Unidos. Usando tipos de cambio de paridad, los pesos relativos del PIB de China y Estados Unidos (como por ciento del PIB mundial) evolucionan como lo muestra el cuadro I que sigue.

Cuadro I: China y *EU*, pesos relativos del *PIB* (respecto del *PIB* mundial)

País	% del PIB mundial 2000	% del PIB mundial 2019	China/EU 2000 2019
China	6.4 %	17.3%	30.6% 109.5%
EU	20.9 %	15.8 %	

Fuente: Junfu Zhao, «The political economy of the U.S.-China Technology War», en *Monthly Review*, núm. 3, vol. 73, july-august, 2021

¿Por qué es tan elevado el crecimiento del PIB chino, sobre todo en comparación con EU? Hay un hecho clave: el muy fuerte esfuerzo de inversión con que opera la economía china. Entre 2016 y 2020, la relación IGB/PIB ha girado en torno a un 43.2%. En el mismo periodo, en EU el valor medio del coeficiente fue de 20.8%. El esfuerzo de inversión chino es 2.08 veces superior. Si cotejamos con la tasa de crecimiento, que es 4.95 veces más alta en China, también podemos deducir que este país también opera con un coeficiente producto a capital fijo que será más de dos veces superior al de EU. Cada unidad de capital fijo adicional rinde bastante más producto en China que en EU. Durante el quinquenio 2016-2020, en China el valor del coeficiente fue de 0.218; en Estados Unidos, un sorprendente 0.09[6]. Lo cual en principio pudiera estar señalando una

2 Algunos hablan de capitalismo monopólico de Estado y de una clase dominante que se califica como «burguesía burocrática de Estado». Por otro lado, la dirección política del Partido Comunista Chino habla de «socialismo con características chinas» y también, por boca del presidente Xi Jinping, indica que el PCCh «debe estudiar el capitalismo contemporáneo, pero nunca debe desviarse del marxismo. [...] Si nos desviamos o abandonamos el marxismo, nuestro Partido perderá su alma y dirección» (*http://htv.mx/19We*).

3 Algunas cifras se podrían actualizar unos dos o tres años. Sólo agregarían que las distancias se acortan o que la superioridad ya presente de China se ha acentuado.

4 Las cifras que se manejan (salvo indicación expresa) las tomamos de los bancos de datos del Banco Mundial, de ONUDI o del FMI.

5 Cfr. Oxfam Internacional, *Informe anual*, enero, 2022, p. 19

6 Este coeficiente, en términos netos, suele designar al inverso de la intensidad de capital con que funciona la inversión neta.

baja eficiencia de la inversión, baja tasa de operación (altos márgenes de capacidad ociosa) y una asignación ramal que privilegia a sectores improductivos.

Cuadro II: China y eu, coeficiente de inversión*

País/año	2016	2017	2018	2019	2020	Valor medio
China	42.6	43.6	43.8	43.3	43.5	43.2
EU	20.4	20.5	21.0	21.0	21.0	20.8

* Inversión geográfica bruta sobre producto interno bruto, en %. Fuente: Banco Mundial.

3. DESARROLLO INDUSTRIAL

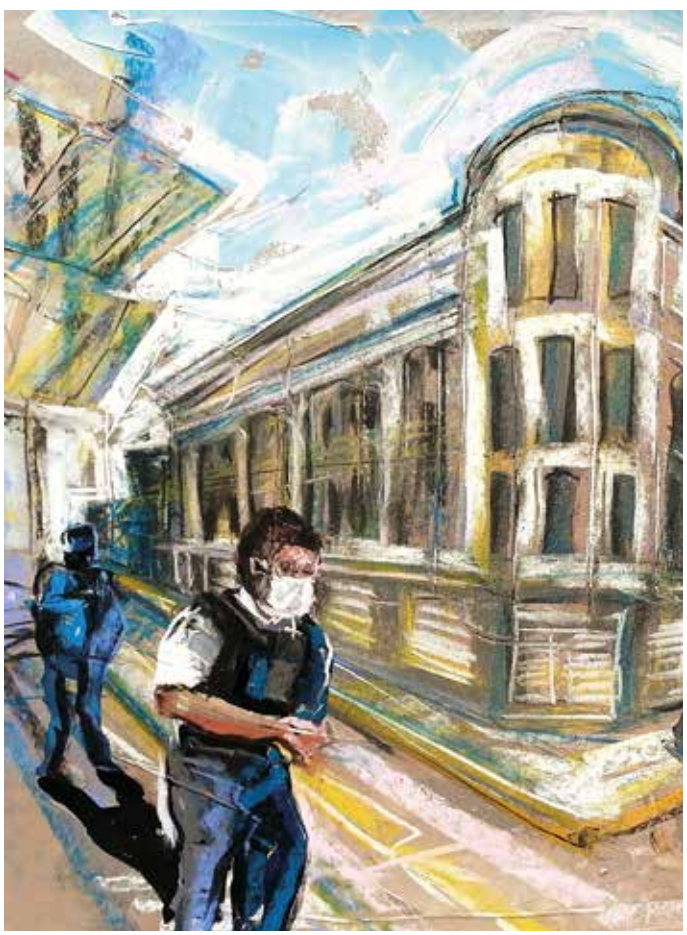
El crecimiento, recordemos una verdad que hoy parece olvidada, exige un fuerte desarrollo industrial, a lo que se debe agregar un salto en la productividad agropecuaria. Se trata de que brote un excedente de alimentos capaz de alimentar a la creciente población urbana asociada al desarrollo de la industria[7]. También puede ser importante el poder exportador: las divisas o poder de compra que éste genera, lo transforma en un productor indirecto de alimentos o de bienes de capital. Y como veremos, este factor es muy importante en China, y es muy diferente a lo sucedido en la experiencia soviética. En este caso, la industrialización se realizó en el marco de una economía casi cerrada y con ningún acceso a la inversión extranjera.

En cuanto al PIB industrial, si hacemos igual a 100 el PIB de EU, tenemos que en el año 2014 el de China era igual a 125, a precios constantes del año 2000. A precios corrientes en el mismo año 2014, tenemos que EU = 100 y China = 130. La superioridad china, en consecuencia, es evidente. ¿Qué pasa con la productividad del trabajo en el sector manufacturero?[8]. Entre 1992 y 2018, la tasa media anual de crecimiento fue:

Mundo: 2.3% anual
Países desarrollados: 3.0% anual
China: 9.5% anual

7 «El desarrollo económico implica invariablemente la industrialización», y que un poco antes o a la par tenga lugar «el crecimiento de los excedentes del sector agrícola». N. Kaldor, *Ensayos sobre estabilidad y desarrollo económicos*, Tecnos, España, 1969, p. 226

8 Países desarrollados incluye EU. Fuente: UNIDO, *Industrial Development Report*, 2020



Debe también remarcarse que el desarrollo industrial de China no se concentra en los sectores de baja tecnología.

Cuadro III: Participación de China en la producción manufacturera mundial según niveles tecnológicos

Segmentos tecnológicos según niveles de complejidad	2005	2017
Baja, complejidad	7.4 %	20.2 %
Media-baja, complejidad	8.6 %	23.7 %
Alta y media-alta, complejidad	7.0 %	21.1 %

Fuente: UNIDO, *Industrial Development Report*, 2020

Se observa que en todos los niveles tecnológicos la participación de China se eleva y tiende a triplicarse en los 12 años que van desde el 2005 al 2017. Se debe subrayar que esto también ocurre en las ramas con mayor complejidad tecnológica.

Otro dato de interés se refiere al índice CIP (desempeño competitivo de la industria) que calcula UNIDO. Este índice se desagrega en tres indicadores y busca clasificar a los países según la calidad de su desarrollo industrial. Según se muestra, el lugar de China en 2017 es muy alto (tercer lugar mundial) y está por encima de Estados Unidos.

Cuadro IV: Índice de desempeño industrial, 2017. Ranking mundial

País	Capacidad para producir y exportar manufacturas	Profundidad tecnológica y grado de avance	Impacto mundial	CIP
Alemania	5	5	3	1
China	52	8	1	3
EU	31	31	2	5

Fuente: UNIDO, *Industrial Development Report*, 2020, anexo B.1

4. ¿QUÉ SUCEDE CON LAS EXPORTACIONES?

Examinemos rápidamente la dinámica de esta crucial variable. Midiendo en dólares corrientes, en 1970 tenemos que EU explicaba un 15.7% del total mundial y China un pequeño 0.6%. En 2003, la porción de EU había descendido a un 11.1% y la de China había subido a un 4.9%. En 2015, la parte de EU experimentó un leve descenso: llegó a un 10.8%; entretanto, la cuota de China saltó hasta un 11.6%. En este marco se debe subrayar lo siguiente: *a)* China privilegia las exportaciones industriales y su componente primario-exportador es bajo. Por el lado de las importaciones, el componente primario es bastante superior; *b)* el sector exportador está bien conectado con la economía interna y genera efectos de arrastre y difusión elevados; *c)* no se debe olvidar que el sector exportador permite (al generar poder de compra externa) diversificar la oferta global interna.

5. GASTOS EN I&D

El avance científico-técnico resulta también crucial en la lucha por la supremacía económica y política. Se puede esperar que en este campo el atraso relativo de China sea mayor, no obstante, en los últimos años ya se observan cifras muy respetables y congruentes con las mostradas en el cuadro III. Consideramos el gasto en I&D asociado a la industria manufacturera (A) y la llamada «intensidad en I&D», que se entiende como gastos en I&D aplicados en el sector sobre el valor agregado del sector (B). En países seleccionados en el 2011 se tiene:

Cuadro V: Gastos en investigación y desarrollo asociados al sector manufacturero, 2011

País	Gastos en I&D (billones $U.S.)*	Intensidad I&D (B)
EU	201.36	10.56 %
Alemania	55.77	7.93 %
Japón	100.36	12.35 %
China	162.47	3.78 %

* Tipos de cambio de paridad. Fuente: UNIDO, *Industrial Development Report*, 2016, EU, 2016, p. 89

Según se puede observar, los gastos absolutos de China ya alcanzan un monto considerable: sólo son superados por EU. En cuanto a la intensidad, todavía está muy por debajo de la vigente en Japón, Estados Unidos y Alemania. En este indicador China tiene todavía un amplio campo para su expansión tecnológica. Baste pensar que si China llega a una intensidad en I&D igual a un 8.0% (es decir, semejante a la que ahora maneja Alemania), su gasto absoluto se iría a los 325 billones de dólares, cifra que superaría ampliamente a la de Estados Unidos. En el plano científico y tecnológico lo que cuenta son las cifras absolutas del gasto.

6. LA AGRICULTURA

Sin un sólido proceso de industrialización, no hay desarrollo. Pero la industrialización, a su vez, exige de un gran salto (en PIB y productividad) del sector agropecuario. Éste debe proveer la fuerza de trabajo (expulsando campesinos del agro) que exige la industrialización y el proceso de urbanización que lo acompaña. A la vez, debe producir alimentos abundantes y baratos que posibiliten un bajo valor de la fuerza de trabajo, sin que esto vaya asociado a bajos niveles del salario real. El valor hora de la fuerza de trabajo (vhft) es igual al salario real por hora trabajada (srh) dividido por la productividad del trabajo (fbs) en las ramas que producen los bienes que integran la canasta salarial. O sea, podemos escribir: vhft = srh/fbs. O bien, como srh es igual al salario real anual (sra) dividido por la jornada de trabajo anual (jta) también podemos escribir: vhft = sra/(jta)

(fbs). Se puede ver que el valor de la fuerza de trabajo puede estar bajando y, a la vez, subiendo el salario real. Algo que, claramente, se ha venido dando en China.

Asociado al valor bajo de la fuerza de trabajo, el sistema puede operar con una alta tasa de plusvalía y, asimismo, con una alta tasa de ganancia. Valga recordar que entre la tasa de plusvalía (p) y el valor-hora de la fuerza de trabajo (vhft) se da una relación inversa, del tipo: (1 + p) = 1/vhft = (jta) (fbs)/(sra). Y entre la tasa de plusvalía (p) y la tasa de ganancia (g), usando la versión más simplificada de la tasa de ganancia, se establece la siguiente relación: g = (p) (nv) / (1 + ov), en que (nv) velocidad de rotación del capital variable y (ov) composición de valor del capital. En suma, en igualdad de otras circunstancias, si se eleva la tasa de plusvalía, se eleva la tasa de ganancia con que operan los capitalistas. En todo el encadenamiento se puede visualizar el papel clave e inicial que juega la productividad del trabajo en los bienes que provienen de la agricultura. David Ricardo tenía muy claras estas conexiones. Si esto tiene lugar, podemos esperar una acumulación dinámica y, consecutivamente, altos ritmos de crecimiento[9].

En el caso de China, la agricultura parece estar cumpliendo bastante bien las exigencias de un proceso de desarrollo dinámico.

Cuadro VI: Desempeño del sector agropecuario, 2000-2020

Periodo	Valor agregado agrícola		Productividad del trabajo *	
	Variación %	Tasa anual %	Variación %	Tasa anual %
2010-2000	48.8 %	4.1 %	95 %	6.9 %
2020-2010	44.4 %	3.7 %	101 % **	8.0 % **
2020-2000	114.3 %	3.9 %	288 % **	7.4 % **

* Valor agregado por ocupado (precios constantes). ** Año 2019. Fuente: Banco Mundial

Se puede ver que el crecimiento del producto agropecuario del 4.0% anual es bastante elevado si se consideran los estándares internacionales conocidos. Por consiguiente, se puede esperar que la oferta de productos agrícolas (sin considerar las importaciones), sea capaz de satisfacer el consumo propio como el de la muy dinámica población urbana. Es aún más llamativo el crecimiento de la productividad en el sector agropecuario. Entre 2000 y 2019 casi se triplica, creciendo a un muy alto 7.4% promedio anual[10]. Por lo mismo se puede esperar que haya existido un fuerte descenso en el valor unitario de los bienes de origen agrícola.

Finalmente, como el indicador de productividad manejado utiliza en el denominador la población ocupada y no las horas trabajadas y crece bastante más rápido que el PIB agropecuario, es fácil deducir que la ocupación en el sector ha descendido en términos absolutos. Con las precauciones del caso, se podría estimar un descenso que habría girado en torno a un 45%. En suma, el sector agropecuario no sólo ha producido bienes más baratos (en términos de valor), también viene generando una abundante oferta de mano de obra para la economía urbana.

7. EL GASTO MILITAR: BREVE ALCANCE

En este muy breve recuento, también podemos dar un vistazo al poderío militar. Para ello, consideramos las cifras del gasto militar de China, Estados Unidos y el total mundial. Entre 2001 y 2014 el gasto militar mundial sube un 85% (al 4.8% anual). El gasto de Estados Unidos se eleva en un 45.9% (2.9% anual) y el de China sube un 283% (10.9% anual). La dinámica del gasto militar es tremendamente desigual (en favor de China) aunque ésta todavía está, en términos absolutos, muy por debajo de Estados Unidos. En el 2001 los gastos chinos equivalían al 12% de los estadunidenses, en 2007 al 16% y en 2014 a un 33%. Las últimas cifras disponibles señalan que en 2019 el gasto militar chino alcanzaba un 37.1% del que realizaba Estados Unidos. Además, en materia de gastos en armamento nuclear, China ya se posicionaba en un segundo lugar mundial, después de EU[11].

Cuadro VII: Gastos militares, China y eu, 2001 a 2014, dólares ctes. de 2014**

Países	2001	2007	2014	Índice *
1) Total mundial	946891.50	1548707.87	1752621.76	185.1
2) EU	418135.44	635921.05	609914.00	145.9
3) China	52179.22	103715.57	199651.44	382.6
4) EU + China	470314.65	739636.62	809565.44	172.1
5) = 2 / 4	0.89	0.86	0.75	
6) = 3 / 4	0.11	0.14	0.25	

* 2014 sobre 2001. ** Millones de dólares. Fuente: SIPRI

En el plano global hay que considerar la muy posible alianza económica de China con Vietnam y otros países del sureste asiático, incluso con Corea del Sur (esto con dificultades mayores), un bloque que sería formidable. También podría agregarse Rusia, la que le proporcionaría al bloque un poderío militar incontrarrestable. Y si a él se le pudiera agregar Japón (por ahora, algo casi imposible), el desplazamiento geográfico del centro del poder mundial sería inevitable[12]. En realidad, lo que se perfila a futuro (o ya para hoy), es una zona, la del sureste asiático,

9 Ver «Ensayo sobre las utilidades», en D. Ricardo, *Obras y correspondencia*, t. IV, FCE, México, 1960, p. 4 y s. Otros autores más contemporáneos, como Baran, Kaldor, Pinto, Prebisch y otros, han subrayado el papel clave que juega la modernización del agro (i.e., romper con las formas de propiedad tradicionales de corte feudal) en el proceso de desarrollo; si se quiere, en el denominado *take-off*.

10 Como el indicador se maneja por persona ocupada y no por hora de trabajo, cualquier variación en el largo de la jornada de trabajo tiende a debilitar la precisión del indicador de productividad.

11 Datos de SIPRI, «Military expenditure», *Data Base*, 2020

12 Sit Tsui, Erebus Wong, Lau Kin Chi y Wen Tie Jun, «One belt, one road. China's Strategy for a New Global Financial Order», *Monthly Review*, núm. 8, vol. 68, enero, 2017

que muestra un capitalismo industrializador y desarrollista del todo alejado de las miserias neoliberales y que ya empieza a constituirse en el nuevo centro de la economía mundial.

8. DESARROLLO E INTERVENCIÓN ESTATAL. PUNTEO MÍNIMO

El muy dinámico crecimiento de la economía china nos lleva a recordar una antigua hipótesis que la ideología neoliberal ha tratado de sepultar. La hipótesis, que fuera adelantada por Gerschenkron[13], indica que todo país que aspire a pasar del subdesarrollo al desarrollo deberá apoyarse fuertemente en la intervención del Estado en la economía. Tanto más, mientras más tarde en la historia busque el camino del desarrollo. Sin la fuerza de la palanca estatal no habrá un desarrollo relevante. En otras palabras, con la pura «espontaneidad del mercado» nunca se abandonará la condición de subdesarrollo periférico y dependiente. Mucho peor si tal mercado de libre ya nada tiene y está completamente subordinado al imperio de las grandes corporaciones monopólicas. Por supuesto, no se trata de estatizar en un plano puramente formal. En las nuevas condiciones el Estado debe: *a)* asumir proyectos de inversión estratégicos, con fuertes efectos de arrastre; *b)* manejar una política económica que determine una estructura de rentabilidades relativas que favorezca la inversión del sector privado en ramas clave para impulsar el crecimiento; en esas ramas, el capital privado obtendrá una alta tasa de ganancia y, además, la banca estatizada le brindará préstamos baratos y de largo plazo. Pero si el capital privado invierte en ramas no prioritarias, obtendrá una baja tasa de ganancia y ningún subsidio o ayuda estatal. Más bien, al revés.

Un segundo y decisivo aspecto se refiere al monto del excedente y sus usos. Aquí se trata de recoger lo que eran las recomendaciones de los grandes clásicos: *a)* elevar la relación excedente a producto; *b)* elevar la parte acumulada del excedente; *c)* elevar el rendimiento de la inversión. La primera relación, también conocida como «potencial de reproducción ampliada», es del todo dependiente de la tasa de plusvalía. Si ésta sube, el potencial de crecimiento se eleva. Pero debería: *1)* cuidarse que no se afecte negativamente el nivel de vida de los trabajadores; *2)* que el excedente no se use improductivamente: evitar el despilfarro. La segunda relación o «tasa de acumulación» está muy asociada al cumplimiento de las tareas de planeación económica a cumplir por el Estado. Lo clave es maximizar la tasa de acumulación, para lo cual se debe impulsar la producción de «bienes de capital-capital», o en la terminología de Marx, departamento (I.a) de la economía. El destino sectorial de la inversión es muy importante. ¿Se aplicará mayoritariamente en el departamento II que produce bienes de consumo? ¿O en el departamento I, que produce medios de producción? Y dentro de éste, ¿en la sección que produce bienes de capital que producen bienes de consumo o en la producción de máquinas que producen máquinas? La elección es crucial y como lo mostrara Feldman, privilegiar la acumulación en las ramas que producen máquinas que producen máquinas a la larga genera ritmos de crecimiento (incluyendo el consumo personal) bastante más rápidos. Amén de que favorece la asimilación del progreso técnico[14].

A la vez, y en términos complementarios, es importante contar con un sector exportador dinámico que permita financiar la importación de máquinas y equipos, con lo cual se suaviza la presión inicial por el impulso a la producción interna de máquinas que producen máquinas. En otras palabras, el sector exportador, en la medida que financia la compra de máquinas que producen máquinas, pasa a funcionar como parte del departamento (I.a). En el caso de la Unión Soviética, el peso del sector exportador y la inversión extranjera fue prácticamente nulo, por lo mismo, el esfuerzo de industrialización (incluyendo la industria militar) fue extremadamente duro. En el caso chino, las exportaciones han tenido un comportamiento extraordinario y, asimismo, el país ha recibido fuertes inyecciones de capitales extranjeros. Con un ingrediente que para nada es menor: el país no se ha doblegado a los intereses de las grandes trasnacionales y ha mantenido una autonomía política y económica que es alta.

Una tercera relación a subrayar exige maximizar el impacto de la inversión productiva, lo cual mucho tiene que ver con los modos de gestión de los procesos productivos, calificación e involucramiento de la fuerza de trabajo[15].

En el caso chino que nos preocupa, de los tres requisitos que se han indicado pareciera que se han cumplido más o menos bien, sobre todo, los dos primeros.

En la economía china el papel del sector productivo estatal es decisivo y opera un régimen de planificación que es clave y bastante diferente al que se conoció en la URSS, donde el plan

13 Alexander Gerschenkron: *a) El atraso económico en su perspectiva histórica*, Ariel, España, 1968; *b) Atraso económico e industrialización*, Ariel, España, 1970. En *a)* y *b)* hay ensayos coincidentes.

14 El modelo de Feldman se puede leer en la antología de N. Spulber, *Foundations of Soviet strategy for economic growth*, parte I, p. 174 y s., y en parte II, p. 304 y s., Indian University Press, 1965. Una presentación muy sencilla en M. Dobb, «Capitalismo, crecimiento económico y subdesarrollo», segunda parte, cap. V, Oikos-Tau, España, 1979.

15 En términos formales se puede escribir: rg = (pra) (ak) (α'), en que rg = tasa de crecimiento del producto; pra = potencial de reproducción ampliada = producto excedente (plusvalía) sobre producto; ak = tasa de acumulación (inversión sobre excedente); α' = relación producto a capital incremental. La relación entre el (pra) y la tasa de plusvalía (=p), es igual a: (pra) = (p) / (1 + p).

bajaba desde las alturas macroeconómicas hasta las unidades económicas más pequeñas y lo hacía apuntando a indicadores bastante detallados y obligatorios. En el caso chino, el plan central se concentra en metas macroeconómicas básicas y al ir descendiendo hacia los niveles más microeconómicos se va tornando bastante laxo. Es decir, las unidades económicas asumen una autonomía que puede llegar a ser significativa. Como sea, enmarcadas en directrices globales. Para el nivel de desarrollo económico alcanzado por China, esta planeación flexible parece bastante más eficiente que la aplicada en la antigua URSS, amén de ser más compatible con el actual grado de socialización de las fuerzas productivas. Claro está que, desde el punto de vista de un sistema socialista, el papel de los consejos obreros en las empresas industriales de base parece bastante reducido o más bien inexistente.

Finalmente, en China el sector financiero (banca, organismos financieros) está bajo el control del Estado y esto ha evitado su autonomización e impactos disolventes sobre el sector industrial. El sueño de Keynes (la «eutanasia del rentista»), nunca logrado en Occidente, sí parece darse en la China contemporánea.

9. ¿UNA GUERRA INEVITABLE?

En lo indicado se observa una situación que, en términos históricos, no es nueva: la potencia dominante conserva un poder militar superior, pero va perdiendo terreno en el plano económico. Al cabo, si esta tendencia se mantiene, se debe producir una muy fuerte disociación entre los poderes económicos y los militares. Entretanto, en la potencia emergente, el poder económico crece y va, hasta cierto momento, muy por encima del poder militar. Al cabo, el poder militar debería alcanzar al económico, siendo éste, muy probablemente, el momento del desplazamiento de la vieja potencia hegemónica por la nueva. En el caso que nos preocupa, si las tendencias se mantienen la mutación pudiera darse en unos 12 o 20 años más, hacia 2035-40, o en un proceso más lento, hacia 2050.

En este contexto se viene procesando una alianza cada vez mayor de China con la Rusia actual. Este país maneja hoy una potencia militar que no es inferior a la de Estados Unidos. En especial, por el lado del armamento más sofisticado, la Rusia de hoy parece igualar o superarlos[16].

También es necesario cuidarse de extrapolaciones ingenuas. Los problemas internos de China hasta ahora no resultan muy visibles, pero no son menores. El régimen de explotación de la fuerza de trabajo obrera y campesina, a partir de la reversión al capitalismo (sostenida por Teng-Siao-Ping, *et al.*) ha sido fuerte. Algunos analistas han llegado a hablar de una especie de dictadura en contra de los trabajadores del campo y la ciudad y que esta situación debería dar lugar, más tarde o más temprano, a inquietudes, reclamos y protestas. Después de todo, alguna memoria debe quedar de los tiempos revolucionarios, de la larga marcha y de la revolución cultural. Tampoco se debe olvidar: *a)* aunque la distribución sea muy regresiva, el crecimiento absoluto de los niveles de vida ha sido muy elevado y eso suaviza todo posible conflicto. El coeficiente de Gini, hacia 2015, era alto: 0.47 (estimación de gobierno) y hasta 0.55 según otras fuentes. Y el 1% más rico de la población controló el 8.0% del ingreso nacional en 1985, un 15.3% en el 2007 y un 13.9% en el 2015. Con todo, la extrema pobreza se redujo espectacularmente y llegó a un 2% hacia 2020. Todo parece indicar que con Jin Yinping se han tomados medidas para detener la regresividad[17]; *b)* como se ha dado un fuerte proceso de urbanización, el simple traslado de la fuerza de trabajo desde el campo a las ciudades da lugar a un aumento nada menor en el nivel de vida promedio de la clase trabajadora; *c)* con buen olfato, el liderazgo chino en los últimos años ha alterado la ruta del desarrollo empezando a darle más peso al mercado interno y buscando una distribución menos regresiva. En suma, si bien no se puede augurar un camino terso, una insurgencia al estilo Mao parece por ahora más que remota.

16 M. Klare: *a)* «None dare call it encirclement», 2021; *b)* «Countdown to World War III?», 2022, en *https//www.alainet.org*

17 Cfr. Simon Mohun, *a)* «A Portrait of Contemporary Neoliberalism: the Rise and Economic Consequences of the One per Cent» ; *b)* Walden Bello, «At the Summit of Global Capitalism», en *Socialist Register*, 2022

La revisión, aunque somera, basta para comprobar lo que ya muchos saben: China ha empezado a alcanzar e incluso superar el poderío económico de Estados Unidos. Fenómeno que en los próximos años se debería acentuar y que, muy probablemente, debería dar lugar a colisiones de orden mayor. Para el caso, valga recordar un texto clásico:

> el capital financiero y los *trusts* [...] acentúan la diferencia entre el ritmo de crecimiento de los distintos elementos de la economía mundial. Si la correlación de fuerzas ha cambiado, ¿cómo pueden resolverse las contradicciones con el capitalismo si no es por la fuerza? [...] En el terreno del capitalismo, ¿qué otro medio puede haber que no fuera la guerra, para eliminar la desproporción existente entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la acumulación de capital, por una parte, y el reparto de las colonias y de las esferas de influencia del capital financiero, por otra?[18].

En el caso que nos debe preocupar es claro que la política china ha sido extremadamente prudente en el plano político-militar. Y no cabe esperar que cambie en la próxima década o algo más. El tiempo, bien lo saben los dirigentes chinos, trabaja en favor de ellos. Pero no es éste el caso de EU: el tiempo y el continuismo político lo hundirá más y más. Más aún, luego del fraude electoral en favor de Biden se podría esperar de él y de su vicepresidenta (que pudiera ser más *halcón* que la misma Hillary Clinton) y sobremanera del llamado «Deep state» una agresión hasta desesperada. Documentos oficiales hablan de una nueva guerra fría que pudiera transformarse en caliente y señalan a China como el principal enemigo estratégico y la necesidad de Estados Unidos de evitar la eventual supremacía china, salvando así al «mundo libre»[19].

En el último tiempo hay claras iniciativas de Biden para cercar a China, impulsando acuerdos en Oceanía, con Australia, Nueva Zelanda y otros. Igual en otros lados, como en países fronterizos por el norte de China, los cuales, a su vez, son frontera sur de Rusia. Para el caso se vienen usando las llamadas revoluciones rojas, con muy poco éxito: la rebelión en Kasajastán que fue liquidada por Rusia en casi un segundo, muestra la agresividad y debilidad de EU. También hay claros intentos de aprovechar, al interior de Rusia y en la misma China, a minorías raciales. Las declaraciones sobre un Taiwan libre no son menos provocadoras. Para no hablar de las recientes movidas en Ucrania que ponen en riesgo de una guerra mayor a toda Europa[20]. En fin, como bien se ha dicho, lo que empieza a descomponerse más y más (véase la muy vergonzosa huida de EU y sus tropas desde Afganistán) es todo el orden internacional construido por EU. Como escribe S. Singh, «ha llegado a ser obvio que EU ya no tiene la fuerza militar y económica para mantener su hegemonía global. No obstante, EU desea mantener su hegemonía a cualquier costo, aunque esto pueda conducir a la más destructiva guerra mundial»[21].

La decadencia del imperio no sólo se observa en el plano internacional. En EU, las cúpulas políticas se desacreditan: a fines de 2022 hay elecciones y todo indica que Biden sería derrotado, con lo cual se encontraría con un parlamento adverso. Inclusive, diversos analistas observan una escalada del conflicto interno y se ha llegado a hablar hasta de una posible guerra civil[22]. Este juicio parece exagerado, pero sí es muy evidente que hay un proceso de deslegitimación nada menor del poder político.

En el plano internacional, el recurso de la guerra no es nuevo (¿acaso no es la continuación de la política por otros medios?) y se sabe lo brutal de sus costos. Pero hay un dato nuevo: ¿qué puede suceder cuando ambos bandos son potencias nucleares? ¿Podría resistir el mundo una guerra con ataques nucleares masivos por ambos lados? ¿No se llegaría a eliminar la existencia humana? Podríamos también suponer o simplemente desear que antes esa humanidad se levantará para poner un alto a tamaño destino. Y que quizá lo hará enarbolando el lema de Rosa Luxemburgo: «socialismo o barbarie».

18 V.I. Lenin, «El imperialismo, fase superior del capitalismo», en *Obras escogidas*, t. 1, Editorial Progreso, Moscú, 1974, p. 771 y 773

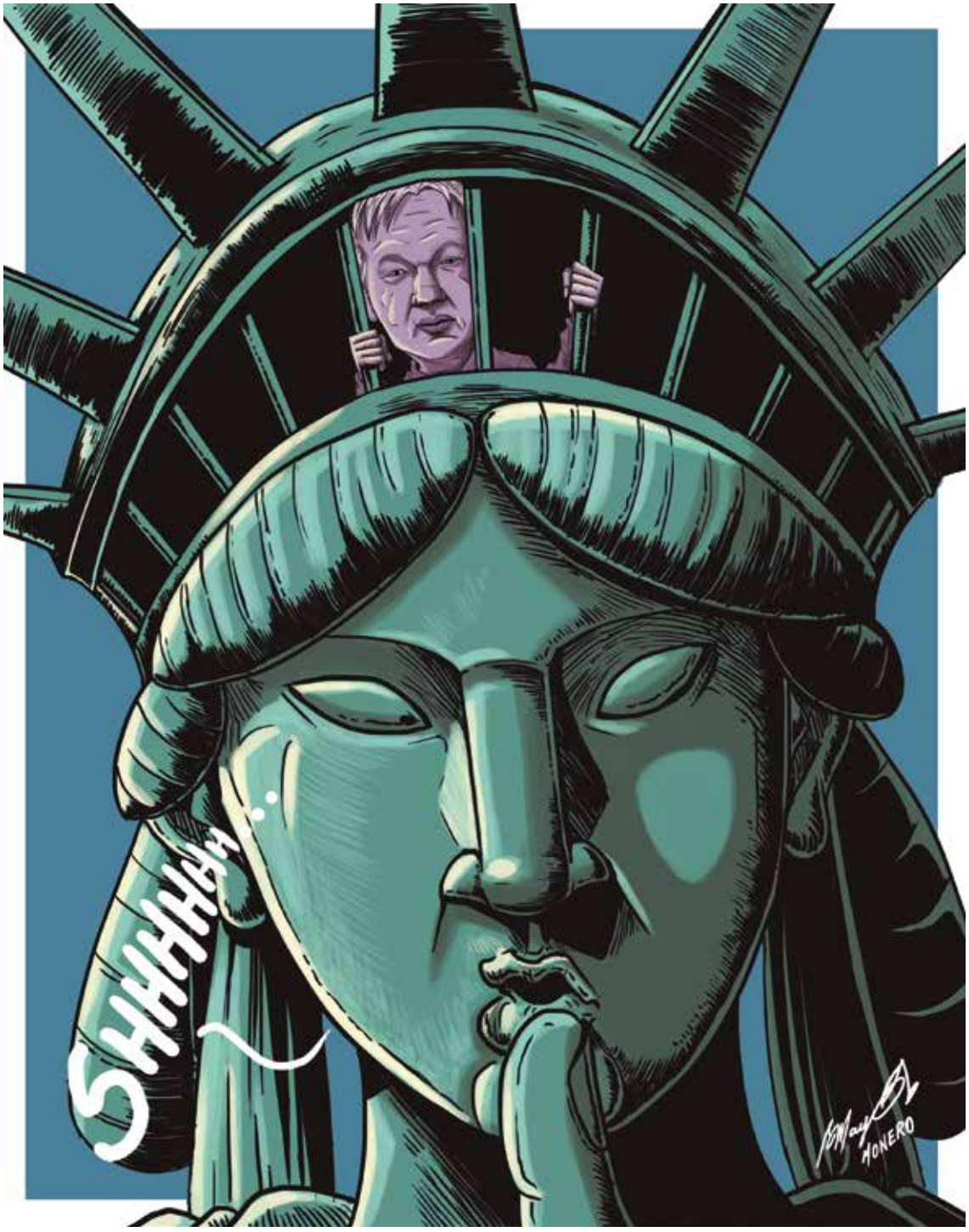
19 Un excelente análisis en John Bellamy Foster, «The New Cold War on China», en *Monthly Review*, núm. 8, vol. 68, January, 2017. La postura oficial de EU sobre China se puede leer en *United States Strategic Approach to the People's Republic of China*, White House, 2021. Se trata de un informe muy descarnado y que deja en claro la postura estratégica de EU, en contra de China y a favor de conservar su superioridad estratégica.

20 No es fácil encontrar razones valederas para la postura de EU en Ucrania. Analistas chinos indican que EU busca: *a)* legitimar su presencia militar en Europa, reforzando a la OTAN y envenenando las relaciones entre Rusia y la Unión Europea (Alemania y Francia, en especial); *b)* crear incertidumbres en Europa para provocar fugas de capital hacia EU, lo que ayudaría a combatir la inflación en dicho país; *c)* usar el conflicto en Ucrania para generar problemas en los nexos China-Rusia. Salvo el punto *a)*, las otras causales no parecen muy decisivas. Ver Yang Sheng y Xu Keyue, «US needs Ukraine crisis to harm European economy, and legitimize its military presence». Cfr. *Global Times*, 13 feb., 2022. Otros analistas apuntan a la proximidad de elecciones parlamentarias en EU. Todo apunta a una derrota de los demócratas y en EU se ha hecho costumbre desatar guerras (en el extranjero) para encender el patriotismo y cosechar los votos que hacen falta.

21 Sawraj Singh, «America risking destructive world war to maintain hegemony», en *Pravda*, edic. en inglés, 11 febrero, 2022

22 Un recuento pormenorizado de los problemas de EU, en J.B. Foster, obra citada. También, ver Wim Dierckxsens y Walter Formento: «Multipolarismo vs. Unipolarismo: amenaza de guerra o caída del imperio», en *América Latina en movimiento* (*https//www.alainet.org*). Ver también los numerosos y lúcidos trabajos sobre el tema que aparecen en la página electrónica de *resistir.info*, periódico electrónico de Portugal, dirigido por Jorge Figuereido.

CARTÓN POLÍTICO



El silencio de los inocentes, Mayo Monero